

TRABAJO FIN DE GRADO

**LA PRIMAVERA ÁRABE DIEZ AÑOS DESPUÉS:  
CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES EN EL  
MUNDO ÁRABE**



Un análisis de la situación geopolítica y social de los países que engloban el Magreb y Oriente Próximo tras los sucesos conocidos como la Primavera Árabe así como el futuro a corto y medio plazo de la democracia dentro del mundo árabe

**GRADO EN PERIODISMO**



Autor: **Diego Hernández Pérez**

Tutoría: **Eloy Arias Castañón**

Sevilla, junio de 2020

## **RESUMEN**

Este estudio hace un análisis de la situación del mundo árabe una década después del conflicto civil que fue conocido como la primavera árabe en el año 2011. Una vez pasó el grueso de los acontecimientos (2011-2013) se ha producido un descenso claro de las noticias e informes de cual es la situación que cada uno de estos países viven tras diez años de las revueltas que cambiaron por completo a esta zona del mundo. Además de repasar los momentos más importantes en estos diez años, el trabajo tratará de esclarecer si la primavera árabe sirvió para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de cada uno de los países, si siguió igual con algunos cambios menores o si este hecho histórico acabó por destruir una zona tan frágil del mundo. Los países tratados en este estudio son los pertenecientes al Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), los reinos de la península arábiga (Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen y Omán) y los países cercanos al mediterráneo (Siria, Líbano y Jordania).

Además, este trabajo tratará temas como la influencia del terrorismo yihadista, la incapacidad del mundo árabe de llevar a cabo un proceso democrático y las influencias extranjeras en la región, así como las crisis generadas por los conflictos tales como la de los refugiados o la inmigración ilegal.

Palabras clave: Primavera árabe, revuelta, autoritario, régimen, democracia, yihadismo, guerra civil, represión.

## **ABSTRACT**

This paper analyzes the situation in the Arab world a decade after the civil conflict that was known as the Arab Spring in 2011. Once the bulk of the events (2011-2013) have passed, there has been a clear decrease in the news and reports on the situation of each of these countries after ten years of the revolts that completely changed this part of the world. In addition to reviewing the most important moments in these ten years, the work will try to clarify whether the Arab Spring served to improve the living conditions of the citizens of each of the countries, whether it remained the same with some minor changes or whether this historic event ended up destroying such a fragile area of the world. The countries covered in this study are those belonging to the Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt), the kingdoms of the Arabian Peninsula (Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Yemen and Oman) and the countries near the Mediterranean Sea (Syria, Lebanon and Jordan).

In addition, this paper will address issues such as the influence of jihadism, the inability of the Arab world to carry out a democratic process and foreign influences in the region, as well as the crises generated by these conflicts such as refugees or illegal immigration.

Keywords: Arab Spring, revolt, authoritarian, regime, democracy, jihadism, civil war, repression.

## ÍNDICE

<b>1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>1</b>
<b>3. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>4. LA DEMOCRACIA TUNECINA.....</b>	<b>3</b>
<b>5. DESPOTISMO ILUSTRADO ÁRABE.....</b>	<b>9</b>
<b>6. RENOVACIÓN AUTORITARIA.....</b>	<b>18</b>
<b>7. ESTADOS FALLIDOS.....</b>	<b>30</b>
<b>8. AISLAMIENTO POLÍTICO.....</b>	<b>44</b>
<b>9. CONCLUSIONES.....</b>	<b>50</b>
<b>10. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>59</b>

## **JUSTIFICACIÓN DEL TEMA**

La justificación de elección del tema se debe principalmente a dos factores. El primero es el décimo aniversario de la primavera árabe y el segundo es el poco tratamiento de los medios generalistas españoles de la situación de estos países una vez acabó la intervención externa de nuestro país en estos países. El hecho de que la población general española desconozca cual es el sistema político de Túnez tras derrocar a Ben Ali, la de Egipto, cual es la situación de Libia y Siria tras las guerras civiles que empezaron hace diez años o incluso un país vecino como Marruecos.

Veía interesante hacer un análisis de cada uno de los casos y intentar explicar el porque la ola democrática conocida como la primavera árabe triunfó totalmente en algunos países, parcialmente o directamente ha fracasado. En este trabajo se busca concluir si la primavera árabe ha traído buenas consecuencias a la población civil de estos países, si se ha producido algún avance democrático en la región y si realmente es posible asentar un régimen democrático parecido al de occidente en el mundo árabe. Este trabajo también busca investigar las causas y consecuencias del éxito o fracaso de estas revoluciones y tratar como estos conflictos han afectado al yihadismo radical, a la crisis migratoria/refugiados y a la política exterior de las potencias mundiales en esta región.

## **OBJETIVOS**

Los objetivos que se persiguen en este trabajo de análisis son:

- Analizar las situación previa del mundo árabe antes de 2011 y las causas de la primavera árabe.
- Explicar las medidas tomadas por cada uno de los regímenes para apaciguar la situación y buscar similitudes y diferencias entre los diferentes países.
- Concluir que aspectos comunes han hecho que la democracia se asiente o no en cada uno de los países.
- Argumentar el porque la democracia es o no viable en el mundo árabe.
- Analizar la política exterior de los países occidentales, entre ellos España, hacia los conflictos del mundo árabe y buscar los intereses reales de las intervenciones armadas.
- Concluir si la primavera árabe ha sido un buen suceso histórico para las condiciones de vida de la población civil del mundo árabe.
- Explicar la situación a corto y medio plazo de cada uno de los regímenes y si existe la posibilidad de instaurar un sistema democrático en los próximos años.

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centrará en analizar las consecuencias geopolíticas, civiles y judiciales que la ola democrática conocida como la primavera árabe ha dejado en los países del Magreb y Oriente Próximo. En concreto tratará los casos de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen, Omán, EAU, Qatar, Bahrein, Jordania, Líbano y Siria. El trabajo se estructurará en bloques según el camino político que hayan seguido estos estados a raíz de las revueltas de 2011, siendo los estos posibles caminos la instauración de un sistema democrático (Túnez), un aperturismo liberal dentro del autoritarismo (Marruecos y Jordania), un reforzamiento del régimen autoritario (Egipto y países de la península arábiga), un estado fallido (Libia, Siria y Yemen) y el aislamiento político (Líbano y Argelia).

Para ello el análisis partirá desde los antecedentes a 2011, ya que es vital conocer que demandas existían en aquella época para ver si en 2021 estas han sido logradas o las promesas de los regímenes han caído en saco roto. Además, la situación de cada estado y de cada líder absolutista era distinta, por lo que conocer su historia nos sirve para explicar el porque se han producido los cambios políticos.

Una vez dentro de los sucesos de la última década, el análisis se centrará en varios puntos clave para tratar de explicar el éxito o fracaso de los procesos democráticos. El primero es la cultura democrática previa a 2011 (existencia de partidos opositores, sindicatos de trabajadores, asociaciones de estudiantes, etc) que como veremos era muy pobre en la mayoría de casos. El segundo es el papel de las fuerzas armadas, tanto el ejercito como el servicio de inteligencia, y como se posicionaron en el conflicto, si fueron una llave hacia la democracia o decidieron ocupar ellos el vacío de poder. El tercero es el papel de los líderes políticos, en especial de los islamistas moderados y del partido plurinacional conocido como los Hermanos Musulmanes. En este punto se verán las principales diferencias entre la cultura democrática europea y la árabe, así como se concluirá si dentro del islamismo y sus leyes es viable un sistema democrático. El tercero será estudiar si la proliferación de grupos yihadistas (Al-Qaeda y sus filiales o Daesh) ha estado ligado a los sucesos de 2011 y averiguar las causas. También en este punto se estudiarán problemas surgidos durante la última década como las mafias de inmigración del Sahel o la crisis de los refugiados, así como el poder que ha otorgado a países como Turquía o Marruecos respecto a la Unión Europea. Por último, se buscará aclarar los intereses detrás de las intervenciones militares y logísticas de las potencias mundiales (EEUU, UE y Rusia) en los conflictos locales de la zona así como analizar el papel de Arabia Saudí e Irán, los dos gigantes políticos enfrentados del mundo árabe, y las consecuencias que su guerra fría ha traído a cada uno de los estados de la región.

La finalidad última de este trabajo será buscar una respuesta sobre dos cuestiones surgidas a raíz de la primavera árabe. La primera es si un sistema democrático es viable dentro de la cultura, las leyes y las costumbres del mundo árabe, así como enumerar las condiciones que tienen que darse para que esta florezca. La segunda será dirimir si la primavera árabe y todos los sucesos surgidos a raíz de esta han generado un beneficio final para la población civil de los países implicados, si la situación es la misma que antes de las revueltas o si ha provocado un empeoramiento de las condiciones de vida, derechos y libertades de los ciudadanos.

## **LA DEMOCRACIA TUNECINA: LA FLOR DENTRO DEL DESIERTO**

Túnez, país que se alza entre las ruinas del antiguo Cartago y la colonización francesa del siglo XX, tuvo el cambio político más relevante de todo el mundo árabe tras las protestas iniciadas en diciembre de 2010 y que se extendieron durante todo 2011. De hecho, con la llegada del gobierno dictatorial de Erdogan a Turquía, Túnez es considerada por diversas organizaciones internacionales como la única democracia de Oriente Medio y el Magreb (en inglés referido como Middle East and North Africa o MENA) y por ende la única transición democrática exitosa de la primavera árabe

Cuando hablamos de Túnez previo a la llamada Revolución de los Jazmines hablamos de un país bajo el control de un régimen aparentemente multipartidista pero que era reconocido internacionalmente como una dictadura dirigida por el RCD (Agrupación Constitucional Democrática) y su líder Zine El Abidine Ben Ali, que tenía el poder desde un golpe de estado en 1987. Estamos hablando por tanto de casi 24 años de dictadura de Ben Ali, tiempo más que suficiente para no solo tener un control total de las fuerzas armadas, sino también de las instituciones civiles, políticas y judiciales. El régimen de Ben Ali permitía la existencia de ciertos partidos políticos, como Ettajdid (centro-izquierda), e ilegalizó a otros como el Partido Comunista de Obreros Tunecinos o el partido laico Conferencia por la República.

Como el resto de dictadores árabes, Ben Ali y su gobierno mantenían una relación cordial con los gobiernos occidentales, garantizando la lucha contra la inmigración ilegal y contra los grupos terroristas a cambio del reconocimiento internacional del régimen (Geisser y Béchir, 2012, p.323, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.54). No sería hasta la huida de Ben Ali que países como España reconocieron el nuevo gobierno constitucional de Túnez como el legítimo.

Pese a que hay que reconocer que en Túnez existieron revueltas durante todo el mandato de Ben Ali (especialmente en la cuenca minera de Gafsa) y ya existían asociaciones obreras luchando por los derechos civiles, el verdadero cambio se produce a raíz de la crisis económica de 2008 y el suicidio de Bouazizi.

La crisis económica llevo a Túnez a una situación insostenible, con los precios de los productos básicos en una subida histórica y un paro juvenil en la misma situación (Melián Rodríguez, 2016, p.76). Esto se sumó a una falta de expectativas para una comunidad universitaria obligada a emigrar a Francia o países cercanos o la desigualdad en el reparto de riqueza entre las élites gobernantes y las clases bajas obreras. La situación explotó cuando el Fondo Monetario Internacional impuso duras medidas de austeridad al país que obligó al régimen a disminuir casi al mínimo la inversión educación, vivienda o sanidad. Y hay que tener en cuenta que todos estos problemas económicos se dieron en un estado deficitario y sistemáticamente corrupto. Un polvorín destinado a estallar.

Como en todos los grandes conflictos históricos bastó un hecho individual, el sacrificio del uno por el conjunto, para dar rienda suelta a un cambio que llevaba años ya gestándose. El 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi, un joven tunecino, se inmolaba en protesta por la represión policial que le había arrebatado su puesto de vendedor (Melián Rodríguez, 2016, p.78). Su suicidio, ardiendo vivo enfrente del Palacio de Gobierno de la ciudad de Sidi Bouzid, fue la chispa que encendió la Revolución de los Jazmines. Este hecho, que se puede considerar aislado, puede resultar hasta insignificante respecto a otras muertes históricas que generaron conflictos internacionales, como el atentado como Francisco Fernando de Austria que originó la Primera Guerra Mundial o el asesinato de Calvo Sotelo que provocaría el alzamiento de Francisco Franco. La muerte Bouazizi, un simple vendedor ambulante, provocaría el mayor cambio vivido en el mundo árabe desde la descolonización. Este hecho, quizás solo comparable a las recientes protestas generadas tras la

muerte de George Floyd pero a una escala mucho mayor, fue lo que desencadenó la caída del régimen de Ben Ali y la aparición del Túnez constitucional que hoy conocemos.

Tras más de un mes de protestas y represión policial, es el 14 de enero de 2011 cuando podemos empezar a hablar de un proceso de transición a la democracia en Túnez (Melián Rodríguez 2016, p.85). Dentro de esta transición nos encontramos con algunos elementos diferenciadores respecto al resto de intentos de democratización en el mundo árabe, como son el apoyo de las fuerzas armadas al nuevo gobierno tras rebelarse contra Ben Ali, la existencia de partidos de la oposición tanto legales como ilegales, el transfuguismo por parte de los miembros del régimen a la nueva realidad democrática y la nula intervención internacional en el país, clara diferencia de casos como Libia o Siria.

El primer gobierno provisional de Túnez, designado por el propio Ben Ali, quedó dirigido por Mohamed Ghannouchi como primer ministro del país y con Fouad Mebazaa como presidente de la cámara de diputados y presidente interino del país. Mebazaa, ex miembro del gobierno del régimen en distintos puestos a lo largo de su carrera política, mantuvo a Ghannouchi como primer ministro pese a las protestas populares. Se iniciaba entonces un proceso democratizador dirigido por antiguos miembros del régimen y apoyado por las fuerzas moderadas de la oposición.

Ya en febrero de 2011 el gobierno provisional se enfrentó a su primera crisis, y es que eran muchas las amenazas que querían acabar con el joven gobierno de Mebazaa. Tanto fieles a Ben Ali que ansiaban la vuelta del dictador exiliado en Arabia Saudí como fuerzas extremistas islamistas y de izquierdas que querían continuar la revolución pese a la salida de Ben Ali. Ante la gran inestabilidad que se había producido en el país y para garantizar la continuidad del gobierno se produce la dimisión de Ghannouchi y el ascenso al puesto de primer ministro de Béji Caid Essebsi, otro antiguo miembro del régimen pero con un papel clave en el derrocamiento del mismo.

Pese a que las elecciones se postergaron bastante en el tiempo y esto podía indicar debilidad del gobierno provisional, Mebazaa pronto se aseguró el apoyo de la Unión Europea para los movimientos democratizadores árabes y ayudas económicas internacionales para el país. Junto a esto, realizó medidas para expulsar a los restos del RCD de las instituciones tales como denegarles el sufragio pasivo a sus miembros y a los partidarios del dictador (Melián Rodríguez, 2016, p.86).

Antes de las elecciones del 23 de octubre de 2011, los partidos políticos tunecinos firmaron el Pacto Republicano, reconociendo la naturaleza árabe-musulmana del país, la separación de poderes o elecciones democráticas libres (Khader, 2012, p.12, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.88), y la Declaración de la Transición Democrática, protegiendo la ley electoral, garantizar elecciones libres y el compromiso a formar gobierno. Estos dos pactos sustentaron el gobierno surgido de la históricas elecciones del 23 de octubre, las primeras celebradas libremente en el mundo árabe.

De todo este proceso de transición podemos sacar en claro que no hubiese sido posible sin la congruencia de tres figuras indispensables: el ejército, los miembros del régimen que apoyaron el proceso democrático y los partidos políticos de la oposición. Que todas estas fuerzas existieran mucho antes de 2011 fue clave para que estuviesen lo suficientemente asentadas para llevar a cabo una transición exitosa. En este aspecto tiene bastantes similitudes con la transición española, considerada ejemplo internacional en procesos democratizadores pacíficos. Si bien la gran diferencia respecto al resto de países del entorno no fue la vía occidental, sino la ruptura total y completa con el régimen de Ben Ali, tanto a nivel político como militar. Esto último fue clave, ya que la revolución no podía haberse sostenido sin el apoyo del ejército al pueblo y la rebelión del mismo contra Ben Ali. Este apoyo militar al pueblo es lo que hizo exitosa la transición tunecina y

no la de otros países como Egipto, Siria o Libia, donde el ejército o gran parte de él sostuvieron a los regímenes autoritarios (Melián Rodríguez, 2016, p.88).

Por tanto podemos hablar de una transición eficaz hacia la democracia con la celebración de las elecciones del 23 de octubre de 2011. En estos comicios se dio una participación muy alta, un pluripartidismo excesivo (casi 30 grupos parlamentarios) y la victoria del partido islamista moderada En-Nahda, que logró 90 escaños de 217. En-Nahda o Partido del Renacimiento es un partido de centro-derecha islamista que ya existía durante el régimen de Ben Ali. Sin embargo su papel durante la revolución y su afán democratizador le hacen junto a Nidaa Tounes (partido de Caid Essebsi) el gran sostén de la democracia en Túnez. Su ideología, similar a lo que serían las democracias cristianas en Europa con un tono claramente moderado y huyendo de la imposición de la ley islámica.

Junto a En-Nahda destacaron los resultados de Congreso para la República (centro-izquierda laica) con 29 escaños, Petición Popular por la Libertad, la Justicia y el Desarrollo (conservadores) con 26 escaños y Ettakatol (socialdemocracia secular) con 20 escaños (Melián Rodríguez, 2016, p.89-90). El primer presidente del país, encargado de redactar la Constitución, fue Mocef Marzouki, de Congreso para la República, sucediendo en el puesto a Mebazaa y convirtiéndose en primer presidente democráticamente elegido de Túnez. Marzouki propuso a Hamadi Jebali, secretario general de En-Nahda, como primer ministro de Túnez y este formó gobierno en coalición con Congreso para la República y el Partido Republicano (quinto en las elecciones con 16 escaños).

Partido	% Votos	Escaños
En-Nahda	37.04	89
CPR	8.71	29
Aridha Chaabia	6.74	26
Ettakol	7.03	20
PDP	3.94	16
La Iniciativa	3.19	5
Polo Democrático Modernista	2.79	5
Afek Tounes	1.89	4
PCOT	1.57	3
Otros	27.10	20
Total	100	217

*Resultados primeras elecciones en Túnez. Fuente: National Democratic Institute (2011. p.19)*

El gobierno tripartito dirigido por Jebali y Marzouki tuvo como prioridad redactar la Constitución de Túnez, cuyo texto provisional fue aprobado el 11 de diciembre de 2011. En este texto se adoptaba como forma de gobierno la de un República semi-presidencialista y se otorgaban amplios poderes al ejecutivo, garantizaba la independencia del poder judicial y delegaba en el ministerio del interior la potestad de organizar elecciones.

Tras esto se produjo la primera legislatura democrática de Túnez, que quedó bajo el gobierno de coalición dirigido por En-Nahda. Pese a garantizar las libertades civiles y democráticas, el ejecutivo de En-Nahda se topó con un clima pluralista y unos problemas estructurales tremendos. También el hecho de ser un partido ambiguo y sin rumbo de acción claro agravó los problemas del país. Según

Ignacio Fuentes Cobo y el politólogo Sami Nair “los problemas de Túnez durante la primera legislatura pueden dividirse en económicos, fronterizos e islamistas”.

Dentro de los problemas económicos nos encontramos con un país muy similar al que se levantó contra Ben Ali, y es que un cambio político no hace desaparecer problemas económicos endémicos. Túnez sigue teniendo una inflación por encima de lo normal, un paro juvenil masivo y una reparto de la riqueza desigual provocado por una corrupción todavía latente a nivel institucional.

En la frontera hemos visto como la salida de Ben Ali ha provocado la proliferación de grupos yihadistas que realizan contrabando fronterizo con armas, drogas y energías fósiles, así como el tráfico de inmigrantes. Todos estos problemas, paliados en su día por la actuación militar extrema de Ben Ali, han aparecido con la llegada de la nueva república y su todavía débil democracia.

Por último ha aparecido un gran problema en las clases bajas del país: el Islamismo Salafista. La posición débil de En-Nahda respecto al islamismo radical (Melián Rodríguez, 2016, p.107-108) ha hecho que estos grupúsculo aparezcan en las zonas donde claramente existe un vacío de poder y han creado grupos militares. Dentro del salafismo hay que diferenciar entre los intelectuales que buscan entrar en la vida política con partidos radicales y el yihadismo de Ansar al-Sharia, grupo terrorista con sede en el país pero que atenta fuera del mismo y que es reconocido como terrorista por las Naciones Unidas.

Pese a este terremoto político y social que actualmente sufre el país, la democracia ha seguido adelante, presentando elecciones libres y democráticas en 2014 y 2019, con victorias de Nidaa Tounes y En-Nahda respectivamente. En la actualidad hay que destacar la entrada con fuerza en el parlamento como segunda fuerza de Qalb Tounes, partido del empresario Nabil Karoui (actualmente en prisión por lavado de dinero), y que con su política populista está ganando mucho peso en una sociedad tunecina cada día más desinteresada de la democracia y sus gobiernos. De hecho, Qalb Tounes ha denunciado más de una vez una actitud fascista del gobierno y unas condiciones de arresto muy lejos de ser propias de una democracia. Esto hace que Karoui haya ganado mucha popularidad entre los ciudadanos y se postule como favorito a romper el hasta ahora bipartidismo gubernamental entre la socialdemocracia laica y centro-izquierda islamista moderado.

Pese a todos estos problemas, Túnez sigue siendo la única flor dentro de una primavera árabe marchita. Su transición democrática, llena de problemas e inconvenientes, es ya una excepción a la norma dentro del Magreb y Oriente Próximo y Medio. Esta transición no se explica factores previos tan obvios como la demografía y unión étnica de su población. Túnez, con solo 11 millones de habitantes, es uno de los países menos poblados del Magreb y el menor en extensión de su territorio. Además, la mayor parte de la población es de raza árabe y de inclinación sunní, lo que ha acabado aislando al país de los grandes conflictos sectarios y tribales del mundo árabe. Por supuesto una mera condición geográfica y demográfica no es la que ha hecho triunfar este proceso democratizador, ya que la principal razón ha sido la unión de fuerzas políticas, tránsfugos del régimen y fuerzas armadas.

En este aspecto la comparación con la transición española es evidente. Fuerzas políticas de toda índoles se unieron pese a su rivalidad para garantizar el asentamiento de la democracia parlamentaria en Túnez. Esta moderación de las fuerzas políticas tunecinas ha impedido el choque frontal habitual entre los sectores laicos e islamistas de la población, algo que si observamos en el resto de países de la región. El ejemplo más claro lo vemos en tras las segundas elecciones en el país, donde el partido islamista En-Nahda cedió el poder de manera pacífica y democrática a Nidaa Tounes, un partido secular y socialdemócrata. Estos cambios de poder tan naturales son imposibles

de explicar sin las figuras de Rachi Ghannouchi, líder de En-Nahda, y el fallecido Béji Caid Essebsi, líder de Nidaa Tounes. Ambos políticos, junto a Mebazaa, son los grandes artífices y padres de la democracia tunecina (Melián Rodríguez, 2016, p.104).

También hay que destacar el apoyo que asociaciones obreras y sindicatos dieron al gobierno parlamentario desde un primer momento (Melián Rodríguez, 2016, p.106). Desde la convocatoria de una huelga general que sería clave para la caída de Ben Ali por parte de la UGTT (Unión General de Trabajadores Tunecinos) hasta el establecimiento del Cuarteto de Diálogo entre la UGTT, la Liga de DDHH, el Colegio de Abogados y la Confederación de Industria, Comercio y Artesanías. La labor del Cuarteto de Diálogo fue vital para evitar el desmoronamiento del país en los primeros meses de gobierno provisional y su labor fue reconocida internacionalmente en el año 2015 con el Premio Nobel de la Paz.

Por último, aunque posiblemente lo más importante, la afiliación y lealtad de las Fuerzas Armadas a la joven democracia tunecina (Melián Rodríguez, 2016, p.111). Esto que podría parecer lo normal no es sino una excepción entre sus vecinos. Solo hay mirar los casos de Argelia o Egipto, donde los militares han acaparado el poder tras la salida de los dictadores del siglo XX o en Libia, donde han convertido al país en un estado fallido dividido por dos gobiernos y decenas de señores de la guerra. En Túnez el ejercito mantuvo una postura neutral en todo momento y fueron partícipes de la caída de Ben Ali al desobedecer su ordenes de reprimir las protestas con el uso de armas de fuego (Angrist, 2013, p.550, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.104).

Pese al éxito de esta transición y la unión entre políticos, civiles y militares, Túnez afronta esta nueva década con un crisis económica acrecentada por la crisis de la pandemia del covid-19 que ha provocado una caída del 21.4% del PIB en el último semestre de 2020. Al mismo tiempo, Túnez debe hacer frente a una campaña continua de atentados yihadistas y a la creciente subida de popularidad de formaciones políticas populistas como Qalb Tounes. De hecho, Túnez afronta ahora su etapa política más convulsa desde 2011. El fallecimiento de Béji Caid Essebsi le impidió promulgar su proyecto de reforma de la ley electoral que impedía que personas encausadas judicialmente se presentasen en las listas. Esta ley hubiese impedido a Nabil Karoui, líder de Qalb Tounes, presentarse y hubiese tenido una implicación directa en los comicios de 2019. El encarcelamiento en agosto de Karoui por blanqueo de dinero solo sirvió para cernir las sospechas de que se trataba de una operación política para evitar romper el bipartidismo y no un arresto limpio. Estar en la cárcel no ha frenado a Karoui, que actualmente lidera la segunda fuerza del parlamento. También la crisis del covid-19 y el agotamiento de la población han hecho que nos replanteemos si existe la posibilidad de que la república tunecina acabe siendo reformada. Las tensiones entre Elies Fajfaj (Ettakatol), Kais Saied (presidente de la república y conservador islamista) y Gannouchi (líder de En-Nahda) han escalado a raíz de la crisis sanitaria y económica que sufre el país.

Uno de los actores internacionales que ha entrado en escena es Turquía (Melián Rodríguez, 2016, p.114). En-Nahda mantiene una ideología muy similar a la de Erdogan y Gannouchi le ha visitado varias ocasiones, invadiendo las competencias que tiene Saied como jefe del Estado. El propio Saied se mostró muy crítico con Gannouchi y le atacó promoviendo un cambio en la constitución para cambiar el actual régimen semi-parlamentario o una democracia directa. Gannouchi por su parte no ha dejado de moverse buscando apoyos internacionales, sumando al gobierno libio a su causa. La realidad es que a día de hoy existe una gran división de opiniones sobre que rumbo debe tomar el país (Melián Rodríguez, 2016, p.114). Por una parte está Saied que propone un utopismo antisistema, el gobierno liderado por Fajfaj que apuesta por el un realismo pragmático y la oposición de En-Nahda, que busca aliarse estratégicamente con el gigante turco y es contrario a estos cambios constitucionales al considerar que rompe el espíritu de 2011 y podría acabar en la

llegada de un segundo Ben Ali. Además hay que tener en cuenta la llegada de fuerzas políticas populistas rechazadas por el gobierno como Qalb Tounes o el PDL y la constante amenaza yihadista que se cierne sobre el país.

Por lo tanto, podemos hablar de Túnez como la única democracia libre del mundo árabe, pero queda por ver por cuanto tiempo se mantiene así. Ya tenemos ejemplos de breves democracias en países de cultura similar como Pakistán o Líbano y no se puede descartar que Túnez acabe cayendo de nuevo en un conflicto civil o en un giro autoritario. Sin embargo, hay que poner sobre contexto la gran crisis originada por el covid-19 y el efecto que ha tenido sobre la economía del país, al mismo tiempo del efecto contrario que se producirá cuando se vaya avanzando en la vacunación. Al mismo tiempo, hablamos de un país con fuertes lazos con Europa y el mundo occidental, algo que podría evitar una eventual vuelta del autoritarismo.

Resumiendo ya hemos podido ver como Túnez ha realizado una transición casi perfecta, bajos estándares del mundo árabe, desde el régimen dictatorial de Ben Ali a una república semi-presidencialista con garantías democráticas plenas (Melián Rodríguez, 2016, p.115) El caso de Túnez nos sirve para ponerlo en contraste con el resto de países y ver como el compromiso de las fuerzas armadas y la moderación de los grupos parlamentarios han sido vitales para poder llevar a cabo esta transición hacia la democracia (Melián Rodríguez, 2016, p.116). Pese a las continuas amenazas dentro y fuera del país, hablamos de Túnez como la única democracia del mundo árabe y la única superviviente de la primavera árabe. Un ejemplo de gestión, transparencia y transición para todo el pueblo del Norte de África y Oriente Próximo.

## **EL DESPOTISMO ILUSTRADO ÁRABE: MARRUECOS DE MOHAMED VI Y LA JORDANIA HACHEMÍ**

Cuando sucedieron las protestas populares a finales de 2010 y principios de 2011 por todo el mundo árabe los ciudadanos reclamaban un aumento en sus derechos civiles y una salida democrática de los regímenes autoritarios que dominaban la región. Hemos visto en el caso de Túnez que esta transición fue posible y que era viable la creación de una democracia en el Magreb y Oriente Próximo. Sin embargo, Túnez aquí no es la regla, sino la excepción. La mayor parte de líderes autoritarios combatieron estas revueltas para mantenerse en el poder, en la mayoría de casos de manera exitosa. Existieron dos maneras de reprimir estas revueltas, la vía armada que desembocaría en autoritarismos reforzados (monarquías del golfo) o estados fallidos (Libia, Siria o Yemen) y la vía pacífica que se basó en realizar una serie de concesiones liberales pero manteniendo las figuras del régimen. Estos son los casos de Marruecos y Jordania, dos monarquías absolutas muy cercanas al mundo occidental y que lograron mantener su régimen político evitando grandes conflictos armados.

Encontramos en estos dos países unas similitudes claras con el movimiento del despotismo ilustrado que se vivió en Europa en el siglo XVIII, cuando una ola revolucionaria (en ese caso la Ilustración, aquí la primavera árabe. Dos movimientos con varios puntos en común) obligó a los regímenes de la época a adaptarse (Prusia, Rusia, Austria) o morir (Francia). En los casos que vamos a tratar observamos que los monarcas de Marruecos y Jordania cedieron algo de poder al pueblo y realizaron cierto aperturismo o liberalización del gobierno o economía para que sus países no se vieran afectados por conflictos civiles como fue el caso de Túnez y Egipto o llevar a su reino a una guerra civil como en Libia o Siria.

En Marruecos, país más occidentalizado del mundo árabe junto a Turquía, gobierna de manera casi absolutista el rey Mohamed VI, de la dinastía alauí, que gobierna Marruecos desde 1631. Es por tanto una forma de gobierno con casi 400 años de vigencia, con una familia real muy asentada en el poder y sin una oposición relevante. De hecho, en Marruecos no se puede hablar de ola revolucionaria, sino de primavera democrática (Mehjadi, 2008). Estos es así porque el rey Mohamed VI no tardó en calmar a los protestantes, liderados por el Movimiento 20 de Febrero, anunciando el 9 de marzo un cambio político relevante en el país, dando entrada a un modelo democrático y de desarrollo nacional y otorgando poderes consultivos a partidos políticos, asociaciones y sindicatos de trabajadores.

Y es que Mohamed VI es un rey mucho más democrático que su padre Hassan II. Durante el reinado del mismo Marruecos era un régimen de monarquía absoluta con un control férreo de la oposición, con matanzas como la del Rif en 1958. En 1962 se aprobó la primera Constitución, un texto que otorgaba al rey poderes casi absolutos y mandaba por tierra cualquier intento de modernización del país (García-Luengos, 2013, p.17). Con esta Constitución, Marruecos se formalizó como un monarquía teocrática absoluta de carácter autoritaria y hereditaria. Comparando con Europa lo calificaríamos de Antiguo Régimen.

Este absolutismo despertó a los opositores a Hassan II, representados en estudiantes y jóvenes que buscaban cambios en el país (García-Luengos, 2013, p.18). Ya mucho antes de los sucesos de 2011 nos encontramos con protestas masivas en Marruecos, tales como la que obligó a declarar el estado de excepción entre 1965 y 1970 o los intentos de golpe de estado en 1971 y 1972. Durante los años setenta aparecieron grupos islamistas y marxistas que buscaban desestabilizar al régimen. El islamismo se concentró en la izquierda política y cargó contra la monarquía hasta el punto de que líderes islamistas como Abdessalam Yassine estuvo varios años detenido. Ya en los 80 la situación

era insostenible tanto a nivel político como económico, con una crisis provocada por la reducción de las subvenciones que hasta entonces daba el Banco Mundial y el FMI (García-Luengos, 2013, p.19). En 1981 y 1984 se produjeron las llamadas revueltas del pan, que dejaron centenares de muertos. Esta situación social y económica obligó al gobierno a comenzar en los años 90 la conocida como década reformista. Durante este periodo apareció el Bloque Democrático, una coalición de cinco partidos de oposición, se liberaron presos políticos y la práctica de la tortura se redujo bastante.

Por tanto, Marruecos es ya un país en camino democratizador cuando Mohamed VI accede al poder en 1999. Mohamed VI, conocido como el rey de los pobres, desató un gran sentimiento de esperanza en sus primeros meses al mando del país (García-Luengos, 2013, p.22) con discursos sobre los derechos de la mujer o el nuevo concepto de autoridad que animaban a pensar que con el nuevo monarca los cambios llegarían definitivamente al país magrebí. Sin embargo, todas estas expectativas acabarían diluyéndose en el tiempo, algo que sería marca y seña del gobierno de casi 25 años de Mohamed VI. Pese a que se llevaron a cabo algunas reformas políticas, todo el poder seguía concentrado en la figura del rey. Antes de 2011 Marruecos tuvo otros problemas de importancia, tales como la expansión del islamismo radical y yihadista a partir de 2003 (atentado en Casablanca) o las continuas crisis económicas y sociales en la primera década del milenio.

Llegamos a 2011 y no se puede hablar de la primavera árabe en Marruecos sin mencionar al Movimiento 20 de Febrero (M20F). Como el resto de movimientos ciudadanos de la primavera árabe, el M20F se organizó por las redes sociales entre estudiantes y la clase trabajadora del país. Pese a ser un movimiento democrático, no realizaron críticas directas al monarca, sino que buscaban un régimen compartido con instituciones democráticas, el fin de la corrupción sistemática y ciertas dimisiones dentro del régimen, como la del consejero real Ali El Himma. Otra de las situaciones que buscaba combatir este movimiento era el gran patrimonio de la familia real. En 2011 el acaparamiento de bienes inmuebles y activos financieros de la corona era tal que el propio rey era accionista mayoritario de las empresas estratégicas, el primer terrateniente y el mayor productor agrícola. El M20F se parecía bastante a los movimientos que acabaron con la dictadura de Ben Ali en Túnez. No gozaba de una ideología única, sino una serie de reivindicaciones conjuntas, se organizaba por redes sociales y era un *movimiento de movimientos* con pluralidad democrática y localía diferenciada en cada rincón del país. Dentro de M20F destacaban los islamistas de JyE, sindicatos como el CDT, la ODT o la UMT y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) que era el principal apoyo logístico del movimiento. Pese a descartarse en un principio la represión masiva del M20F, el gobierno acabó usando a la fuerzas de seguridad para cesar las protestas. Centenares de heridos, decenas de detenidos y algunos muertos fue el saldo que se pagó en 2011. Fue entonces cuando en marzo Mohamed VI anunció las medidas anteriormente nombradas y puso al M20F de su parte, o al menos a la mayor parte del mismo (García-Luengos, 2013, p.27-28).

En abril de 2011 se produjo un atentado terrorista que dejó 16 muertos. Tanto el gobierno como el M20F condenaron el hecho, comunicando este último que seguramente era un acto de extremista y que instaba al rey a no detener el proceso aperturista pese a este atentado (García-Luengos, 2013, p.29). En junio se produjo un referéndum para votar la nueva reforma constitucional, hecho que el M20F pidió boicotear pese al apoyo que si prestaron los partidos políticos opositores o las asociaciones feministas. Esta nueva Constitución fue aprobada con el 98.5% de los votos, otorgando no solo un régimen aperturista a Marruecos sino dándole a Mohamed VI un gran respaldo de la comunidad internacional.

Dentro de esta nueva Constitución se dedica un gran apartado a defender los Derechos Humanos, se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y le otorga a los partidos políticos cierto poder de participación y seguimiento de las políticas públicas (Algora Weber, 2014, p.224). También se intentó aprobar una ley de libertad de conciencia, pero el rechazo islamista lo impidió. Así Marruecos se autodefinió como un estado musulmán soberano. Algunos aspectos notables dentro de esta nueva constitución fueron los siguientes (García-Luengos, 2013, p.33-36):

- La desacralización de la figura del monarca pese a que mantiene diversos cargos entre los que se encuentra la de Jefe del Estado.
- Pese a la existencia de un equilibrio de poderes, en la práctica el rey sigue detentando prerrogativas soberanas y tiene plenos poderes en los planos diplomático y militar, así como en la toma de decisiones estratégicas en economía, política o cultura.
- Separación de poderes plena inexistente. El rey sigue presidiendo el Consejo de Ministros, puede cesar a miembros del ejecutivo y controla todas las leyes que vayan a ser aprobadas
- Se reconoce por primera vez el Poder Judicial, aunque el rey sigue teniendo la última palabra en los casos más importantes, tanto nombrando a los miembros del Consejo Superior como ostentando el cargo de superior jerárquico de todos los magistrados de Marruecos.
- Primer Ministro, nombrado por el monarca, debe ser del partido más votado. Este primer ministro tiene cierta independencia respecto al rey y solo rinde cuentas a la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados.
- Por primera vez se enuncia el concepto de Monarquía Parlamentaria, aunque es poco más que un escaparate de cara a la comunidad internacional
- Inmunidad judicial de los decretos reales (dahir).
- Tribunal Constitucional presidido por el rey y este nombra a la mitad de sus miembros
- Ratifica convenciones internacionales y la primacía del derecho interno y nacional
- Algunos cargos de alta responsabilidad pública ya no los nombra el rey. Esto es una novedad respecto a la ley anterior. El rey puede seguir nombrando altos cargos a través de los dahir o decretos reales.

También en 2011 se produjeron elecciones legislativas, donde el PJD, un partido islamista no revolucionario, ganó las mismas (107 escaños sobre 395). Estos comicios están considerados los más transparentes de la historia del país hasta la fecha y se logró tener las garantías necesarias para su seguimiento externo de forma imparcial. Istiqlal, partido conservador, fue la segunda fuerza más votada. Además, el 16.75% de los miembros de la cámara son mujeres, una cifra importante en el contexto del mundo árabe, aunque solo una ministra (García-Luengos, 2013, p.37).

Cuando hablamos del PJD estamos hablando de la principal oposición parlamentaria al régimen. Un partido que ha ido ganando representación parlamentaria hasta llegar a gobernar en 2011. Es un partido político con bases muy democráticas y cuya base electoral son jóvenes y eruditos, la parte de la población que como vimos en el caso de Túnez fue la más activa durante la primavera árabe. Cuando ganó las elecciones el PJD tuvo que pactar con Istiqlal, el Movimiento Popular (una mezcla de partidos locales) y el Partido del Progreso y Socialismo (antiguos comunistas), aunque Istiqlal abandonó el ejecutivo en 2013. El PJD destaca por ser un partido pragmático. Son demócratas pero sin molestar mucho la figura del monarca y sus poderes absolutistas, lo cual ha creado algo de descontento en sus bases. Si trazamos el paralelismo con Túnez, encontramos problemas similares entre el PJD y En-Nahda, ambos partidos islamistas moderados que han visto como su giro hacia el centro político ha hecho que la confianza de sus electores se haya visto mermada.

En el caso del monarca y su círculo cercano, hemos visto como consejeros reales muy criticados por

el M20F como son Himma o Majidi han mantenido su puesto y han seguido siendo personajes relevantes en la escena pública marroquí. El poder absolutista del rey sigue muy presente en vetos y decisiones forzadas desde palacio, como son la dimisión forzada del director de Vie Eco (un medio de comunicación nacional) por criticar la influencia de los consejeros del rey en el gobierno parlamentario o los nombramientos parciales de los nuevos líderes de Istiqlal o de la USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares, brazo que se separó del PPS) para formar una oposición leal al rey en contra del PJD (García-Luengos, 2013, p.38).

Por tanto, actualmente Marruecos se encuentra dividida políticamente entre los grupos parlamentarios representados en la figura del PJD y los poderes del rey con sus partidos afines, siendo este segundo el que sigue tomando las decisiones más importantes y con una oposición moderada por parte del PJD, que al final tiene una capacidad de tomar decisiones estratégicas muy limitada.

En resumen, vemos como Marruecos ha pasado por un cambio político importante en los últimos 50 años, desde el reinado absolutista de Hassan II, dando paso a una etapa reformista en los años 90 y proseguida con Mohamed VI en el siglo XXI y la instauración de la Constitución de 2011 y el paso a ser una monarquía pseudo-parlamentaria con una ligera separación de poderes y una mejora en los derechos civiles de los ciudadanos (Álvarez-Ossorio, 2013, p.67).

Desde la nueva Constitución hasta nuestros días es el PJD el que gobierna Marruecos, habiendo ganado las elecciones de 2011 y 2016, estando previstos unos nuevos comicios este año si la crisis del coronavirus no empeora. Pese a haberse asentado en el poder ejecutivo, el PJD sigue dependiendo demasiado de la voluntad del rey Mohamed VI y de sus consejeros, lo que hace que no puede actuar con la independencia que sería propia de una democracia en materia de relaciones internacionales, defensa o decisiones económicas estratégicas (García-Luengos, 2013, p.68). Además, no existe una oposición frontal al régimen, ya que el PJD acepta la superioridad del monarca desde su posición moderada. Tan solo las fuerzas progresistas se enfrentan al régimen, pero encuentran no tienen el peso político suficiente como para ser relevantes en el país a diferencia del PJD.

Pese a que se puede hablar de un proceso democratizador en Marruecos a partir de 2011, en la práctica la separación de poderes es muy relativa y sigue muy controlada por el rey, a la vez que en materia de derechos humanos se ha producido una ligera regresión con el paso de los años. La figura "moderna" del monarca, sustentada por la estabilidad frente a países de la zona, ha convertido a Mohamed VI en el dique de contención frente a los islamistas radicales y yihadistas, algo bien visto por una población en su mayor parte europeizada. Aunque toda esta apariencia de estado moderno y democrata es una tapadera de un régimen que a la práctica sigue siendo idéntico al que heredó Mohamed VI en 1999, que solventó las revueltas de 2011 de manera inteligente y eficaz, siendo capaz de mantener su poder y a la vez ganarse el respeto de la comunidad internacional (Algora Weber, 2014).

Aunque cuando hablamos de Marruecos hablamos de un régimen bastante asentado (recordamos, la dinastía actual data del siglo XVII) y con un gran apoyo internacional (es uno de los aliados más importantes de EEUU) existen algunos indicadores que nos hacen pensar que el margen de acción del régimen está disminuyendo desde 2011 debido a la progresiva democratización desde 1960 hasta nuestros días (García-Luengos, 2013, p.69). Pese a que el M20F, principal fuerza de movilización ciudadana del país, ha perdido fuerza en la última década, la estabilidad de Marruecos y de su élite dirigente sigue siendo delicada y muy condicionada la calidad de vida de la población y a mostrar avances democráticos constantes por pequeños que sean para mantener a la comunidad

internacional más a favor del régimen que de los movimientos ciudadanos (Algora Weber, 2014). En este sentido, Marruecos no es una excepción al resto del mundo árabe. Como en sus países vecinos, Marruecos y su monarquía están a una grave crisis económica y social de acabar cayendo, algo que veremos si se da en los próximos lustros con las secuelas que deje la pandemia del Covid-19.

El otro caso paradigmático de este despotismo ilustrado en el mundo árabe es del Reino Hachemí de Jordania. Jordania, ubicada en el siempre conflictivo Oriente Próximo junto a potencias de la zona como Egipto, Arabia Saudí o Israel, es uno de los países donde la monarquía absolutista reinante logró que la primavera árabe tuviese muy poco impacto real y, gracias a sus buenas relaciones internacionales con el mundo occidental, han logrado pasar desapercibidos frente a conflictos como los de Libia o Siria (Lynch, 2012, p.4, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.181).

Jordania, definida como un régimen autoritario hegemónico restrictivo o una autocracia liberalizadora, es un estado mucho más moderno que Marruecos, ya que oficialmente se funda en 1946 cuando franceses y británicos deciden dejar controlar la zona. Desde ese momento reina en Jordania la dinastía Hachemí con cuatro monarcas hasta el momento: Abdullah I, Talal I, Husein I y el actual Abdullah II, que reina desde 1999, casualmente el mismo año que Mohamed VI fue coronado rey de Marruecos (Melián Rodríguez, 2016, p.181).

Pese a ser una economía precaria (como todas las de la zona) es un país que apostó por el aperturismo hacia occidente y una política neoliberal copiando el esquema de Estados Unidos. Esto le ha beneficiado de cara a la comunidad internacional, ganando el afecto del FMI, Estados Unidos e incluso Israel, firmando un tratado de paz con los mismos. A su vez, mantiene una buena relación con las monarquías del Golfo, los prestamistas del régimen hachemí, y con el reino de Arabia Saudí.

Si hablamos de las revueltas de 2011 en el país debemos retrotraernos al año 1989. Ya desde 1921 el país fue liberado por los británicos y se estableció el régimen de los hachemí, pero no fue hasta este año cuando las políticas de ajuste y liberalización impuestas por el FMI se implantaron en el país tras la crisis del petróleo o la ruptura con los emiratos árabes con la llegada de la Guerra del Golfo. Estas políticas liberalizadoras y de recortes en servicios sociales tuvieron como consecuencia revueltas populares en el país, especialmente por parte de las tribus del sur del país que vieron arrebatados sus privilegios económicos.

La respuesta del régimen fue un proceso de liberalización política defensiva resumida en el establecimiento de elecciones municipales para abrir un poco el país hacia una democracia (Ryan, 2011, p.369). Pese a esta medida, el poder seguía muy concentrado en el monarca. Junto a estas elecciones municipales, las primeras consideradas libres en el país en más de 30 años, se abolió la ley marcial tras dos décadas y se empezó a trabajar en una ley de partidos que se acabaría publicando en 1992. El proceso de aperturismo democrático tendría su cúlmen en 1991 con la publicación de una nueva Constitución denominada Acta Nacional (Lucas, 2005, p.44, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.190).

El Acta Nacional recogía las directrices impuestas por el régimen hachemí que debía seguir el país en los años venideros. Redactada por eruditos de toda índole (desde consejeros reales a refugiados palestinos pasando por militantes de izquierdas e islamistas) fue una novedad respecto al resto de cartas magnas de la región que habían sido redactadas exclusivamente por miembros de la élite gobernante. Esta particularidad hizo que se iniciase en Jordania una sociedad civil con bastantes libertades y esto dio paso a la creación de nuevas organizaciones civiles y políticas.

Dentro de esta nueva oposición al régimen nos encontramos con dos grandes grupos diferenciados. Por un lado está la izquierda secular progresista y por otro a los grupos islamistas, que representarían a la derecha. Dentro de estos últimos nos encontramos al Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de los Hermanos Musulmanes y la sección con más recorrido legal dentro de la organización. También dentro de los islamistas encontramos dos vertientes, los partidos de Hamás y los moderados. Pese a esta diferenciación entre grupos, la oposición jordana destaca por su carácter reformista (Brown y Hamzawy, 2010, p.55-56, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.191) y su búsqueda de liberalizar un régimen de naturaleza absolutista.

El siguiente hecho relevante antes de las revueltas de 2011 sería la muerte de Hussein I en 1999 y el ascenso al trono de Abdullah II. Como en el caso de homónimo marroquí Mohamed VI se esperaba que el nuevo monarca iba a traer un proceso democratizador a Jordania. Nada más lejos de la realidad. Toda esta esperanza depositada en el nuevo monarca hachemí desapareció en el año 2001, cuando Abdullah II disolvió el parlamento durante un par de años. En esta período sin cámara legislativa se popularizó la figura del Real Decreto, con la que el monarca aprobó decenas de leyes favorables a su persona sin oposición ninguna (Melián Rodríguez, 2016, p.192). En 2003 se produjeron las primeras elecciones legislativas en Jordania bajo el reinado de Abdullah II, aunque con ciertas modificaciones respecto a las anteriores.

Se estableció la edad para votar en 18 años y se aumentó el tamaño de la Cámara Baja hasta los 104 representantes (seis escaños reservados a mujeres). Debido a la interferencia del monarca la mayor parte de la cámara siguió dominada por conservadores de origen tribal cercanos al régimen dejando en minoría a la izquierda y a los islamistas. En las siguientes elecciones, en 2007, los islamistas demandaron fraude electoral tras conseguir solo seis escaños, generando un conflicto entre la dinastía hachemí y los Hermanos Musulmanes. Como consecuencia a esta crisis los islamistas llevaron a cabo un boicot electoral que dura hasta nuestros días.

Por tanto, cuando hablamos de Jordania en términos políticos antes de 2011 hablamos de un país con una estabilidad total, con un régimen que apoyado en las tribus que forman el país ha logrado dominar de manera absolutista con una cortina de humo de liberalización que realmente deja fuera de toda decisión política a los opositores (Melián Rodríguez, 2016, p.193). Hablamos de un país mucho menos occidentalizado que Marruecos y por tanto reacio a términos como democracia o libertad económica. Hablamos de un conjunto de tribus por encima de un estado, llegando estas tribus a un acuerdo para que la dinastía hachemí sea la reinante como podía ser cualquier otra. Hablamos por tanto de un estado más propio del siglo XIX que del XXI, de un país sin una identidad única y que sigue sufriendo los efectos a largo plazo de años de dominación extranjera, primero otomana y luego británica. En este contexto ya de por sí era difícil que se produjeran cambios hacia una democracia, pero al final el gobierno tuvo que acabar cediendo en diversos aspectos para no acabar como Ben Ali, Gadafi o Mubarak.

Cuando llega la primavera árabe nos encontramos con una Jordania muy empobrecida y con la mayor parte de su población en situación precaria. De hecho esta situación se había venido prolongando desde la intervención económica del FMI en los años 80. Pese a esta crisis económica la estabilidad del régimen era total, manteniendo un control férreo de las cámaras legislativas y sobre los jefes tribales. Si existían problemas con ciertos sectores de la población como la población joven, donde el paro juvenil ha aumentado mucho y esto ha llevado a la privatización de varios sectores, algo que ha enfadado a las tribus y ha hecho peligrar el pacto que mantiene a los hachemíes en el poder (Melián Rodríguez, 2016, p.197).

Las primeras revueltas llegan en enero de 2011, justo después de la caída del régimen de Ben Ali en

Túnez. Desde entonces y hasta 2013 se registraron unas 8000 manifestaciones en Jordania, una anomalía en un país caracterizado por su estabilidad. Las revueltas empezaron en las ciudades más pobladas y se fueron extendiendo hacia los núcleos rurales y tribales. Estas revueltas fueron lideradas por asociaciones estudiantiles y grupos no posicionados políticamente, pero ha diferencia de en otros países no gozaron de la organización ni con el respaldo de grupos políticos asentados (Barari y Satkowski, 2012, p.49, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.198).

La respuesta del régimen a las protestas fue la represión enmascarada, usando grupos afines al régimen y no entidades como la policía o el ejército para reprimir las manifestaciones justificando que eran los Hermanos Musulmanes y colectivos palestinos los que estaban detrás de estas revueltas. Un caso curioso pero de gran importancia es que la represión se saldó con cero muertos, algo que sirvió para mantener los ánimos revolucionarios en niveles moderados. Algo que si se produjo fue una gran inestabilidad gubernamental con hasta cinco gobiernos en menos de dos años. Aunque los gobiernos aquí importan poco ya que el verdadero poder lo tiene el monarca.

Pese a que no eran las primeras protestas a las que se enfrentaba el régimen hachemí, si podemos hablar de las primeras impulsadas por la base de la pirámide institucional jordana, las tribus, agrupadas bajo el término HIRAK (movimiento). Dentro del HIRAK encontramos decenas de grupos tribales, pero también movimientos islamistas y seculares. En esta línea se produjeron los primeros bloqueos de carretera y toma de ciertas industrias que habían sido privatizadas por parte de las tribus del sur del país. El régimen por primera vez se tambaleaba.

Pese a la gran crisis económica que sufría el país, las principales demandas de HIRAK eran de corte legal y político, denunciando la corrupción y los abusos del régimen, pidiendo reformas que afecten al poder de la corona o pidiendo cambios en el sistema legislativo. El problema era que al ser un movimiento tan fragmentado les fue muy difícil mandar un mensaje único y muchas de sus demandas se perdieron en el tiempo. También es destacable que, como en Marruecos, las revueltas no demandaban la sustitución de la monarquía por un sistema democrático, sino una mejora en la calidad de vida y un papel más importante del ciudadano en la vida política. Frente a sus vecinos que pedían las cabezas de sus opresores, los jordanos pedían reformas. El líder del FAI, Hamza Mansour, se posicionó públicamente con el sistema monárquico buscando evitar situaciones como la de Egipto y aplaudiendo la figura estabilizadora del monarca a la vez que demandaba reformas dentro del marco monárquicos.

Un momento clave dentro de las protestas fue en febrero de 2011 cuando 36 líderes tribales firmaron una petición demandando cambios en la monarquía como una reprobación de la conducta de la reina Rania (acusada de ser amiga de Israel), profundizar en el proceso democratizador, reformas reales, convertir al gobernante en responsable y tener que responder ante la ciudadanía, etc. La frase “El rey que reine, pero que no gobierne” (Crisis Group, 2012, p.12, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.201) fue acuñada por varias tribus. Por primera vez se observaba una disidencia entre el régimen y su columna vertebral (Melián Rodríguez, 2016, p.201). Ante esta crisis institucional en el país el régimen optó por una estrategia reformista que garantizase la supervivencia del autoritarismo en Jordania.

Las reformas llegaron de la mano del Comité Nacional para el Diálogo, una institución creada por el rey en marzo de 2011 para que liderase de manera conjunta con su persona las reformas necesarias para silenciar a los opositores. Las primeras medidas tomadas fueron la aprobación e una nueva ley electoral y de partidos, seguido de una reforma constitucional que cambiaba el proceso para nombrar al primer ministro del país, teniendo que ser ahora consultada a la Cámara Baja por el rey. Hasta 42 artículos de la Constitución fueron reformados, tocando entre otros temas el control

de los procesos electorales, la creación de una especie de Junta Electoral Central, se aseguraron derechos y libertades a la población y se fundó una institución (Corte Constitucional Nacional) que no responde ante el monarca, aunque todos sus miembros eran nombrados a dedo por el rey.

Pese a todas estas reformas, los grupos reformistas las ven insuficientes y pasados unos meses, ya en 2012, vuelven a tomar las calles, esta vez con más fuerza que en 2011. Esta vez el régimen no usó grupos afines, sino que optó por el servicio de inteligencia, que se dedicó a perseguir y encarcelar a críticos, a silenciar a periodistas y a comprar a comunicadores (Yom, 2014a, p.4, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.204). Este servicio de inteligencia, llamado GID, tuvo total libertad de actuación ante la Corte Constitucional y ante las cámaras representativas. El GID se convirtió en el brazo de represión incontrolable del régimen. Jordania se convierte de facto en un estado policial.

Durante los siguientes años se siguieron produciendo reformas menores en la Constitución y en la ley electoral que no afectaban realmente al poder del monarca, tales como un cambio en el sistema de voto y de distribución de escaños, una mayor transparencia electoral y una caída en la corrupción de los comicios. Sin embargo, las elecciones siguen tan condicionadas a favor de los leales al régimen que partidos como los islamistas siguen sin participar en la vida política (Melián Rodríguez, 2016, p.205).

Se puede concluir que pese a seguir reformando continuamente hacia un proceso democrático en Jordania, los pasos son tan pequeños que no se ha producido un avance real (Melián Rodríguez, 2016, p.206). El poder de la monarquía sigue intacto y la política de supervivencia reformista del régimen ha tenido éxito. El único avance hacia una sociedad civil plena es que el interés de la población hacia la vida política ha crecido en los últimos años, por lo que no hay que descartar nuevas protestas en un futuro. Pese a todo, Jordania se sigue definiendo bajo la cortina de humo de una monarquía constitucional donde el rey mantiene todos los poderes ejecutivos y tiene la potestad de nombrar a los altos cargos del poder legislativo y judicial.

Jordania, como Marruecos, se nos presenta como el caso de países donde el autoritarismo ha logrado mantenerse llevando a cabo cambios menores como en este caso ha sido el reformismo defensivo de Abdullah II. La desafección de los ciudadanos hacia el régimen ha continuado, pero como su objetivo no es derrocar al rey, ven buenos los cambios aunque sean superficiales y cortinas de humo. En resumen, no existe una oposición fuerte. Es una oposición fácil de comprar.

Al final la falta de esta oposición, sea por parte de islamistas, progresistas o liberales, ha hecho muy fácil para el régimen mantenerse en el poder usando la represión silenciosa de su servicio de inteligencia y las reformas vacías en la Constitución. Para explicar esta falta de oposición, oposición que por ejemplo si existía en Marruecos o en Túnez, hay que entender el contexto de Jordania. Jordania no es un estado per se, es un conjunto de tribus unidas por un “pacto social” que hace que gobierne la casa de los hachemí como podía estar gobernando la tribu de las montañas X. No es un estado, no tienen conciencia de estado, tampoco realmente de nación. Es un pueblo lleno de etnias árabes de distinta índole a las que se suman refugiados palestinos, sirios... Jordania no conoce la democracia, siempre han sido un pueblo conquistado o colonizado. De hecho solo hay que ver el momento en el que Gran Bretaña abandona la región se opta por la estrategia medieval del primus inter pares, un rey surgido de las élites de las tribus. El propio grupo opositor no quiere una democracia. Quiere mantener a su rey, a sus tribus y a su sistema político, solo busca mejorar la calidad de vida y tener voz y voto en las decisiones del país.

Todo esto explica el fracaso del proceso democratizador en Jordania, por un lado la falta de oposición fuerte y por otra su contexto histórico. De hecho encontramos la misma situación en todo

el mundo árabe y en especial en los casos de Marruecos y Jordania. No quieren echar a sus déspotas, no quieren una democracia, y no la quieren porque no la conocen. Esto lo han aprovechado Mohamed VI y Abdullah II para salvarse de la primavera árabe con reformas vacías y llenas de ideas populares para contentar a la oposición. Hablamos por tanto de déspotas ilustrados modernos, herederos de las políticas de Carlos III en España o María Teresa de Austria, un todo para el pueblo pero sin el pueblo.

Aunque, y ya como conclusión, no hay que descartar que estas ideas y nuevas palabras que han entrado en la cabeza de los ciudadanos de ambos países, tales como democracia, libertad, representación, elecciones, parlamento, constitución o división de poderes, acabe en una sociedad más culta y estudiada que acabe por provocar nuevas y mejoradas revueltas que acaben terminando con estos regímenes autoritarios. Pasó en Francia en el siglo XVIII, podría acabar pasando en Marruecos y Jordania, aunque todavía haga falta un proceso lento de estudio y formación “a la europea” de sus jóvenes y estudiante que posibilite la formación de organizaciones y partidos políticos opositores firmes.

## **RENOVACIÓN AUTORITARIA:** **EL EGIPTO MILITAR Y LOS REINOS DEL GOLFO PÉRSICO**

Cuando comenzaron las revoluciones que se agruparon bajo el popular nombre de la primavera árabe, la sociedad occidental miraba hacia el este con la esperanza de que por fin estos países gozarían de regímenes democráticos, que los ideales de libertad y diálogo podrían asentarse y ayudar así a que estos países entrasen dentro de la esfera anglo-sajona/europea. Sin embargo, y como ya conocemos por los casos anteriormente citados, tan solo Túnez ha logrado llegar a esta meta final, mientras que países como Marruecos y Jordania se salieron de la carrera a la mitad del circuito sin avances significativos en materia democrática aunque sus regímenes se empeñen en demostrar lo contrario. En los casos de Egipto y los emiratos del Golfo Pérsico trataremos esos países que empezaron esta maratón hacia la democracia pero que solo lograron desprenderse de unas cadenas autoritarias para caer en los brazos de otras.

Hablamos de una renovación autoritaria, un cambio de forma pero no de fondo. A día de hoy tanto Egipto como los reinos árabes siguen gobernados de manera autoritaria, sin ningún avance democrático y en algunos casos con pérdidas de libertades y derechos de sus ciudadanos. Son casos muy distintos, desde luego, ya que en el país de los faraones si vivimos una revolución como tal que acabó en cierto éxito (conocida como el Día de la Ira) y en los Emiratos vivimos como los gobernantes lograron exterminar cualquier tipo de disidencia con el uso de las fuerzas armadas y la represión policial.

Hablemos por tanto primero de Egipto, una de las civilizaciones más antiguas de la historia cuyo siglo XX no ha sido precisamente definido por la estabilidad política y territorial. Desde la monarquía apoyada por el gobierno británico durante la primera mitad de siglo pasado (Melián Rodríguez, 2016, p.122) pasando a la dictadura militar de Nasser con el socialismo árabe por bandera, los conflictos con Israel y por ende el mundo occidental, el aperturismo hacia Estados Unidos impulsado por Sadat y la llegada al gobierno de Hosni Mubarak tras el asesinato de este último, que continuó con la línea de su predecesor actuando duramente contra socialistas e islamistas fundamentalistas.

Mubarak, en el gobierno desde 1981, mantuvo políticas extremadamente liberales para ganarse el favor de Estados Unidos. Estas políticas repercutieron en la calidad de vida del pueblo llano, que vio como sus tierras eran expropiadas en favor de grandes empresas y que todo el esfuerzo del régimen se concentraba en favorecer el sector turístico, el que más ingresos genera para las élites. Esto generó un estado de descontento en toda la población durante la primera década del siglo XXI, de hecho en Egipto solo podemos hablar de primavera árabe como la gota que colmó el vaso y acabó con el régimen de Mubarak, ya que venía muy debilitado de años de protestas e intentos de derrocamiento por parte de opositores.

Durante sus tres décadas en el poder, el régimen de Mubarak realizó violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mantuvo presos políticos encarcelados durante décadas, manipuló elecciones y abuso de todos los poderes del país (Melián Rodríguez, 2016, p.140). Bajo la fachada de una democracia pluripartidista se alzaba una dictadura militar con toda oposición reprimida y encarcelada. Egipto era un país con las libertades condicionadas por los constantes estados de excepción y por unos tribunales dirigidos por juntas militares. Además, y al igual que Jordania, Egipto había llevado a cabo una política liberal auspiciada por el FMI para garantizar el pago de deuda a cambio de seguir prestando dinero al régimen. Como en Jordania, estas medidas llevaron a la población a bajar drásticamente su nivel de vida (Álvarez-Ossorio, 2013, p.62), llegando a estar un 48% por debajo del umbral de la pobreza. También se produjo una inflación brutal y subida de

precios de productos básicos como el pan, la electricidad o el transporte público.

Si nos centramos exclusivamente en la primavera árabe, nos tenemos que referir específicamente al 25 de enero de 2011 como el inicio de la caída de Hosni Mubarak. Fue en la ciudad de El-Mahalla El-Kubra, conocida occidentalmente como Mahalla, donde empezaron las protestas influenciadas por Túnez pidiendo el final del estado de excepción, la dimisión de Mubarak y la llegada de elecciones libres a Egipto. Como en Túnez vimos como las protestas eran dirigidas por movimientos no ideológicos (Coalición de la Juventud de la Revolución o Grupo Khaled Said) y estaban formados en su mayoría por jóvenes y estudiantes sin expectativas de futuro en el país (Melián Rodríguez, 2016, p.144). Exactamente el mismo caldo de cultivo que en Túnez, con el activismo político y los sindicatos como impulsores de la revolución a través de las redes sociales.

Viendo el panorama en Túnez, con Ben Ali al borde del precipicio, el régimen de Mubarak decidió actuar con mucha dureza sobre los protestantes. Utilizando al ejército, fuertemente representado en el régimen, y a la policía para asesinar, secuestrar, detener, utilizar la violencia y cometer abusos sexuales contra los manifestantes (Álvarez-Ossorio, 2013, p.63). Con intención de acabar con las protestas y reconducir el país Hosni Mubarak optó por salir en televisión pública. La estrategia de comunicación de Mubarak fue apelar al miedo al islamismo radical y hacer pública una delegación de poderes en otras personas, tales como su hijo o en un nuevo presidente (Omar Suleiman). Esta renuncia de poderes se alarga en el tiempo hasta mediados de febrero, cuando abandona la capital y huye a una ciudad lealista llamada Sharm el-Sheij. En ausencia de Mubarak fue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quien asumió el poder ejecutivo. Poder que, a diferencia con Túnez, no ha soltado en ningún momento.

Para comprender como un régimen de más de 30 años tardó una semana en caer hay que mirar hacia Egipto no centrándonos en la primavera árabe, sino mirando a la situación de Hosni Mubarak antes de la llegada de las protestas. El régimen era ya insostenible en 2011, con dos frentes enfrentados esperando a ver quien sucedía a un envejecido líder. Por un lado estaba la que podríamos denominar como vieja guardia, liderada por Omar Suleiman y respaldada por burócratas y altos cargos militares. Por el otro una nueva guardia liderada por el hijo del dictador, Gamal Mubarak, apoyado por las grandes fortunas egipcias y las élites que su familia había creado (Melián Rodríguez, 2016, p.134). Queriendo mantener el apellido Mubarak en el poder Hosni nombró a Gamal como su sucesor, algo que no gustó en la vieja guardia que prefería a Suleiman y no convertir Egipto en una dictadura hereditaria.

Aparte de esta división de dos grupos en el régimen nos encontramos con dos grupos opositores mayoritarios. Como en toda la región hablamos por un lado de islamistas y por otro de laicos. En el lado islamistas están los Hermanos Musulmanes, el mayor partido político de todo el mundo árabe y con gran poder de movilización en el país y con presencia electoral en distintos países del entorno pese a ser tachados de terroristas por algunos gobiernos. Los laicos estaban más divididos entre socialistas, herederos de las ideas de Nasser, y liberales, herederos de las ideas de Sadat. Pese a tener cierta relevancia histórica en el país, ninguno de estos grupos gozaba del poder de movilización que si tienen los Hermanos Musulmanes. Nos encontramos por tanto con un país extremadamente fragmentado, no se trata de un conflicto entre un régimen duro y el pueblo, tenemos muchos actores a tener en cuenta (Melián Rodríguez, 2016, p.140).

La caída de Mubarak no estuvo acompañada de una caída del régimen, ya que fueron los militares los que gobernaron una vez acabó el mandato del dictador. Dirigidos por el mariscal Mohamed Tantawi, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA) tomó las riendas de país con la intención de perpetuar las políticas autoritarias a la vez que dirigía el país por una transición entre

regímenes. Hasta que llegaron las elecciones en 2012, el régimen militar violó sistemáticamente los derechos humanos, intervino activamente en la justicia y encarceló a miles de presos políticos (Lampridi-Kemou, 2012, p.78, citado en Melián Rodríguez, 2016, p.146).

Una de las prioridades de los manifestantes era convocar elecciones legislativas y acabar lo más rápidamente posible con este régimen militar de transición. Con la salida de Mubarak se legalizaron a muchos de los partidos que había ilegalizado el dictador, entre ellos partidos sectarios y de corte salafista (Álvarez-Ossorio, 2013, p.63). Los Hermanos Musulmanes no tardaron en movilizarse y el 18 de mayo de 2011 anunciaron la creación del Partido por la Justicia y la Libertad (PJP), su brazo político en Egipto. Con ideales islamistas conservadores y reivindicando la revolución, el PJP no tardó en afianzarse como el gran favorito para ganar las elecciones que estaban por venir.

En estas elecciones el PJP arrasó (216 escaños sobre 508), sumando junto al resto de partidos islamistas alrededor del 70% de los votos emitidos (Álvarez-Ossorio, 2013, p.64), aunque hay que tener en cuenta que los sectores más revolucionarios boicotearon las elecciones, lo que significó tan solo un 52% de participación. También entraron con fuerza en el parlamento los salafistas, hasta entonces reacios a participar en la vida política, con 109 escaños para el partido Al-Nour. Esta entrada en el parlamento de Al-Nour fue la primera estocada a la llegada de una posible democracia en Egipto, ya que las ideas salafistas rechazan por completo las ideas de democracia o libertad. El escritor egipcio Al-Aswany lo definió como un movimiento “contrario a la democracia, ya que está en contra del gobierno del pueblo”. Como en todos los países del entorno, la caída del dictador del siglo XX acabó por producir el florecimiento de los grupos islamistas y salafistas que estaban oprimidos hasta entonces.

Sin embargo, todo este proceso democrático acabó justo después de que Mohamed Morsi, del PJP, ganase la segunda vuelta de las elecciones y fuese proclamado presidente de Egipto, ya que el Tribunal Supremo, bajo el control militar, disolvió la asamblea al tachar de anticonstitucional la ley de partidos. Morsi pudo mantener cierto poder gracias a que la Asamblea Consultiva seguía activa y salafistas e islamistas la tenían controlada. Pese a ser un islamista convencido, Morsi optó por una política de centro, presentándose como el presidente de todos los egipcios, tratando de ganarse adeptos entre laicos, cristianos coptos y la juventud liberal (Álvarez-Ossorio, 2013, p.64).

Iniciaba así la “presidencia” de Mohamed Morsi, cuyas primeras decisiones fueron dirigidas a limitar el poder del CSFA a nivel ejecutivo. El mariscal Tantawi fue cesado y sustituido por el jefe del Estado Mayor, Sami Anan, un militar contrario a los movimientos que se estaban realizando para perpetuar al CSFA en el poder (Álvarez-Ossorio, 2013, p.64). De hecho, Anan acabaría detenido años más tarde por desobedecer comandas del CSFA. Morsi también se blindó ante el poder judicial controlado por los militares, otorgándose inmunidad y derecho a crear leyes que no podían ser impugnadas hasta que una nueva asamblea fuese constituida (Álvarez-Ossorio, 2013, p.65). Esta medida estaba dirigida a controlar que los militares no acabasen con los pocos reductos democráticos que existían en el país y así celebrar un referéndum constitucional a final de año, el gran paso a dar para convertir a Egipto en una democracia. En los meses previos al referéndum Morsi rompió con el salafistas, ganó poder en el aparato judicial y cesó a muchos miembros del CSFA, entre los que se encontraban el fiscal general Magid Mahmud.

En diciembre de 2012 se aprobó la nueva Constitución por el 62.7% de los votos, aunque con una participación paupérrima del 32.9%. La Constitución fue muy discutida, ya que se puede afirmar que beneficiaba en exceso a los islamistas (Melián Rodríguez, 2016, p.154). Esta es una gran diferencia respecto a Túnez, donde todos los grupos políticos se juntaron para redactar la carta magna. En Egipto la Constitución no fue un consenso, sino un mandato de Morsi. Una Constitución

con gran influencia de la sharía, discriminatoria a nivel de sexo, en un claro intento de perpetuar los valores patriarcales, y sin libertad real de credo, ya que solo se reconocían a las religiones monoteístas relevantes (Álvarez-Ossorio, 2013, p.65-66). Tampoco se defendían los Derechos Humanos o la libertad de prensa en esta Constitución o se condenaba la tortura. Pese a la presentación de una Carta Magna, Egipto parecía que seguía viviendo en tiempos de Mubarak, al menos legislativamente hablando. Poco después de la aprobación de la Constitución Morsi disolvió la cámara baja y concentró poderes en su persona. El monopolio del PjL en Egipto era ya total.

Gamal Eid, director del Arabic Network for Human Rights, declaró que con la nueva Constitución Egipto entraba de facto en “una nueva dictadura, pasando de la dictadura de Mubarak a la de Morsi, pasando por la transición dictatorial del CSFA”. También para el Instituto de los Derechos Humanos de El Cairo “Egipto está transicionando de un régimen autoritario a otro con distinta forma pero mismo fondo”. Los sectores liberales y revolucionarios se posicionaron rápidamente en contra de Morsi y crearon un frente opositor a la nueva dictadura de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando el pésimo nivel de gestión del nuevo régimen, la oposición aprovechó para desestabilizar el gobierno de Morsi, polarizando a la sociedad egipcia entre leales al PjL y la oposición, sin importar que en esta última conviviesen mubarakistas, militares, laicos, socialistas o liberales entre otros (Álvarez-Ossorio, 2013, p.66).

A esta polarización social se le sumó una crisis económica a mediados de 2013 que dejó Egipto al borde del colapso (Álvarez-Ossorio, 2013, p.67). La gran agitación política provocó desastres como una caída de la inversión extranjera en 50 puntos, el cierre de más de 1000 empresas dedicadas al sector secundario (representante del 37% del PIB) y una caída evidente del flujo de turistas. A esto hay que sumarle un paro extremo, especialmente en el apartado juvenil, una pérdida del valor de la divisa, la necesidad de importar alimentos de primera necesidad y recursos energéticos, aumentando así la deuda pública, y una subida de casi el 50% del precio de los productos básicos a consecuencia de la inflación (Melián Rodríguez, 2016, p.155).

La situación de Egipto era insostenible. Las palabras de Mubarak en su aparición en televisión de “yo o el caos” se habían hecho realidad en la figura de Morsi, a la que Abu Keita, líder sindical, calificó de “yo y el caos”. Pese a las advertencias de diversos expertos de que la posibilidad de un golpe de estado militar existía, Morsi hizo oídos sordos tanto a las advertencias (Álvarez-Ossorio, 2013, p.68) como a los ultimátums de la campaña revolucionaria Tamarrud y de su ministro de Defensa. Finalmente, el 3 de julio de 2013, poco más de un año después de que empezase su gobierno, el CSFA derrocaba y detenía a Morsi al mismo tiempo que derogaba la polémica Constitución. El nuevo régimen militar colocó rápidamente a las que serían sus cabezas visibles, Adli Mansur en el Tribunal Supremo y ejerciendo de presidente interino, Hazem al-Beblawi de primer ministro y Abdal Fatah al-Sisi como vicepresidente. El día 8 de julio se publicó la línea de actuación que seguiría el gobierno provisional: reforma de la Constitución, celebrar un referéndum en un máximo de cuatro meses y elecciones legislativas en 2014 (Álvarez-Ossorio, 2013, p.68).

La oposición recibió optimista el golpe de estado, especialmente los sectores seculares que acusaban a los Hermanos Musulmanes de secuestrar la revolución (Melián Rodríguez, 2016, p.157). Sin embargo, la situación acabaría por ser más parecida al período de transición entre Mubarak y Morsi que un proceso democrático. Desde que Mubarak cayese, los militares han manipulado y acaparado los tres poderes gubernamentales egipcios y cuando vieron que los Hermanos Musulmanes les alejaban de ellos decidieron acabar con ellos aprovechando el descontento social (Álvarez-Ossorio, 2013, p.69). Un día estuvieron del lado de Morsi, al otro de una oposición marcada de por vida al apoyar un golpe de estado a un gobierno muy deficiente y en camino de ser autoritario pero elegido democráticamente. El derrocamiento de Morsi, necesario para volver a la

vía democrática, ha devuelto el protagonismo gubernamental al CSFA, siendo incluso reconocidos por potencias del entorno como Israel o Arabia Saudí, que han comprado la narrativa que han lanzado desde el CSFA como garantes del orden y la estabilidad en el país.

Desde entonces y hasta nuestros días Egipto vive bajo el amparo de un gobierno provisional militar con Al-Sisi como cabeza visible. Las elecciones prometidas para 2014 acabaron siendo una farsa, una burda imitación de un proceso electoral en el que los Hermanos Musulmanes no pudieron presentarse al ser catalogados de organización terrorista (Melián Rodríguez, 2016, p.162) y donde la única oposición relevante fue Hamdin Sabahi, un nasserista. La victoria de Al-Sisi con el 97% de los votos sobre un 47.5% de participación dejaba claro que las elecciones habían sido manipuladas para perpetuar al CSFA en el poder. Cuatro años más tarde, en 2018 también manipularon las elecciones para volver a ganar con el mismo porcentaje de votos, quedando segundo esta vez la oposición liberal liderada por Moussa Mostafa Moussa. En estas últimas elecciones otras cinco candidaturas, aparte de los ilegalizados Hermanos Musulmanes, fueron declinadas por el régimen, siendo algunos líderes posteriormente encarcelados tras reclamar esta decisión ante la justicia.

La Constitución aprobada antes de las elecciones de 2014 se basa casi en su totalidad en la Constitución de Sadat (1971), caracterizada por su rigidez constitucional. Mantuvo la confesionalidad del estado con el Islam como religión y los principios de la sharía volvieron a ser los pilares de la base jurídica del país. La gran diferencia con la anterior Constitución en materia religiosa fue la prohibición de que los partidos políticos se constituyesen bajo una base religiosa, desacreditando así a los Hermanos Musulmanes y cualquier nuevo brazo político que quisiesen volver a instaurar en Egipto. Pese a que la Constitución reconoce la libertad de prensa, esta no era tan real. Según un informe de Reporteros sin Fronteras en marzo de 2014, tres periodistas de Al-Jazeera fueron encarcelados y según Ricardo González (El País) los medios, tanto opositores como afines, sufren control por parte del régimen que incluye cortes de señal, autocensura o cierre de rotativos (Melián Rodríguez, 2016, p.161).

En la nueva Constitución se fortalecen mucho los poderes judicial y militar, los dos órganos dominados por el CSFA. La Suprema Corte Constitucional, sede máxima del poder judicial, ganó autonomía a la hora de elegir a sus miembros y mayor peso en las decisiones del régimen. El ejército por su parte pasó a gobernar de facto el país, obligando al Ministro de Defensa a pertenecer a las fuerzas armadas, la creación de un Consejo Militar de Defensa, la creación de una jurisdicción militar que afectaba a casos civiles. En resumen, el ejército pasó a gobernar el país con todas las leyes e instituciones a su favor, pasando del estado islamista de Morsi al militar de Al-Sisi (Melián Rodríguez, 2016, p.162). La Constitución también abolía los vocablos y la identidad socialista del país de Nasser para dar un paso hacia el neoliberalismo. Estableció la fachada de un régimen semipresidencialista con parlamento en el que el presidente Al-Sisi tenía todos los poderes salvo que dos tercios de la cámara le vetasen, algo imposible al tener el 97% de los votos.

Ya vemos que a nivel político nada ha cambiado en Egipto respecto al régimen de Mubarak, pero es que en lo social tampoco se han visto avances significativos. Las leyes siguen siendo igual de restrictivas que en la etapa del dictador, prohibiendo libertades fundamentales y restringiendo la entrada de nuevos partidos políticos. Las inquietudes de la juventud, que representa al 65% de la población del país, siguen insatisfechas, con una falta de expectativas que se han deteriorado de manera notable entre tanto cambio de gobierno. La sociedad se encuentra extremadamente polarizada. Ya lo estaba en la etapa de Morsi, pero ha crecido a niveles extremos con la dictadura militar de Al-Sisi (Álvarez-Ossorio, 2013, p.69), con una tensión insostenible entre seculares e islamistas que ha llevado a brotes de violencia por todo el país. El papel de la mujer ha seguido

siendo residual, tanto en la vida política como en la civil, con tasas de desempleo y analfabetismo impropias del siglo XXI.

La decisión del nuevo régimen que terminó de matar cualquier vestigio de democracia incitada en la primavera árabe ocurrió el 29 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Militar absolvió a Hosni Mubarak de todos los crímenes cometidos durante la represión de las protestas (recordamos que fue acusado de asesinar, secuestrar, detener, utilizar la violencia y cometer abusos sexuales), de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y de corrupción (Melián Rodríguez, 2016, p.163). Además, Mohamed Morsi fue condenado a muerte junto con el líder de los Hermanos Musulmanes Mohamed Badia (Melián Rodríguez, p.163), falleciendo el primero en 2019 en prisión y estando el segundo todavía detenido a día de hoy.

Resumiendo, Egipto se encuentra ahora mismo en la misma situación que antes de las revueltas de 2011, lo único que ha cambiado son los nombres de los actores, pero los personajes son los mismos (Melián Rodríguez, 2016, p.165). En 2011 teníamos un régimen absolutista camuflado bajo el nombre de una república semipresidencialista dirigida por un líder designado a dedo y que controlaba los poderes del país gracias a su influencia en las fuerzas armadas y en los jueces del país. Hoy, en 2021, tenemos la misma situación solo cambiando el nombre de Hosni Mubarak por el de Al-Sisi. El ejercito ha tomado el poder expulsando, pero a la vez perdonando sus crímenes, a los Mubarak y a los islamistas liderados por Morsi para gobernar ellos con mano de hierro (Melián Rodríguez, 2016, p.165). No se trata de un acto de liberación por parte del ejercito, sino de conquista. Una lucha de poderes entre élites con los sentimientos del pueblo como contexto sobre el que explicar las atrocidades cometidas por unos y otros.

Cabe debatir sobre como dos revoluciones prácticamente idénticas en tiempo y forma como lo fueron las de Túnez y la de Egipto pueden acabar de forma tan distinta. En primer lugar hay que tener en cuenta el contexto de cada país. Túnez, un país pequeño, con poca población y étnicamente uniforme frente a Egipto, un país grande, con casi diez veces la población de Túnez y en el que conviven distintas etnias y religiones, con minorías fuertes pero muy maltratadas históricamente como la de los cristianos coptos. A su vez Egipto es un país mucho más militarizado al estar situado geográficamente más cerca de Oriente Próximo y estar en contacto casi directo con las tres potencias de la zona: Arabia Saudí, Irán e Israel. Esto hace que el CSFA sea una institución mucho más relevante en Egipto que su homónimo en Túnez.

Respecto a las diferencias que han hecho que una revolución triunfe y otra fracase nos encontramos con dos clave. La primera, sin duda, el apoyo del ejercito al proceso democrático en Túnez respecto a la ocupación del poder que han llevado a cabo en Egipto. En Túnez Ben-Ali renunció al poder justo en el momento en el que el ejercito decidió ponerse del lado de los ciudadanos y no obedecer las órdenes de reprimir las protestas mientras que en Egipto el CSFA se mantuvo del lado de Mubarak hasta que fue inevitable su salida, siendo su brazo armado para la represión de la población e indultándole años después de los crímenes cometidos durante la revolución. Además, la salida de Mubarak no se dio cuando el ejercito le quitó su apoyo, sino que fue facilitada por los mismos para mantener Egipto bajo un régimen absolutista (Melián Rodríguez, 2016, p.165), primero con el gobierno militar de transición y luego buscando colocar a un líder de fachada democrática pero que pudiesen controlar como controlaron durante décadas a Mubarak.

Además, en Túnez el ejercito se mantuvo al margen del proceso democrático, siendo los valedores del mismo pero desde la distancia y el respeto a las fuerzas y actores políticos que estaban llevando la democracia a Túnez. Frente a esto está el caso de Egipto, donde los militares han tomado el poder no una sino dos veces en la última década, primero tras la caída de Mubarak instaurando un

gobierno de transición que camufló durante un tiempo un régimen absolutista donde se violaban sistemáticamente los Derechos Humanos y después derrocando a Morsi, un gobernante con tintes absolutistas pero democráticamente elegido, para colocarse ellos en el poder y presentarse como salvadores de Egipto, instaurando finalmente una dictadura militar liderada por Al-Sisi y donde se ha vuelto a las prácticas de tortura y represión habituales durante el mandato de Mubarak (Melián Rodríguez, 2016, p.167-168).

En segundo lugar encontramos la diferencia entre los dos procesos democráticos y especialmente significativo en el caso de la redacción de la Constitución. Mientras en Túnez tuvimos “padres fundadores” de ideología centrada y alejados del islamismo radical, en Egipto tuvimos como únicos redactor de la Constitución al PJJ, es decir a los Hermanos Musulmanes. El gran fallo de Egipto fue dejar en manos de una sola ideología la redacción de su Carta Magna, ya que quedó muy marcada en términos de libertad de culto, libertad de expresión o de prensa, a la misma vez que denigraba a las mujeres siguiendo las indicaciones de la sharía (Melián Rodríguez, 2016, p.171). Esta Constitución dividió a las fuerzas demócratas, creando una oposición tan fuerte a los Hermanos Musulmanes que al final apoyarían un golpe de estado militar y la instauración de un régimen absolutista con tal de quitar a los islamistas de Morsi del poder.

En resumen, nos encontramos con un país donde la revolución de 2011 no ha llevado sino a un giro político pero dentro del autoritarismo. Un país en el que en la última década hemos tenido tres regímenes autoritarios con distintos líderes y un intento democrático que iba en camino de ser otra dictadura. Hemos visto los regímenes de Mubarak, Tantawi, Morsi y Al-Sisi caer y sucederse, manteniéndose la misma situación civil y económica para el pueblo egipcio, que ha visto como sus derechos y libertades en vez de aumentar con la caída de Mubarak se han incluso reducido con los continuos cambios legislativos y la cada vez más frecuente intervención de los juicios militares. Además, tan solo Morsi fue condenado por sus crímenes contra el pueblo egipcio, mientras que Mubarak fue absuelto de los crímenes durante las protestas (solo se le condenó por corrupción) y a Tantawi se le garantizó la inmunidad judicial a cambio de ceder el poder cuando se convocaron elecciones.

El futuro de Egipto no camina precisamente hacia una democracia. Como indicó el profesor Álvarez-Ossorio: “Con el ejército como árbitro nunca habrá democracia en Egipto”. Además de todo el poder que atesoran en el país tras años enriqueciéndose junto a Mubarak, el CSFA está apoyado política y económicamente por Arabia Saudí. El propio Álvarez-Ossorio explica que el papel secundario que han tomado EEUU y la UE ha hecho que el estado saudí se convierta en el principal apoyo del régimen, suministrándoles doce mil millones de dólares tras el golpe de estado y apoyando en todos los países de su entorno la expulsión de los Hermanos Musulmanes de todas las instituciones políticas (Álvarez-Ossorio, 2013, p.69). Este no es sino otro movimiento de Arabia Saudí para ganar estados satélites en su particular guerra fría contra Irán.

Con un régimen tan asentado y que controla todas las instituciones jurídicas y políticas del país como es la dictadura militar de Al-Sisi es difícil que se vea una transición democrática en el corto plazo (Melián Rodríguez, 2016, p.175-178), aunque no hay que descartar que se produzca una nueva ola revolucionaria en toda la región a causa de las desigualdades económicas que dejará la crisis del Covid-19, relativamente parecido a como la crisis del 2008 derivó en la primavera árabe de 2011. Aunque el escenario más plausible es que no exista una revuelta en el corto plazo debido al férreo control del régimen, la ausencia de una oposición frontal legal y la poca actividad, tanto pacífica como armada, de los Hermanos Musulmanes desde su ilegalización. Podemos augurar bastantes años de autoritarismo total por delante para Egipto.

Distinto, aunque con matices similares, son los casos de las revueltas árabes en los emiratos del Golfo Pérsico. Estos estados, enriquecidos y empoderados por las fuentes de energías fósiles, han pasado de ser reino casi tribales a países modernos con un alto poder de atracción tanto turístico como de gancho para las grandes fortunas del mundo. Los reyes y emires de la zona se aseguraron su poder gracias a la explotación exclusiva del petróleo y hoy en día han diversificado sus negocios hacia lo financiero, los medios de comunicación, el turismo, el deporte o la industria armamentística (Foley, 2012, p.488). Cuando la Primavera Árabe llegó al Golfo Pérsico, los regímenes que dominan la zona estaban preparados para evitar cualquier especie de giro democrático. Los países que ocupan esta zona (Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Arabia Saudí y Omán) tuvieron distintas formas de afrontar las revoluciones de 2011, así que trataremos caso por caso.

Empezamos por Bahréin, una pequeña isla en el Golfo Pérsico que desde el siglo XVIII está gobernada por la dinastía Al-Khalifa. Oficialmente una monarquía constitucional, Bahréin es un estado donde el monarca acumula los poderes de Jefe del Estado, nombra y puede quitar de su puesto al Primer Ministro o a su gabinete, nombra los miembros de un Consejo meramente consultivo, es Jefe de las fuerzas armadas y preside el Alto Consejo Judicial. Es decir, concentra los poderes ejecutivo, legislativo, armado y judicial del estado (Fabani, 2011, p.3). El actual rey, Hamad Al-Khalifa, tiene colocado su tío Bin Salman como primer ministro, cargo que ostenta desde 1971. Junto a Bin Salman también se encuentra el resto de consejeros, veintiuno en total de los que diez pertenecen a la familia real (Fabani, 2011, p.4).

Bahréin se rige por una mezcla de la ley islámica y la justicia británica donde el rey se salta la independencia judicial impuesta en la Constitución de 2002 al ser él el que designa a los jueces, que a su vez están sometidos a constantes presiones del régimen para fallar a su favor siempre (Fabani, 2011, p.4). En Bahréin las élites cercanas al régimen los controlan todo, desde los ingresos producidos por la exportación de petróleo hasta los poderes dentro del estado. Con todos los partidos políticos ilegalizados no podemos hablar de Bahréin de una monarquía constitucional como lo son España, Reino Unido o Bélgica, sino de un régimen autoritario definido bajo la mentira de una Constitución que es papel mojado a la hora de garantizar a los ciudadanos del país derechos y libertades.

Pese a la indecente cantidad de dinero que genera por la exportación de petróleo, Bahréin es un país con un alto índice de desempleo, con un 15% de paro (44% de paro juvenil), y un amplio déficit habitacional (Fabani, 2011, p.4). Además, Bahréin cuenta con una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, normalmente procedentes del sudeste asiático y el subcontinente indio que vienen a trabajar en la construcción en condiciones que rozan la esclavitud. En el aspecto social, la mayor parte de la población es de origen shií, algo que contrasta con la discriminación que sufren por parte de los suníes, ya que en Bahréin los chií están apartados de todos los cargos relaciones con el estado tales como la administración pública o las fuerzas de seguridad (Fabani, 2011, p.4). En resumen, un país donde las élites acumulan todo el poder y la riqueza mientras el pueblo llano, en su mayoría inmigrante vive en condiciones penosas (Foley, 2012, p.491).

Las revueltas en Bahréin empezaron unos días después de la caída de Mubarak en Egipto. En el centro de las protestas estaba la reclamación de una reforma política en el país muy por encima de un cambio socioeconómico (Foley, 2012, p.489). La Plaza de la Perla, en Manama, fue el epicentro de la Primavera Árabe en Bahréin. La primera apuesta del régimen fue enviar a la policía para acabar con las protestas, aunque más tarde tuvieron que echar mano de destacamentos militares ante la incapacidad de la policía de reprimir a los manifestantes (Fabani, 2011, p.5).

La oposición bahreíni estaba liderada de manera dual por Al Wafaq, el partido islamista del país que lideraba la Alianza Nacional, y Wa'ad, la asociación liberal sunní que buscaba la abolición del absolutismo y la llegada de un régimen verdaderamente democrático. El principal reclamo de los opositores al régimen era la derogación de la Constitución de 2002 y dotar de verdaderos poderes legislativos a una Asamblea Nacional. Además, la oposición contaba con el apoyo de grupos radicales chiís como Al-Haq o Al-Wafa'a, que reclamaban el fin de la monarquía (Fabani, 2011, p.5).

El saldo de enfrentamientos entre manifestantes y régimen fue demoledor durante los meses de enero y febrero, con un importante número de muertos, heridos y detenidos que posteriormente fueron encarcelados tras juicios poco imparciales (Foley, 2012, p.502). Tras ver que la represión no era una solución a largo plazo, el rey Hamad optó por dar concesiones socioeconómicas al pueblo, como la construcción de 50.000 viviendas de bajo coste (Fabani, 2011, p.5). Sin embargo, al ser la reforma política la verdadera motivación del pueblo, las revueltas no pararon.

Finalmente fue la represión armada la que acabó con las protestas de raíz. El Consejo de Cooperación de Estados Árabes de Golfo (CCG) intervino en Bahréin con la ayuda conjunta de las fuerzas armadas de Arabia Saudí y EAU, acabando con las protestas y encarcelando a sus líderes (Fabani, 2011, p.5-6). El papel del CCG fue vital y a la vez interesado, ya que para Arabia Saudí (el gran gigante de esta organización) la estabilidad en la región es una prioridad, ya que quieren evitar un efecto dominó que acabe con el autoritarismo en la península arábiga. Los miembros del CCG (Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, EAU y Qatar) se protegen entre ellos para mantener sus respectivos regímenes (Foley, 2012, p.499), por lo que no se veía con buenos ojos un aperturismo dentro de un estado miembro. Además, mantener a los líderes actuales era importante para ser un bloque unido frente a la amenaza de Irán y su creciente influencia en Oriente Medio. Respecto a la postura de la comunidad internacional ante esta represión militar la postura fue la misma que con Egipto, al ser un socio estratégico de Estados Unidos en la región no se ha intervenido ni opinado negativamente de los actuales regímenes (Foley, 2012, p.504). Diez años después de la gran represión, la población de Bahréin no ha visto satisfechas sus necesidades económicas, políticas o sociales, de hecho el autoritarismo se ha visto reforzado. Las promesas realizadas por el monarca de cambiar la Constitución y dar más poder a la cámara baja no han sido cumplidas y el cambio político en el Bahréin actual se plantea como una utopía casi irrealizable.

Lo ocurrido en Bahréin se extendió rápidamente por el resto de emiratos. El CCG, consciente de que una derrota de cualquier monarquía ante demócratas y especialmente chiitas pondría en peligro la estabilidad de la organización, impuso rápidamente su ley a base del uso de las armas para mantener a los regímenes autoritarios en el poder (Foley, 2012, p.503).

Rápidamente las protestas se extendieron a través de una convocatoria de un nuevo “día de la ira” siguiendo el ejemplo de Egipto (Foley, 2012, p.499). En Arabia Saudí la comunidad chií que vivía en la frontera con Bahréin se manifestó el 11 de marzo, aunque la jornada pasó sin apenas incidentes. Distinto fue el caso de Omán, donde el sultán Qaboos se vio obligado a destituir a gran parte de su gabinete para frenar unas protestas que habrían acabado con su mandato de más de 30 años (Foley, 2012, p.500). También hubo protestas, aunque más pacíficas, en Kuwait, EAU y Qatar (Foley, 11 de marzo de 2011 en *Enduring America*, citado en Foley, 2012, p.500).

El CCG, previo acuerdo con los gobiernos occidentales a cambio de reconocer el nuevo gobierno libio tras la caída de Gadafi, intervino en todos los países de su grupo a través de los ejércitos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La intervención militar fue a costa de mucha sangre, algo

que generó un rechazo tremendo por parte de Al-Wefaq, que se abstuvo de las irrelevantes elecciones legislativas de 2011, y de los gobiernos de Iraq e Irán, de mayoría chií (Foley, 2012, p.502). También aumentaron las tensiones entre el CCG y occidente, en especial Estados Unidos. A su vez, la Liga Árabe y la OPEP pospusieron sus reuniones para dejar que las tensiones se relajasen.

Pese a que la situación estuvo al borde de un conflicto, finalmente los regímenes autoritarios del CCG acabaron por no solo mantener sino aumentar su poder al mando de sus respectivos estados. El sultán Qaboos logró mantenerse en el poder sin tener que ceder poder a la oposición (Foley, 2012, p.503), las demandas en Kuwait, EAU o Qatar fueron despachadas con aperturismo económico sin tocar el sistema político (Hamdan, 6 de abril de 2011 en *The New York Times*, citado en Foley, 2012, p.503) y en Bahrein se terminó por encarcelar a la oposición y fortalecer el régimen de los Al-Khalifa (Fabani, 2011). En Arabia Saudí, el gran gigante geopolítico de la región, la monarquía se fortaleció gracias primero a su inmenso poder armamentístico y segundo por los sobornos a las grandes élites religiosas (Foley, 2012, p.503).

Además, hay que tener en cuenta el papel que jugó el medio de comunicación Al-Jazeera, de propiedad qatarí durante la primavera árabe, ya que gozaron prácticamente del monopolio de la información al manejar de igual manera árabe e inglés, lo que les dio una ventaja crucial frente a los medios occidentales y les otorgó el poder de controlar el relato a su favor (Foley, 2012, p.505-506). Su victoria tanto social como política en la primavera árabe terminó por fortalecer al CCG, que rápidamente expandió sus tentáculos por todo el mundo árabe y el mundo occidental. Mejoró relaciones con los reinos árabes de Marruecos y Jordania, tomó un papel protagonista por medio de Qatar en las negociaciones diplomáticas posteriores a la guerra de Libia, organizó grandes cumbres internacionales, ganó presencia en países como Francia y Reino Unido, intervinieron directa e indirectamente en el desastre humanitario que es la guerra de Yemen sirviendo de portavoces del gobierno americano que delegó responsabilidades en ellos pese a ser los grandes responsables del conflicto y compró una cantidad indecente de armas a cambio de petróleo en su carrera armamentística particular con Irán (Foley, 2012, p.504-505).

El futuro no augura un giro democrático en el corto plazo para los estados del Golfo Pérsico, aunque como en el resto de países que hemos tratado anteriormente no hay que descartar revueltas que lo provoquen a unos años vista debido a que toda la región se encuentra en la misma situación social, económica y política que antes de 2011 (Fabani, 2011, p.6). Crisis como la que provocará a medio plazo los efectos del Covid-19 podría acabar desembocando en una nueva ola de protestas que consigan el cambio democrático en la región. Pese a esta amenaza de futuras crisis, los gobiernos autoritarios se sienten seguros debido a la fortaleza que ha demostrado el CCG y a su creciente influencia tanto en el mundo árabe como en la comunidad internacional.

Una vez finalizada la Primavera Árabe y pasado el momento de mayor tensión entre el CCG y sus aliados occidentales, los países de la península arábiga emprendieron dos estrategias para blanquear de nuevo su imagen de cara al mundo occidental, tanto en el aspecto político como social. La estrategia política se ha basado en consolidarse como los grandes aliados, exportadores de energías naturales e importadores de armas del mundo occidental. Los intereses de Estados Unidos en la región, queriendo mantener bajo control a nuevas potencias como Irán, viejas como Rusia o la creciente influencia de los gigantes indio y chino hace que el gobierno americano esté dispuesto, como lo ha estado siempre, a hacer pactos con el diablo con tal de ganar influencia en Oriente Medio (Foley, 2012, p.488). La relación de Estados Unidos con Arabia Saudí, siempre turbia, ha servido para que el gigante árabe haya conseguido salvaguardar su régimen a cambio de ayudar a los americanos en la lucha antiterrorista o en la guerra fría contra Irán. Incluso en los momentos que más difícil lo ponía el régimen de Arabia Saudí para mantener una alianza con un país democrático,

como fue el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por parte de sicarios a sueldo del príncipe heredero Mohammad bin Salman (Milanovic, 2019), el gobierno estadounidense optó por mantener las relaciones con el régimen saudí (Berger, 2020, p.77-82),

La segunda estrategia está dirigida a un lavado de imagen de los distintos regímenes y sus prácticas autoritarias con la herramienta conocida como “sports washing”. Un lavado de imagen usando la propaganda del deporte, algo inocuo a la política, y transmitiendo hacia el exterior un retrato falseado de lo que es la sociedad o la vida en esos países. Encontramos casos muy sangrantes, algunos incluso que personalidades detenidas por corrupción y prevaricación. Casos como la asignación del mundial de fútbol a Qatar en 2022 con decenas de condenados por corrupción dentro de la FIFA (Youd, 2014), la compra por partes de fondos soberanos de clubes de fútbol aprovechando la creciente influencia de ciertos países en Europa, es el caso de Qatar en la Francia de Sarkozy, los Emiratos Árabes Unidos en Reino Unido o Arabia Saudí y Bahrein en España. En nuestro país, además de vender armas a estos regímenes, se les ha blanqueado por medio de la RFEF y de su llegada al accionariado de clubes andaluces como Málaga (familia real de Qatar), Almería (Consejero real y ministro de deportes saudí) y Córdoba (miembros del comité olímpico de Bahrein). Esta estrategia ha tenido sus frutos, ya que ha proyectado una imagen de inversores y salvadores del deporte (algo donde la población europea vuelca sus sentimientos) sobre países como Qatar, Bahrein, EAU o Arabia Saudí que no dejan de ser regímenes autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos.

El lavado de imagen que los regímenes autoritarios de la península arábiga han realizado desde 2011 hasta ahora ha servido para focalizar la presión internacional sobre otros puntos de la geografía como China, Irán o Venezuela mientras ellos mantenían su yugo sobre el pueblo de estos países, negándoles derechos y libertades básicos y realizando prácticas impropias del siglo XXI como la ejecución de condenados, la tortura de prisioneros y el seguimiento estricto de la ley islámica atacando sistemáticamente a mujeres, homosexuales y personas de otros credos.

Al final, pese a ser casos muy diferentes ya que en Egipto la revolución triunfó por momentos y en la península arábiga fue sofocada, encontramos puntos comunes entre los actuales regímenes autoritarios arábigos y el estado militar de Al-Sisi. En primer lugar encontramos dos organizaciones que ya tenían poder antes de las revueltas de 2011 y que salieron de estas con una posición reforzada. En Egipto fue el CSFA, que acabó con Mubarak y los Hermanos Musulmanes para hacerse con el poder absoluto del país, y en la península arábiga fue el CCG, que pasó a ser una superpotencia en el mundo árabe y un órgano capaz de llevar a cabo una “restauración” dentro de su entorno (Foley, 2012, p.506-507).

El segundo punto en común es el uso de la violencia y la represión armada con el islamismo radical como excusa. Mientras en Egipto se acusaba a los Hermanos Musulmanes de terroristas y se les ilegalizaba, en Bahrein se expulsó Al Wefaq de la vida política (Foley, 2012, p.502) y en Arabia Saudí se asesinaba a periodistas opositores al régimen. Esta política interior de combatir el islamismo radical, aunque en algunos casos combaten organizaciones no radicales, les ha servido para justificar de cara a la comunidad internacional la represión ciudadana, los abusos policiales, la tortura, ejecuciones de presos políticos y la discriminación de ciertos colectivos (Foley, 2012, p.504).

Pero combatir el islamismo radical no es lo único que han hecho para ganar fuerza y respeto en la comunidad internacional y más concretamente con el mundo occidental. En la última década, estos regímenes han afianzado sus alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea a través de ciertas decisiones estratégicas como reconocer a Israel como estado y finalizar las hostilidades con el país

hebreo, intervenir para defender los intereses americanos y europeos en conflictos locales como los casos de Libia, Siria o la lucha contra el estado islámico y colocarse como aliados del mundo occidental en un Oriente Medio tan influenciado por Irán, Rusia, China o la creciente amenaza del autoritarismo turco (Foley, 2012, p.505). A cambio, las potencias occidentales (EEUU, Reino Unido, Francia...) han “pasado la mano” sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos (condiciones de esclavitud en la construcción en Qatar o represión armada en Bahréin), crímenes de guerra (la crisis humanitaria de la guerra de Yemen) y asesinatos de periodistas (caso Jamal Khashoggi). En Egipto la situación es similar, ya que al mundo occidental le conviene mantener buenas relaciones con el régimen de Al-Sisi por su posición estratégica entre África y Asia, su cercanía a Israel y el control del Canal de Suez.

Respecto al fracaso de las revoluciones en estos países y la no llegada de la democracia hay que volver a recalcar los dos grandes puntos que hicieron triunfar la democracia en Túnez, como fueron la neutralidad del ejército y la pluralidad dentro de los grupos políticos que buscaban la democracia por encima del poder. El caso de Egipto aquí es significativo, ya que tanto el ejército como el grupo político dominante (Hermanos Musulmanes) se hicieron con un poder autoritario a tramos entre ellos, dejando fuera de toda ecuación la posibilidad de un proceso democrático viable. En los países de la península arábiga ni se llegó a intentar la democracia debido a la intervención armada no solo del ejército de cada país sino de fuerzas armadas de miembros del CCG.

Al final la conclusión que sacamos de los casos de Egipto y la península arábiga es que sin el apoyo de las fuerzas armadas, normalmente asociadas al régimen, y sin una cultura política mínima que asegure partidos y asociaciones que busquen la democracia como único objetivo será imposible llevar la democracia a países donde este concepto es rechazado de facto. Si a esto le sumamos una permisividad inadecuada por parte del mundo occidental con los crímenes que habitualmente comenten estos regímenes a cambio de afianzar una mejor posición estratégica y financiera no ayudará, ya que cada intento de revolución podrá ser sofocado con el uso de las armas sin tener consecuencias de cara a la crítica internacional y sanciones a estos líderes autoritarios.

## **EL CAOS TRAS LA REVOLUCIÓN: LOS ESTADOS FALLIDOS DE LIBIA, SIRIA Y YEMEN**

La primavera árabe fue un intento de ola democratizadora en los países árabes, un intento de traer una mejor situación para los ciudadanos de la región que vivían bajo el yugo de regímenes tiránicos que no les otorgan libertades fundamentales ni les dejan elegir representantes que luchen por sus derechos y sus inquietudes. Pero, como en todo conflicto geopolítico, tuvimos estados donde las situaciones llegaron a buen puerto (Túnez), otros donde se optó por un término medio (Marruecos o Jordania), otros donde los regímenes fueron los vencedores finales (Egipto o Bahrein) y otros, el peor de los grupos, donde este conflicto desembocó en una crisis humanitaria, social y política en todo el país que persiste hoy día.

Este último es el caso de Libia, Siria y Yemen, los conocidos como estados fallidos del mundo árabe. El Foro Económico Mundial define estado fallido (renombrado a estado frágil en 2013) como aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Estos tres países llegaron a esta situación como consecuencia de las revueltas de 2011 contra Gadafi en Libia, Al-Asad en Siria y Ali Abdullah Saleh en Yemen, los tres dictadores que gobernaban estos tres estados de manera tiránica. En los tres países encontramos un proceso similar que ha llevado a convertirlos en estados fallidos. Este proceso empieza con las revueltas típicas de 2011 en el mundo árabe seguidas de una fuerte represión del ejército del régimen, les sigue una guerra civil ante la incapacidad de la oposición de desalojar del poder a los dictadores, continua con una intervención extranjera interesada y que en ningún momento busca establecer un gobierno democrático en el país y desemboca en un estado fallido, normalmente dividido en varios gobiernos y preso de los ataques de señores de la guerra, jefes tribales, traficantes internacionales y yihadistas radicales alineados con el Estado Islámico.

Evidentemente existen diferencias entre cada caso. Cambia que agente extranjero aparece en acción, cual es su motivación, el hecho de si ha acabado o no el conflicto civil, cuanto peso tiene el Estado Islámico, quien es el líder actual del país, el hecho de seguir siendo o no un estado fallido en 2021 y demás particularidades de cada país, sociedad y gobierno. El primer caso que vamos a tratar es el de la Libia de Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, el dictador excéntrico que dominó Libia durante más de 40 años y cuya caída desembocó en la gran crisis humanitaria del Magreb desde la descolonización.

Primero hay que poner en contexto el régimen de Gadafi. Muamar Gadafi llega al poder derrocando al rey Idris (gobernante del país tras la descolonización italiana) e instaura un gobierno dictatorial basado en el panarabismo y el socialismo árabe. Gadafi instaura un régimen donde las excentricidades de su líder estaban a la orden del día, comprando artículos de lujo, armamento militar avanzado, contratando mercenarios o buscando la creación de un gran imperio que uniese a todo el mundo árabe. En lo político, Libia se alineó con el bloque soviético hasta la caída de la URSS y posteriormente fue uno de los líderes de los países no alineados. Todo el poder se concentró en Gadafi y en el partido único, la Unión Socialista Árabe (ASU). En lo económico, Libia creció a niveles insospechados gracias al descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el país

. Como consecuencia de esto el PIB y la esperanza de vida en Libia creció a niveles europeos, siendo uno de los países más ricos del Magreb y el mundo árabe. También tuvo un gran peso el aspecto militar, ya que la Libia de Gadafi fundó la OPEP para protegerse del imperialismo occidental, invadió Chad y atacó Egipto.

Pese a todas estas políticas, el gran punto que marca la dictadura de Gadafi fue su relación con el

terrorismo yihadista. Durante décadas el régimen de Gadafi promovió, financió y difundió el terrorismo contra el mundo occidental. Atentados como el de la discoteca Le Belle (Berlín, 1986) o el avión Pan Am (Reino Unido, 1988) son atribuidos al régimen libio. La relación de Libia con los grupos terrorista fue descubierta por Estados Unidos y como consecuencia el estado americano bombardeó Trípoli y Bengasi en 1986. Esta relación amigable con los grupos terroristas cambió radicalmente a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Desde ese momento Libia se posicionó como uno de los mayores aliados de occidente en la lucha contra el terrorismo yihadista y al régimen de Gadafi se le levantaron las sanciones impuestas en los años 80. Gadafi se convirtió en un fiel aliado de los gobiernos de Estados Unidos (Bush), Reino Unido, Francia y España (José María Aznar llegó a elogiar el régimen de Gadafi). Siguiendo el ejemplo de países como Arabia Saudí o Israel, la Libia de Gadafi se convirtió en un aliado interesado de occidente, realizando sobre el terreno el trabajo de represión del terrorismo, control de las mafias y señores de la guerra y regulación de la inmigración ilegal.

Pese a controlar Libia de manera bastante férrea durante más de 40 años, Gadafi siempre tuvo opositores y sufrió intentos de asesinato (la mayoría financiados por EEUU) constantes. Ante el miedo de que el ejercito se pusiese en su contra, Gadafi debilitó a las fuerzas armadas y consolidó su gobierno en el apoyo de los jefes tribales del interior de Libia y la creación de su propio ejercito personal compuesto por mercenarios experimentados. Pese a esto Gadafi sufrió varios intentos de derrocamiento por parte de militares, el primero en 1975 por parte del Consejo del Comando Revolucionario y el segundo en la década de los 90, cuando el ejercito libio tomó Cirenaica (zona noreste del país) y tuvo que ser derrotado por el ejercito personal de Gadafi.

Por tanto, nos encontramos un régimen fuerte y sólido, apoyado por los jefes tribales, con un fuerte poder armamentístico y sin depender del ejercito nacional. Además un país pujante en lo económico, con petróleo y apoyado por el mundo occidental gracias a su postura anti-terrorista. Todos los indicadores nos dicen que una revolución exitosa era inviable, pero ocurrió en 2011 y cambió el país para siempre.

Las revueltas llegaron a Libia el 17 de febrero de 2011, como en Túnez o Egipto la mayoría se convocaron por internet buscando tener una mayor difusión dentro de la juventud estudiantes y la comunidad universitaria. Las revueltas tenían un tono pacífico parecido a Túnez hasta que el abogado defensor de presos político Fethi Tarbel fue arrestado por el régimen de Gadafi en Bengasi. La violencia fue escalando entre manifestantes y fuerzas del régimen, con asesinatos de unos y otros durante las protestas. La situación se volvió insostenible en Cirenaica, donde el ejercito se puso del lado de los manifestantes y obligaron a los leales a Gadafi a abandonar la región. Ante esta situación Gadafi contraatacó con una fuerza nunca vista en la primavera árabe, ya que bombardeó ciudades opositoras y asesinó de forma indiscriminada a su propia población, tal y como informaron fuentes de la CNN.

Pronto el país se partió en dos, con la zona oriental dominado por los rebeldes, islamistas y tribus contrarias a Gadafi y la zona occidental con la capital Trípoli controlada por Gadafi, sus tropas leales y mercenarios venidos de toda África financiados por el dictador. Empezaba así la Guerra Civil Libia, la primera de las dos que se vendrían en pocos años. La guerra estuvo marcada por la violencia extrema cometida por Gadafi contra los rebeldes y las sanciones progresivas que impuso la comunidad internacional hasta que decidió intervenir de manera armada. La primera sanción llegó el 20 de febrero, cuando Gadafi recibió el primer aviso de Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe de cesar con la represión masiva.

La guerra continuó durante semanas con idas y venidas entre rebeldes y leales, luchando por el control de los recursos estratégicos que financiaban a sus ejércitos. Cuando parecía que la guerra iba a ganar Gadafi gracias a sus mercenarios apareció la intervención del mundo occidental para acabar con las fuerzas de Gadafi. Los otrora aliados de Gadafi en la lucha anti-terrorista se pusieron del lado de los rebeldes justificándose en los crímenes humanitarios cometidos por Gadafi. Las fuerzas militares de Francia y EEUU se desplazaron a Libia y empezaron a bombardear al ejército de Gadafi el 19 de marzo de 2011 tras un ultimátum al dictador. A Francia pronto se le sumó la ayuda americana, británica y de otros países de la UE, entre ellos España.

Pese a que estas intervenciones se justificaron en los ataques indiscriminados de Gadafi hacia la población civil y el hecho de que estaba cometiendo crímenes de guerra a diario, las motivaciones reales de los países europeos estaban mucho de estar relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos. Francia, liderada por Sarkozy, fue la principal promotora de la intervención en Libia con la intención de lavar la imagen de su presidente y las conexiones reveladas entre su ministra de exteriores y el régimen de Ben Ali en Túnez o el de Mubarak en Egipto. Siendo un país con tanta inmigración del Magreb, Sarkozy buscaba mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones generales (Moreira, 2014). Otro de los grandes promotores fue David Cameron en Reino Unido, buscando limpiar la imagen del país tras la situación posterior a la guerra de Irak. Estados Unidos, bajo la administración de Obama, quiso mantenerse un poco en un segundo plano por el miedo a la opinión pública tras las guerras de Irak y Afganistán, aunque era consciente de la necesidad de mantener bajo control el precio del petróleo libio. Y es que el precio del petróleo subió a niveles por encima de los 110 dólares el barril y también bajó la cotización del euro como consecuencia de esto. La potencial crisis económica que produciría un conflicto largo en Libia hizo que la Unión Europea fuese la verdadera impulsora de la intervención internacional.

La intervención internacional le dio un vuelco a la guerra que terminó finalmente en octubre con la captura y ejecución de Muamar Gadafi por parte del ejército rebelde. La caída de Gadafi llevaría a un vacío de poder que pronto ocuparon jefes tribales, señores de la guerra y grupos yihadistas. Dentro de los rebeldes surgió la autoridad del Consejo Nacional Transitorio, que trató de organizar y desmovilizar a las milicias rebeldes que habían surgido por todo el país. Ante la incredulidad del resto de beligerantes en la guerra el CNT se proclamó como gobernante del país pese a no tener poder real en casi ninguna parte del país, que seguía dominado por tribus muchas de ellas leales a Gadafi.

El ansia de poder del CNT derivó en el conocido como otoño libio, una crisis social, económica y étnica que sufrió el país ante el vacío de poder creado por la caída de Gadafi. La desaparición de una figura que lo englobaba todo como era Gadafi destapó las carencias de la economía y la sociedad libia. La guerra había destruido o dejado en manos ajenas al gobierno los pozos petrolíferos lo que provocó una bajada de las exportaciones que destruyó por completo la base de la economía libia. Además, las tensiones entre las tribus vencedoras del conflicto civil hicieron el país ingobernable especialmente en su zona interior, donde el poder del CNT era nulo. Esta crisis total repercutió en servicios básicos como la sanidad, la educación o la construcción. Libia pasó de ser uno de los países más ricos del mundo árabe a uno de los más pobres.

Esta etapa se conoce como el otoño libio y se caracterizó por ser una etapa convulsa, de crisis económica-social y por la falta de ayuda internacional para llevar a cabo una transición democrática (se abandonó la vía de Irak y Afganistán). El CNT se autodenominó como gestor del país, pero la realidad es que solo gobernaba las grandes ciudades y dentro de las mismas había una gran división entre las milicias todavía existentes. El otoño libio desembocó en unas elecciones para una nueva cámara legislativa, el llamado Congreso General Nacional de Libia (CGN), que tenía como misión

redactar una Constitución y finalizar la transición democrática hacia el primer gobierno ejecutivo tras unos 18 meses.

Las elecciones legislativas, basadas en un proceso de elección mixto entre partidos políticos y representantes independientes, fueron ganadas por Alianza de Fuerzas Nacionales (islamismo moderado y de corte liberal en lo económico), seguidos por los Hermanos Musulmanes y su brazo político el Partido Justicia y Desarrollo. Pese a su resultado, los Hermanos Musulmanes fueron ganando poder en el CGN conforme fueron pasando los meses de este gobierno provisional.

Cuando se acercaba la fecha de convocar las elecciones de 2014 el CGN no tenía redactada la Constitución y solicitó prorrogar su mandato, algo que fue visto por parte de los militares como un intento de los Hermanos Musulmanes de aferrarse al poder como estaban haciendo en el vecino Egipto. Es entonces cuando aparece uno de los personajes más relevantes de la última década en Libia, el general Jalifa Haftar.

Haftar movilizó a gran parte del Ejército Nacional Libio y puso en marcha la Operación Dignidad, una ofensiva militar con la que disolvió el CGN de Trípoli y atacó a los grupos islamistas que dominaban Bengasi y que eran leales al CGN. Como contraataque, el CGN formó la Coalición Amanecer Libio, formado por milicias leales al CGN, islamistas y brigadas de la parte del ejército no leal a Haftar. Esta Coalición se asentó en Tobruk, al este del país, mientras que el régimen de Haftar se hizo con los territorios del oeste y con la capital histórica del país, Trípoli.

Nos encontramos por tanto con dos bandos enfrentados en una nueva Guerra Civil, esta vez con las fuerzas leales a Haftar enfrentadas al CGN y sus aliados. En esta ocasión, la comunidad internacional se mantuvo mayoritariamente en un estado neutral, pero hubo países, especialmente en el mundo árabe, que se posicionaron en el conflicto. La mayor parte de los países se posicionaron a favor del general Haftar y en contra de los Hermanos Musulmanes. Es el caso de los países vecinos como Egipto, EAU, Arabia Saudí, Sudán y Jordania, además de Francia y Rusia. Del lado del CGN se colocaron Turquía y Qatar, dos países que buscaban ganar peso en el mundo árabe, y contaron con el apoyo internacional de Italia.

La guerra se desarrolló principalmente en la zona costera del país, lo que dejó el interior del país totalmente desprotegido institucionalmente y cayó en poder de señores de la guerra, mafias y grupos yihadistas. Aprovechándose del control que tenían de pozos petrolíferos y de la trata ilegal de inmigrantes, grupos yihadistas como Ansar Al Sharía, Al Qaeda y el Estado Islámico tomaron control del sur del país y amenazaron con ser actores relevantes en la Guerra Civil. Además, las tribus tuaregs del desierto sur se han convertido en garantes del narcotráfico y el tráfico de personas ante las necesidades económicas derivadas de la última década en la región. Esta crisis ha provocado que las otrora conflictivas fronteras con Chad y Níger se han vuelto líneas difusas y controladas por mafias que quieren llevar inmigrantes a Europa a través del desierto libio, principalmente con destino a Italia (Informe 2015/16 de Amnistía Internacional).

Una vez la Guerra Civil provocó una inmigración ilegal descontrolada y la proliferación de grupos terroristas es cuando la Unión Europea decidió intervenir en el país para controlar la situación. Ante este problema se presentó una Agenda Europea de Migración 2014-2020 con el fin de gestionar toda la crisis y evitar que uno de los países vecinos se convirtiese definitivamente en un estado fallido. En el apartado de la guerra contra el terrorismo, varios medios rusos informaron de la presunta existencia de tropas europeas y norteamericanas sobre el terreno para combatir el creciente poder del Estado Islámico en Libia y los ataques de la inteligencia combinada de Reino Unido y Estados Unidos ha realizado operaciones contra objetivos yihadistas en terreno libio desde 2016 en

adelante.

Mientras se luchaba contra la amenaza del terrorismo yihadistas y las mafias la Guerra Civil continuaba destruyendo el país en el norte y desentendiéndose del sur. La estructura tribal del país, otrora controlada por Gadafi, se fortaleció por todo el país tras el desmantelamiento del régimen de Gadafi. Y es que Gadafi era un líder autoritario y dictatorial, pero tenía controlado un país incontrolable y su ausencia desencadenó la autodestrucción del frágil estado libio. Además, la ausencia de un aparato político o de una sociedad civil activa en la búsqueda de derechos hizo imposible la creación de estado viable después de Gadafi, ya que todo desencadenó en una guerra entre jefes tribales, milicias y grupos dentro del ejercito opositor a Gadafi (Andreatta, 2016, p.21).

Además, el hecho de ser un país limítrofe por vía marítima con Italia y una de las vías de acceso de la inmigración ilegal en Europa ha hecho que las mafias y grupos yihadistas hayan tomado un poder en Libia que carecen en el resto del Magreb. Han aprovechado la guerra civil y la ausencia de una autoridad fuerte para proliferar y extender un régimen de terror por la inmensa mayoría del territorio libio. A esto hay que sumarle el abandono por parte del estado (sea con ayudas económicas en un estado democrático o con sobornos por parte de Gadafi) de las tribus del interior del país, lo que ha provocado que hayan tenido que dedicarse al tráfico de armas, droga y personas para mantenerse económicamente ante la amenaza que suponían los grupos yihadistas. Estos grupos se han aprovechado del nulo poder de cualquiera de los dos beligerantes de la guerra civil en el interior de Libia para establecer y controlar el conocido como Paso del Salvador, un corredor por el desierto para la droga y trata ilegal de personas. Además, las mafias que controlan el Sahel (zona desértica inmediatamente inferior al Magreb) han aprovechado la ausencia de un estado que regule las fronteras para llevar a decenas de miles de inmigrantes a la costa de Libia sin problemas y embarcarlos rumbo a Italia, financiándose en el proceso.

La situación del país ha persistido en un caos inalterable hasta bien poco, concretamente mediados de septiembre de 2019, cuando la ONU, liderada por Alemania, decidió preparar un encuentro entre las fuerzas beligerantes en el conflicto civil libio con el fin de restablecer el orden en el fallido estado magrebí. La idea era juntar al líder del CGN, Al-Sarraj, y al general Haftar bajo el amparo de organizaciones como la Unión Europea, la Liga Árabe y la Unión Africana. Sin embargo, una nueva intervención extranjera paralizó cualquier intento de paz. En este caso fueron los gobiernos conjuntos de Rusia y Turquía los que decidieron ser jueces del conflicto negociando un alto al fuego entre las dos partes. Este alto al fuego fracasó, y el conflicto volvió a reanudarse a las pocas semanas. Los intentos de paz resultaron infructuosos, pero si cambiaron el panorama de apoyos internacionales en el conflicto. Rusia retiró el apoyo a Haftar tras boicotear la cumbre de Moscú, Egipto no quería seguir financiando una guerra que no tenía fin, los países europeos y árabes excepto Turquía retiraron el apoyo a Al-Sarraj y gobiernos como el italiano habían pasado de apoyar al CGN a ser más pragmáticos y esperar a ver quien ganaba la guerra para entonces sacar un acuerdo beneficioso.

La llegada de la pandemia del covid-19 paró la guerra en el año 2020 tras pedir ambos beligerantes que se declarase un toque de queda nacional y un confinamiento en las zonas más pobladas del país. También en 2020 se acordó un alto al fuego entre ambas facciones y se llegó a un acuerdo para regular el uso de la fuerza armada y la salida de los mercenarios del Sahel que ambos bandos tenían contratados. El primer indicio de unificación y regulación del país llegó con la ayuda de la ONU y la formación de la Comisión Militar Conjunta 5+5, compuesta por diez representantes de ambos bandos. Hoy en día, el conflicto parece cercano a acabarse al haber perdido Haftar gran parte de sus apoyos militares y políticos y estar convocadas unas elecciones que formarán un gobierno provisional el 24 de diciembre de 2021. Hasta entonces, Libia está gobernada (al menos la zona

reconocida por la ONU) por el empresario Abdul Hamid Mohamed Dbeibé y el ex embajador Mohamed Menfi. Pese a que estas elecciones vislumbran un horizonte democrático en Libia, el hecho de que fuerzas leales a la familia Gadafi, a Haftar o a los Hermanos Musulmanes puedan presentarse y ganar las elecciones podría reventar el alto al fuego y que el conflicto armado vuelva al país.

Lo que nos ha demostrado el caso de Libia es que destruir un régimen absolutista puede ser relativamente sencillo si se consigue un apoyo internacional interesado, pero para construir un estado con bases democráticas se necesita mucho más que el uso de las armas. La caída de Gadafi desenmascaró a un país excesivamente ligado a la cultura tribal y ausente de la vida civil, ciudadana y universitaria que si llevó la democracia a otros países del entorno. El hecho de que en Libia solo existiesen Gadafi, el ejército con sus dirigentes opositores y decenas de tribus con sus milicias particulares hizo imposible que se llevase a cabo un proceso democratizador en el país tras la caída del dictador.

La ausencia de partidos políticos, asociaciones de estudiantes, eruditos o sindicatos de trabajadores hizo que todo el peso de la transición recayese sobre las milicias armadas. Unas milicias que no tenían un líder único, sino un enemigo común. Esto inevitablemente derivó en un conflicto interno entre distintas partes del ejército rebeldes que desde 2014 hasta 2020 tuvieron dividido el país entre Trípoli y Bengasi, dos gobiernos incapaces de gobernar ya que estaban más preocupados en la aniquilación del contrario.

El caso de Libia nos devuelve a la cuestión de si la democracia es realmente viable dentro de las singularidades del mundo árabe. Si obviamos los crímenes contra la humanidad y la represión a la población, la realidad es que Libia bajo el régimen de Gadafi era un país pujante en lo económico y con influencia dentro de todo el mundo árabe mientras que desde la caída del dictador el país ha caído el descontrol absoluto. Cabe destacar que a diferencia de Túnez o Egipto, en Libia no existía ninguna cámara legislativa con poco poder o una cultura de oposición política al régimen, sino conflictos internos dentro del ejército y una influencia extranjera en ciertos altos cargos que opositaban a suceder a Gadafi.

Como en Egipto, nos encontramos con un enfrentamiento frontal entre ejército y gobierno provisional. A diferencia de Túnez, donde el ejército fue el garante del gobierno provisional, Libia siguió la vía egipcia del golpe de estado militar ante el aumento de poder del gobierno provisional, con la diferencia de que en Egipto fue exitoso y en Libia derivó en un conflicto civil que duró desde 2014 hasta 2020. De hecho se produjo el mismo enfrentamiento entre los altos cargos militares y los Hermanos Musulmanes, un conflicto que se ha extendido por el mundo árabe en la última década.

La excepcionalidad de Libia la encontramos en la intervención internacional en contra de Gadafi y posteriormente en el conflicto civil. Mientras que en 2011 se nos presentaba un escenario parecido a la guerra de Irak o de Afganistán, las potencias occidentales decidieron abandonar Libia a su suerte una vez el dictador fue asesinado y las rutas del petróleo fueron de nuevo abiertas. De hecho, solo se volvieron a inmiscuir cuando la inmigración ilegal desde el Saleh y el terrorismo yihadista empezaron a amenazar a sus países. Nos encontramos por tanto con una intervención interesada de las potencias occidentales y no de un verdadero ímpetu de traer la democracia y garantizar que esta pueda florecer en el país.

Por último, hay que destacar el papel que han tenido los grupos yihadistas, las mafias y las tribus tuaregs del sur durante la última década. Desde 2014, estas organizaciones controlan y dominan el sur del país y la frontera con los países subsaharianos, creando un ente independiente a los

gobiernos de Trípoli y Bengasi y actuando en algunos casos como ciudades-estado al más puro estilo de las polis griegas. La influencia y el poder de la familia Gadafi es también muy fuerte en esta región, donde muchas tribus siguen jurando lealtad a los descendientes del dictador. A día de hoy resulta imposible imaginarse un escenario en el que sin ayuda externa el gobierno libio pueda volver a tomar la jurisdicción de esta zona del país sin enfrentarse a los señores de la guerra que la ocupan, por lo que un nuevo conflicto no debe descartarse.

De cara al futuro Libia afronta muchos interrogantes. Desde si las elecciones de 2021 podrán traer un futuro democrático conjunto al país, cual será el futuro del sur del país y la frontera con Chad y Níger, como se combatirá a los grupos terroristas, que papel jugarán los jefes tribales en el nuevo estado, cuales serán los principales aliados del nuevo gobierno, que posición tomarán las fuerzas que pierdan las elecciones o como se desmilitarizará un país que se ha convertido en un auténtico bazar de armas. También tendrán que asumir su papel en la crisis migratoria y combatir a las mafias, ocuparse de los cientos de miles de desplazados libios y reconstruir la zona norte del país. En definitiva, construir un estado democrático en un país sin garantías democráticas. Sin duda, una tarea difícil para el nuevo gobierno provisional que tiene en sus manos el destino de la próxima década en Libia.

Siria, por su parte, vive una situación muy parecida a la de Libia con la diferencia de que su conflicto civil no fue decidido por potencias extranjeras y por tanto sigue vigente y que en su territorio el islamismo radical ha tenido un peso mucho más fuerte que en el caso de Libia.

Siria, como Libia, es un país dominado por una dictadura autoritaria desde los años sesenta. En este caso el régimen lo impone el partido único Baaz, de corte socialista árabe, estando el resto de partidos políticos (Hermanos Musulmanes o comunistas) ilegalizados (Álvarez-Ossorio, 2016, p.112). Dentro del partido Baaz, el poder recae en la familia al-Asad o por miembros cercanos a la familia, siendo actualmente la cabeza visible del régimen Bashar al-Asad, que lleva gobernando desde el año 2000, cuando sucedió a su padre Háfez. El régimen sirio está considerado como uno de los más autoritarios dentro del mundo árabe en el siglo XXI, compartiendo podio con la Irak de Saddam y la Libia de Gadafi (Álvarez-Ossorio, 2016, p.112). El principal instrumento de represión es la mujabarat, el servicio de inteligencia de los al-Asad, que ha mantenido detenidos a opositores políticos durante décadas.

Respecto a la situación socio-económica del país antes de 2011, podemos hablar de Siria como un país con orientación neoliberal en lo económico (Álvarez-Ossorio, 2016, p.113) y siguiendo el ejemplo del estado chino en cuanto a producción y exportación al mismo tiempo que impera un régimen de partido único. Este modelo económico aumentó las desigualdades entre el pueblo llano y las élites, en su mayoría corruptas (Siria está entre los 30 partidos más corruptos del mundo según Transparencia Internacional). Esto hizo que la población pasase de estar el 20% por debajo del umbral de la pobreza en el 2000 al 34% en 2010. También se ha producido una caída en el PIB, una subida del paro juvenil y un éxodo rural masivo en busca de empleo. También hay que destacar para entender el fuerte levantamiento de la población siria es que es a más joven de todo el mundo árabe, con un 55% por debajo de los 25 años en 2011. Por tanto hablamos de un régimen parecido al de Mubarak en Egipto o Ben Ali en Túnez, una dictadura de partido único disfrazada de república presidencialista con problemas económico y sociales especialmente acentuados en la población joven y en la comunidad universitaria.

La primavera árabe llega a Siria unos meses después que en los países cercanos, concretamente el 6 de marzo cuando se produjo la detención de una docena de niños en la localidad de Deraa, un hecho que produjo que los jefes tribales del sur del país se manifestasen pidiendo reformas en el país y la

destitución del gobernador de la ciudad, Atef Nayib (primo de Bashar al-Asad) (Álvarez-Ossorio, 2016, p.115). La respuesta del régimen, a diferencia de otros países, fue una represión fulminante desde el primer minuto, asesinando a medio centenar de personas en la ciudad durante los próximos días. Este hecho hizo que la revolución se extendiese por el resto del país, con cientos de miles de ciudadanos tomando las calles del país. La estrategia de al-Asad para reprimir las revueltas fue la violencia y el uso del sectarismo para dividir a la población. Este sectarismo, a la larga, desembocaría en un conflicto civil (Álvarez-Ossorio, 2016, p.115).

Las peticiones iniciales de los manifestantes eran reformas políticas, la persecución de la corrupción, la liberación de presos políticos o el establecimiento de un sistema pluripartidista para el poder legislativo (Álvarez-Ossorio, 2011, p.2), pero con el tiempo se centraron en la dimisión de Bashar y la caída del régimen de Baaz para el establecimiento de un sistema democrático. Pronto, varias ciudades y barrios fueron liberados de la represión de Baaz y se establecieron consejos locales para gestionar cada zona. El régimen sirio empezaba ya a perder poder en ciertas zonas del país. La postura de Bashar ante el establecimiento de estos consejos fue el declararlos como una insurrección islamista radical, dando pie al uso de las armas y la violencia policial para destruir estas pequeñas asociaciones (Álvarez-Ossorio, 2011, p.2). Fue la conocida como “solución militar” de al-Asad para combatir la revolución, alegando que se enfrentaban a una conspiración sectaria, siempre apoyándose en su condición de musulmán chií (Álvarez-Ossorio, 2011, p.2). El hecho de que al-Asad culpase a Al-Qaeda de la situación del país fue la justificación necesaria para seguir usando la violencia contra lo que eran protestas y asociaciones civiles pacíficas. Además, Al-Asad culpó a Qatar de financiar a los manifestantes (Álvarez-Ossorio, 2016, p.117), acentuando la rivalidad entre las dos ramas del Islam. Para justificarse, el régimen liberó a presos asociados con el yihadismo para poder combatirlos como parte de la represión contra la población. Este hecho a largo plazo sería muy perjudicial, ya que muchos de los liberados acabarían en puestos de gobierno relevantes del ISIS o de Al-Qaeda. El régimen continuó arrojando, torturando y asesinando a opositores (más de 300 según Amnistía Internacional y unas 75000 desapariciones forzadas).

Pese a que al-Asad tenía bastante reprimidas las revueltas, el hecho de usar una represión tan fuerte hizo que muchos cargos militares abandonaran el régimen y se uniesen progresivamente a los rebeldes (Álvarez-Ossorio, 2016, p.118) entre ellos el coronel Riad al-Asad, familia directa del dictador. El nuevo ejército rebelde pasó a conocerse como el Ejército Libre Sirio (ELS). Ya bajo un solo liderazgo y unificando todas las asociaciones que habían surgido en las diferentes ciudades, el ELS pasó a ser la alternativa democrática al régimen de al-Asad, declarando estar en busca de “una Estado libre y democrático donde todos los ciudadanos sirios disfruten de los mismos derechos y vivan en libertad, paz y justicia”. El ELS fue aumentando en poder hasta rozar los 100000 soldados desertores a mediados de 2012. Junto al ELS se opusieron al régimen otras milicias más radicales, es el caso de los islamista Tawhid de Alepo o los Faruq de Homs (Álvarez-Ossorio, 2016, p.119).

Empezaba entonces una guerra civil entre el régimen y el ELS donde al-Asad contaba con toda la ventaja armamentística y logística. El hecho de que las potencias occidentales vetaran la venta de misiles en territorio sirio (Álvarez-Ossorio, 2016, p.119) hizo imposible para el ELS combatir a la aviación del régimen, aunque si contaron con apoyo logístico de países interesados en destronar a los al-Asad como Turquía, Arabia Saudí o Qatar. El hecho de que el ELS no pudiese derrotar fácilmente al régimen hizo que el conflicto se alargase y el frente común empezase a desmembrarse (Álvarez-Ossorio, 2016, p.120). Dentro de la oposición a al-Asad surgieron nuevos grupos yihadistas como al-Nusra (franquicia siria de Al-Qaeda) o el Estado Islámico en Irak, que posteriormente se convertiría en el Daesh extendiéndose a Siria aprovechando el conflicto civil. Estos grupos estaban financiados y patrocinados de manera externa por fuerzas externas a día de

hoy no identificadas, pero que les otorgaron fuerza económica y militar necesaria como para combatir al mismo tiempo a al-Asad y al ELS.

Sin duda dentro de estos grupos yihadistas destaca el Daesh o Estado Islámico. Su entrada en Siria a raíz del conflicto civil hizo que se establecieran con fuerza en el país llegando a dominar extensas porciones de territorio nacional. Pronto el Daesh se convirtió en la principal fuerza captadora de yihadistas internacionales y creó un régimen propio con instituciones, leyes basadas en la sharía y una férrea dictadura islámica más propia de la Edad Media que del siglo XXI. La llegada del Daesh al conflicto y sus atentados internacionales (Rusia, Bruselas o París) hizo que las potencias occidentales empezasen a bombardear suelo sirio en busca de eliminar objetivos yihadistas. Es entonces cuando se produce la entrada de Estados Unidos y Rusia en el conflicto en contra de Daesh y de sus testaferros Arabia Saudí e Irán en la guerra en el ELS y el régimen de al-Asad. Y es que el conflicto sirio pasó de ser una guerra civil a un punto de conflicto internacional dentro del mundo árabe, un territorio más donde Arabia Saudí e Irán podían batirse en su guerra fría particular (Álvarez-Ossorio, 2016, p.122). A estos países hay que sumarle el interés en Siria de otros estados como Qatar o el régimen turco de Erdogan.

Ante esta escalada de violencia el régimen optó por la estrategia de convertir las ciudades de su país a cenizas para evitar que los opositores pudiesen organizarse (Álvarez-Ossorio, 2016, p.122). En los siguientes años al-Asad bombardeó y destruyó barrios enteros de ciudades como Homs, Hama o Alepo, dejando miles de refugiados huyendo hacia Europa por la frontera con Turquía. Como seguían cediendo terreno ante el ELS y el Daesh, el régimen optó por forzar más la máquina de represión y autorizó el uso de armas químicas contra los opositores en sus rutas de abastecimiento y en las afueras de las ciudades que controlaban. Este acto violó el Estatuto de Roma y se consideró un crimen de guerra por la comunidad internacional (Álvarez-Ossorio, 2016, p.123). Pese a este uso indiscriminado de la violencia y armas de destrucción masiva, gobiernos como el americano o el ruso se abstuvieron de participar de manera directa en la guerra de Siria y solo pactaron con el gobierno de al-Asad el cese del uso de este tipo de armas. Ante el avance del ELS el régimen recibió ayuda de sus grandes aliados Irán y Rusia, el primero con una intervención directa de su Guardia Republicana (Álvarez-Ossorio, 2016, p.124) y el segundo evitando la caída de los al-Asad en verano de 2015 ante el avance del ELS por la costa mediterránea (Álvarez-Ossorio, 2016, p.125). Llego un momento en la guerra donde al-Asad cedió el mando total de las operaciones a Rusia, Irán y Líbano, siendo estos países los que hicieron retroceder al ELS y mantener vivo al régimen.

Este apoyo internacional a los al-Asad alargó la guerra y la encrudeció, llevando a Siria una división territorial entre régimen, ELS y facciones yihadistas que hizo que el país se convirtiese en un Estado Fallido en 2016. La población civil fue asesinada indiscriminadamente en este conflicto, con cerca de medio millón de muertos desde 2011 hasta 2016 en un país de 17 millones de personas. Además hay que sumar el drama de los refugiados (cerca de 6 millones de ciudadanos sirios) que han pedido asilo en Turquía, Líbano y algunos llegando a Europa provocando una crisis migratoria sin precedentes en el siglo XXI en el viejo continente. Siria se había convertido en un país inhabitable por sus ciudadanos, con un retroceso de la esperanza de vida de 70 a 55 años, la pobreza llegando al 85% de la población y un PIB desplomado a los niveles más bajos del mundo (Álvarez-Ossorio, 2016, p.125-126). Todo eso en menos de un lustro de conflicto.

Actualmente Siria continua sumergida en un conflicto civil con decenas de actores internacionales involucrados. Estados Unidos ganó fuerza en la guerra durante el mandato de Trump para combatir a Daesh en suelo sirio, Turquía entro activamente en la guerra generándose un conflicto con las tropas rusas que se habían desplegado cerca de Damasco, apareció el estado kurdo en el norte del país, desligándose del régimen de al-Asad y combatiendo al Daesh por su cuenta. De momento el

único conflicto cerrado en Siria es la lucha contra el Estado Islámico, que acabó en 2019 con la toma por parte del estado kurdo del último reducto de los yihadistas en el país, el resto sigue igual que cuando empezaron las revueltas de 2011.

A día de hoy, el régimen de al-Asad gobierna cerca del 65% del país ayudado por armamento ruso y tropas de Irán y Hezbollah (brazo paramilitar chií de Líbano) (Álvarez-Ossorio, 2016, p.125). Sin la ayuda internacional el régimen no se podría haber sostenido durante la última década y seguramente hubiésemos vivido un desenlace parecido al de otros países árabes, pero esta ayuda internacional ante el peso político de Siria en la región ha hecho imposible este cambio y actualmente Bashad al-Asad es considerado internacionalmente como el jefe del estado sirio. El 25% del país lo contra el ELS, rebautizado como Fuerzas Democráticas Sirias. El restante 10% lo ocupan organizaciones islamistas radicales como al-Nusra. Además existe el estado no reconocido de Kurdistán, aliado con el ELS y con Estados Unidos como fuerza en la región al servicio de la potencia occidental en su lucha contra Daesh y demás organizaciones terroristas.

En resumen la primavera árabe ha provocado la caída del país desde un régimen autoritario hasta el Estado Fallido más importante del mundo árabe. Un país donde ya no se vislumbran las fronteras, con decenas de organizaciones que reclamaban su dominio sobre porciones del país y cientos de miles de refugiados a lo largo y ancho del mundo. Además y a diferencia del caso de Libia, es un conflicto que dista mucho de acabarse ya que existen intereses de potencias extranjeras que dificultan un acuerdo de paz entre las fuerzas de al-Asad y la coalición rebelde. La demostración que la intervención internacional puede ser beneficiosa siempre que se haga sin mirar a intereses particulares y mirando exclusivamente por preservar los Derechos Humanos. En el momento que las potencias internacionales entraron en la guerra de Siria buscando mantener un aliado estratégico en la región es cuando el conflicto se volvió interminable y derivó en un país destruido por la guerra y sin un futuro a medio plazo claro. Una muestra de que una transición democrática puede acabar en el desastre para un pueblo y en la destrucción de un país.

El desenlace más probable a día de hoy es que Bashar al-Asad pacte con Estados Unidos y la Unión Europea una paz que le mantenga en el poder a cambio de no violar los Derechos Humanos o cometer más crímenes de guerra contra la coalición rebelde que mantiene el poder en el noreste del país. Aunque habrá que poner de acuerdo a un país que ha ganado fuerza en el mundo árabe como es el régimen turco de Erdogan, que sigue financiando a los rebeldes y a grupos salafistas del sur del país.

En conclusión, el pueblo sirio se encontrará con un país arrasado, sin casa, sin trabajo, sin expectativas de futuro y con un régimen con más poder que nunca gracias al apoyo externo. A eso hay que sumarle la repatriación de millones de refugiados que seguramente no quieran volver al país y la crisis en la región que ha supuesto el conflicto entre Turquía y Rusia o el siempre presente conflicto entre Arabia Saudí e Irán. En definitiva, un Estado destruido y un pueblo que muy seguramente vuelva a caer bajo el yugo de los al-Asad, unos al-Asad que se aferran a seguir gobernando lo que actualmente es un montón de escombros y miseria. Hoy en día se estima que la reconstrucción del país costará 400 mil millones de dólares, una reconstrucción que se ha ofrecido a financiar Irán, lo que convertiría (aún más) a Siria en un estado satélite de Teherán. La conclusión es clara, Siria es ya solo un pedazo de tierra a repartir entre las potencias ganadoras de la guerra, un estado derruido y sin expectativas de futuro para una población en su mayor parte dispersa por el mundo o en conflicto armado. Difícil si no imposible vislumbrar un futuro democrático en el país en las próximas décadas.

Sin embargo, el caso más sangrante dentro del mundo árabe es el de Yemen. Situado al suroeste de la península arábiga, Yemen es una república árabe que ha vivido en constante crisis desde la

creación de su estado en 1990 (Fuentes Cobo, 2015, p.235). Yemen actualmente es una combinación de violencia sectaria, regiones ocupadas por milicias yihadistas y una invasión extranjera que tiene colapsado al estado internacionalmente. Para entender el caso de Yemen debemos retrotraernos a 1990, cuando se funda el Yemen moderno gracias a la unificación de la República Árabe de Yemen (Norte, islamistas) y la República Popular Democrática de Yemen (Sur, comunistas) (Freeman, 2017, p.14). La relación entre ambas repúblicas no fue fácil desde el principio, produciéndose la primera guerra civil en 1994 y resultando en el exilio de la mayoría de líderes socialistas yemeníes. En el poder quedaría el militar norteño Ali Abdullah Saleh (Fuentes Cobo, 2015, p.240)) que instauró una dictadura hasta la llegada de la primavera árabe en 2011.

Geopolíticamente Yemen es un país clave en el mundo árabe. Gracias a su posición en el mar Rojo controla la entrada en el Canal de Suez y por ende el tráfico de hidrocarburos hacia Estados Unidos y China. Socialmente se encuentra divididos entre la mayoría suní (centro y sur del país) y una importante minoría chií de nombre zaidí (norte del país y casi exclusiva de Yemen). Esta minoría, que gobernó el país durante siglos (Fuentes Cobo, 2015, p.241), perdió poder a raíz de la unificación y empezó a radicalizarse con los años. Esta situación fue aprovechada, como no, por Arabia Saudí e Irán, que apoyaron y financiaron a sus respectivas ramas del Islam. Incluso tras la derrota del sur en la guerra civil de 1994, Arabia Saudí siguió financiando a los grupos políticos del sur en la oposición de Saleh.

El gran punto de inflexión en la historia de Yemen es sin duda la intervención americana en Oriente Medio (Kuwait y Afganistán). En la primera guerra Yemen se mantuvo neutral pese a las insistencias y sanciones impuestas por Arabia Saudí y EEUU. Como consecuencia de estas sanciones el régimen de Saleh se posicionó a favor de bandas terroristas como Al-Qaeda y Yemen se convirtió en uno de los mayores criaderos de terroristas internacionales dentro del mundo árabe. El conflicto contra Estados Unidos también derivó en la centralización de poderes en torno a Saleh, confirmados mediante un referéndum en el año 2001. La entrada de Al-Qaeda en el país se confirmó oficialmente en enero de 2009 con la proclamación de AQAP (filial arábiga de la banda terrorista) y su asentamiento en el país y en el sur de Arabia Saudí, siendo su objetivo principal los chiíes zaidíes, a los que consideran herejes (Fuentes Cobo, 2015, p.243-244).

Poco a poco el estado yemení fue renegando de Al-Qaeda hasta el punto de combatirla directamente cuando empezaron a dominar poblaciones del sur del país. Fue en 2010 cuando empezaron combates directos por las ciudades de Lawdar y Hata, conflicto que acabó con la victoria del ejército del régimen (Fuentes Cobo, 2015, p.244-245). Estos combates se prolongarían durante los siguientes años, con batallas como la de Zinjibar (2014), el atentado de Al Aradi (2013), el asesinato de Ahmad Ashrafeddín (2014) o la fundación del Estado Islámico en Yemen en 2015 (Fuentes Cobo, 2015, p.246).

Por tanto nos encontramos en 2011 con un país bajo una dictadura militar, con fuertes diferencias sociales entre norte y sur, un conflicto sectario dentro del Islam, intervención extranjera por parte de las potencias árabes y Estados Unidos y una fuerte presencia de grupos yihadistas en el sur del país (Fuentes Cobo, 2015, p.245).

La revolución en Yemen es, como en el caso de los países de su entorno, una expansión de la ola iniciada en Túnez y que sirve para denunciar la corrupción estatal, las malas condiciones de vida de la población y el hecho de que el presidente Saleh estuviese pensando en perpetuar a su familia en el poder cual monarquía hereditaria con el nombramiento de su hijo Ahmed como nuevo gobernante (Fuentes Cobo, 2015, p.246). Tras varios disturbios en la capital Sanaa que se saldaron con docenas

de muertos, los insurgentes obligaron a Saleh a abandonar el país y refugiarse en Arabia Saudí (Fuentes Cobo, 2015, p.246). Al mismo tiempo, perdió el reconocimiento de la comunidad internacional y tuvo que buscar apoyos en el Consejo de Cooperación del Golfo, cosa que había rechazado durante sus décadas de mandato. Durante este exilio el poder recayó en Rabbuh al-Mansur al-Hadi, vicepresidente del país.

Hadi, militar y mano derecha durante muchos años de Saleh, convocó unas elecciones falsas para calmar a la población las cuales ganó al no presentarse ningún otro candidato (Fuentes Cobo, 2015, p.247). Con una nueva constitución y promesa de elecciones generales en 2014, Hadi pudo asegurar el retorno, lleno de críticas, de Saleh al país además de su inmunidad absoluta. Al final Hadi sirvió de testaferrero de la familia Saleh durante los tiempos de crisis, ya que el ejército y los servicios de seguridad seguían en manos del dictador gracias a la figura de su hijo Ahmed. El corto mandato de Hadi estuvo marcado por los actos terroristas de AQAP contra su gobierno (Fuentes Cobo, 2015, p.247) y la inestabilidad creada por las relaciones turbias con los grupos locales norteños de creencia chií. El principal punto de conflicto fue con la milicia Ansaralá y el control de Saada, provincia de mayoría chií. Pese a garantizar el régimen de Hadi la libertad de credo en el país y reconstruir la zona tras los disturbios de 2011, la milicia Ansaralá rechazó los términos y se posicionó como oposición armada a nivel nacional del régimen, pasando de ser una crisis local y sectaria a un conflicto de identidad nacional. Empezaba entonces, en septiembre de 2014, la segunda guerra civil de Yemen, esta vez entre la minoría huzí y el régimen de Hadi (Fuentes Cobo, 2015, p.248).

Los huzíes, con un gran apoyo popular y presuntamente financiados por Irán (Fuentes Cobo, 2015, p.248), entraron en la capital del país y obligaron a Hadi a formar un gobierno de unidad y se convirtieron en socios de gobierno de Hadi. El gobierno de coalición duró poco y que en enero de 2015 los huzíes dieron un golpe de estado y tomaron el poder de la capital expulsando a la cúpula de Hadi que se refugió en la localidad sureña de Adén y pidió apoyo a la comunidad internacional ante el golpe de estado que se había producido en Saná (Fuentes Cobo, 2015, p.248-249). Nos encontramos por tanto en una situación similar a la de Libia, con dos gobiernos enfrentados y que dividen el país en dos bandos, por un lado los hutíes en Saná y por otro los leales a Hadi en Adén.

Pronto los gobiernos extranjeros se posicionaron en el conflicto civil yemení, mientras Hadi contó con el apoyo de las monarquías árabes del Golfo y de Estados Unidos mientras a los hutíes les apoyaba Irán (Freeman, 2017, p.14) y cierta influencia del anterior dictador Saleh, que se desvinculaba así de Hadi en busca de retomar el poder por medio de una alianza con las milicias hutíes (Fuentes Cobo, 2015, p.249). También aparece en este conflicto el actor del yihadismo radical por parte de Al-Qaeda que tomó varias ciudades en el sur del país y del Estado Islámico que fue tomando fuerza conforme el conflicto dejaba zonas desgobernadas (Fuentes Cobo, 2015, p.249).

El punto de inflexión que hace que Yemen pase de ser un estado dividido a ser un estado fallido es la ofensiva de los hutíes en la primavera de 2015 contra el gobierno de Hadi y las milicias yihadistas del sur (Fuentes Cobo, 2015, p.249-250). A raíz de esta ofensiva que parecía decantar la guerra y el control de los recursos energéticos a favor de los hutíes y por tanto de Irán, Arabia Saudí intervino dando apoyo militar aéreo al régimen de Hadi, que empezó a bombardear ciudades controladas por el enemigo (Freeman, 2017, p.14-15). Cuando parecía que el régimen de Hadi caía junto a su capital Adén, los ejércitos del CCG con apoyo logístico de Estados Unidos intervinieron en el país y aplacaron la ofensiva de los hutíes a base de bombardeos masivos hacia sus tropas y su población civil (Fuentes Cobo, 2015, p.251-252). Al final esta intervención no está sino enmarcada en la guerra fría árabe entre Irán y Arabia Saudí, usando a dos bandos enfrentados a nivel civil para

poder librar una guerra sin enfrentarse directamente (Freeman, 2017, p.14). El hecho de que Yemen sea un país limítrofe con Arabia Saudí y la posibilidad de que Irán pudiese tener un estado satélite tan cercano al país ha hecho que el régimen saudí haya entrado de manera tan directa en el conflicto a favor de Hadi bombardeando el país e interviniendo con fuerzas militares terrestres y marítimas. Caso aparte es la postura de Estados Unidos en el conflicto, obligados a dar carta blanca al régimen saudí y justificándose en la amenaza terrorista para dar apoyo logístico y financiación al régimen de Hadi. No fue hasta febrero de 2021 cuando la presidencia de Biden retiró el apoyo norteamericano de la guerra de Yemen.

La intervención armada de Arabia Saudí y sus aliados no solo ha destruido las infraestructuras del país, sino que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en el país, con hambrunas y epidemias que han diezmando a la población civil. Según fuentes de la OMS, al menos 20 millones de yemeníes necesitan ayudas sanitaria y la cifra de muertos desde que empezó el conflicto civil supera las 100000 bajas (Freeman, 2017, p.14-16).

El conflicto a día de hoy sigue abierto, con hasta cuatro actores reclamando el poder en Yemen (hutíes, Hadi, yihadistas e independentistas del sur) lo que hace imposible vislumbrar un vencedor del conflicto por la vía armada en el medio plazo. La única vía que se podría utilizar es un tratado de paz con un gobierno de coalición auspiciado por la ONU (vía libia) pero esto parece imposible debido a las continuas interferencias de Irán y Arabia Saudí en el conflicto. Al final, lo que parecía un conflicto civil que iba a aupar a los chiíes al poder en detrimento de los suníes ha derivado en un estado colapsado por la guerra y donde las milicias son las que imponen la ley en cada región que controlan, convirtiendo de paso al país en un hervidero para grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico de Yemen (Freeman, 2017, p.17), dos de las ramas más peligrosas del yihadismo en el mundo.

Por tanto, Yemen es un estado fallido donde su población se muere de hambre o enfermedades letales (Freeman, 2017, p.14-15) y cuyo territorio es utilizado por las potencias árabes para librar las guerras que no pueden librar directamente entre ellas. Gane quien gane este conflicto, pensar en un futuro democrático es una utopía ya que ambos bandos están liderados por dictaduras militares que sin duda impondrían en el país en caso de vencer a su enemigo, además de convertirse en un estado satélite bien del régimen de Teherán o bien del régimen de Riyad.

Las conclusiones que podemos sacar de los casos de los tres países árabes que se han convertido en estados son tres. En primer lugar encontramos que son países que se han convertido en escenarios para la guerra fría entre las grandes potencias árabes, representadas principalmente en las figuras de Arabia Saudí, Irán y Turquía. Son los intereses particulares de estos tres países los que han alargado los conflictos civiles hasta el punto de destruir el país por dentro y evitar que un gobierno de transición se haya podido asentar o directamente se haya podido derrocar al dictador de turno. La financiación de los bandos del conflicto ha evitado que las guerras civiles hayan seguido su rumbo natural hacia la victoria del bando con mayor apoyo popular lo que ha alargado los conflictos durante décadas afectando a las infraestructuras, el poder del gobierno y a los ciudadanos de cada país.

El segundo es el poder que ha tenido el yihadismo radical en cada uno de estos tres casos. La influencia de Al-Qaeda y el Estado Islámico en estos países ha crecido hasta el punto que han llegado a gobernar (con leyes estatales, gobernantes civiles, etc) amplias zonas del país (Fuentes Cobo, 2015) y a ser la verdadera garantía de seguridad para sus ciudadanos por encima del estado. Este hecho ha justificado la intervención de las potencias occidentales en la zona a través de las fuerzas beligerantes en la guerra civil, lo que las ha fortalecido y por tanto alargado el conflicto. El

hecho de que las fuerzas terroristas hayan tomado posesión de varias rutas y recursos estratégicos ha hecho que los PIB de estos países se hayan desplomado y hayan tenido que lidiar con problemas que no tenían antes de 2011 como son la bancarrota de sus regímenes o la inmigración ilegal masiva descontrolada a través del Sahel.

Por último, nos encontramos con la nula cultura democrática dentro de cada uno de estos países, algo que es una constante en la cultura árabe. En Libia el gobierno de transición duró un año antes del golpe de estado de Haftar, en Yemen los hutíes acabaron con el gobierno de coalición en cuestión de meses y en Siria los opositores fueron incapaces de crear un frente conjunto reconocido por la ONU para hacer frente a la tiranía de Bashar al-Asad. A diferencia del caso de Túnez, en estos países no hablamos de partidos políticos o de sindicatos con líderes exiliados, sino de fuerzas militares opositoras, milicias rebeldes o desertores del régimen. Esta falta de cultura democrática ha condenado a estos tres países a vivir un conflicto armado sin vistas a finalizar y ha convertido a sus países en campos de batalla con cientos de miles de muertos, millones de refugiados y un estado que lo único que mantiene de antes de 2011 son unas fronteras que no se respetan y un ejército cada vez más fragmentado.

## **AISLAMIENTO POLÍTICO: LOS CASOS DE LÍBANO Y ARGELIA**

Dos casos, no tan relevantes cuando hablamos de primavera árabe pero sí claves en la geopolítica de la región, que hay que tratar son el de Líbano y Argelia, dos estados que sirven como “estados colchón” para que las grandes fuerzas sunníes del mundo árabe no estén intercomunicadas. Dos estados que han afrontado la primavera árabe de una manera muy similar: el aislamiento político y la lucha contra el terrorismo interno.

El caso de Líbano es paradigmático cuando hablamos de “estados colchón”. Gran parte del mundo conoce el caso de Israel como estado creado artificialmente para dar poder a una minoría religiosa en el mundo árabe, pero pocos conocen que Líbano es un caso muy similar solo que sustituyendo el judaísmo por el cristianismo maronita. La iglesia maronita o de Antioquía es una rama del catolicismo establecida en la región de Siria desde el siglo V y sus fieles siempre han sido perseguidos por sus vecinos árabes, especialmente durante la época de las cruzadas y el reinado del imperio otomano. No fue hasta la caída de este imperio que los moranitas, auspiciados por Francia y sus intereses económicos en los puertos de Beirut y Tiro, crearon el estado independiente de Líbano.

En un principio el estado fue dependiente de Francia, pero tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el estado independiente libanés fue proclamado oficialmente. Como Israel, Líbano pronto sufrió intervenciones extranjeras con el fin de acabar con el gobierno cristiano de Chamoun que les gobernaba. En 1958 se produjo la primera guerra civil provocada por islamistas financiados por Egipto, en 1975 la segunda entre fuerzas moranistas radicales y musulmanes pro Palestina y sus milicias. Esta guerra, donde intervinieron la Liga Árabe, Israel, Estados Unidos y Francia entre otros, derivó en la creación y asentamiento en el sur del país de la milicia yihadista Hezbollah, un grupo terrorista de corte chií y presuntamente financiado por Irán y Siria para combatir a Líbano e Israel.

Socialmente, Líbano es un país en una crisis étnica y religiosa constante (Rabih, 2012, p.211). Pese a que la mayor parte de la población es cristiana moranista, existen importantes minorías que no se sienten representadas por el gobierno y que en más de una ocasión han ocasionado disturbios e incluso golpes de estado. El hecho de que el presidente de la república tenga que ser por ley un cristiano moranista molesta mucho a la población musulmana y a minorías no representadas en el parlamento como los drusos, una religión monoteísta de la región. También hay que tener en cuenta que, como en el caso de Israel o Armenia, la inmensa mayoría de la población libanesa vive en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, siendo estos en su mayoría cristianos moranistas.

Por tanto en Líbano nos encontramos con un estado creado de manera ficticia por una potencia occidental (Francia) para beneficio de una minoría (moranistas) y que fue creado como colchón entre Siria y Egipto para que el socialismo árabe no abarcara toda la región y dejara sin poder a Estados Unidos y el bando occidental en la Guerra Fría (Rabih, 2012, p.216-217). Además es un país muy dividido étnicamente, con muchos problemas religiosos y con una inmensa mayoría de su población en diáspora por el mundo. Tampoco en lo económico es Líbano un país muy boyante, ya que los conflictos civiles destruyeron el núcleo financiero de Beirut y hoy en día sobrevive gracias a una gran deuda externa con las potencias occidentales, que son las que están reconstruyendo el país.

La llegada de la primavera árabe en 2011 conmocionó a uno de las potencias regionales que más influencia tienen en la política de Líbano, el régimen autoritario de al-Assad en Siria. Conforme el conflicto sirio fue radicalizándose con la entrada de potencias extranjeras, la aparición de los nacionalistas kurdos y el asentamiento de Daesh en el país fue afectando de manera progresiva a la política exterior libanesa, una política que hasta ese momento había sido de moderación y aislamiento hacia el conflicto civil sirio.

Uno de los principales puntos de conflicto de Líbano fue la llegada masiva de refugiados sirios (Chaya, 2016, p.12-16). La llegada masiva de estos ciudadanos (un aumento del 25% respecto a la población del país) puso en jaque a los sistemas públicos tales como sanidad, vivienda o educación, ya que pese a ser un país bastante avanzado respecto a sus vecinos, Líbano y sus infraestructuras seguían viviendo las consecuencias de la guerra civil del siglo pasado (Chaya, 2016, p.13). El Banco Mundial calificó esta acogida masiva de refugiados como un “impacto de coyuntura sobre un país en vías de desarrollo”, especialmente afectando a las inversiones extranjeras y el deterioro de los servicios públicos del país (Chaya, 2016, p.13-14).

Pero los refugiados no son el único punto de conflicto que la crisis siria ha traído a Líbano. La guerra civil siria ha reavivado diversos conflictos que afectan de lleno a la política exterior libanesa, tales como el conflicto palestino-israelí, el soberanismo de los maronitas, la guerra entre suníes y chiíes así como el conflicto con Hezbollah, la guerra fría entre Arabia Saudí e Irán y, por supuesto, el conflicto étnico y religioso entre cristianos y musulmanes. El problema principal de Líbano es sin duda Hezbollah y su brazo militar en el este del país así como en la frontera con Siria (Rabih, 2012, p.219-220).

Hezbollah (traducido como Partido de Dios) es una organización militar y política de origen en Líbano que muestra su apoyo a los gobernantes chiíes de la zona (Chaya, 2016, p.18). Su origen de hecho recae en las fuerzas militares iraníes y desde su creación han servido como la fuerza terrorista no oficial de la teocracia de Teherán. Mientras que en el mundo occidental se les considera como terroristas, el mundo árabe considera a Hezbollah como un movimiento de resistencia islamista de Líbano cuyo objetivo es eliminar a los maronitas y llevar el islamismo al gobierno del país. Hezbollah ya venía creando conflictos en el país desde 2006, pero fue en 2012 cuando intervino oficialmente en la guerra de Siria a favor de al-Assad, algo que (pese a no ser parte del gobierno oficial) contradecía con la política de aislamiento de Beirut (Chaya, 2016, p.19). En contra de Hezbollah surgió la Alianza del 14 de marzo, un grupo político conformado por suníes, drusos y maronitas que tenían como objetivo posicionarse en contra de al-Assad y en favor del ejército rebelde. Esta alianza política defendía que una Siria sin los al-Assad sería beneficiosa para los intereses de Líbano en su lucha por mantener la neutralidad dentro del mundo árabe (Rabih, 2012, p.219). Este conflicto llegó al parlamento libanés provocando la renuncia de el premier del país. También llegó a las calles, provocando enfrentamientos entre barrios suníes y otros alauitas, necesitando de la intervención del ejército para frenar la escalada de violencia en ciudades como Trípoli. Además, el conflicto sirio ha afectado a algunas localidades del norte del país que han sido destruidas por los combatientes en el conflicto (Arsal o Qaa).

La crisis ha llegado también al espectro político, ya que Líbano lleva desde 2013 sin unas elecciones realmente regeneradoras en el país. Actualmente podemos destacar dos grandes bloques enfrentados, por un lado el presidente Michel Aoun (secular maronita apoyado por Hezbollah y los chiíes) y por el otro la oposición liderada por Sleiman Frangieh, con apoyos suníes y drusos. El gabinete actual ha tenido muchos problemas para llevar a cabo medidas debido a estos grandes problemas en la sociedad civil, haciendo imposible mantenerse neutral en el conflicto sirio (Chaya, 2016, p.20).

También es importante destacar como las potencias del mundo árabe han afectado a Líbano. Arabia Saudí, siguiendo su línea de apoyo a los suníes, se posicionó a favor de la neutralidad del país en el conflicto sirio, aunque con los años ha ido descuidando su relación con Líbano para centrarse más en el conflicto yemení (Chaya, 2016, p.20-21). Además, el hecho de que Líbano no sancionase la intervención iraní en Siria hizo que Arabia Saudí repudiase al país, desalentando a sus ciudadanos a visitar el país, quitando la financiación y declaró a Hezbollah como organización terrorista. Por el otro lado, Irán financió y usó a Hezbollah como su brazo armado en el conflicto sirio y actuando desde las sombras también en la política de Líbano (Chaya, 2016, p.21).

Podemos concluir que la guerra de Siria, así como el resto de conflictos derivados de la primavera árabe, ha influido negativamente en un país tan étnicamente separado como es Líbano. La crisis de los refugiados, asumida por un país sin las infraestructuras para asumirla, ha llevado a altos índices de desempleo, sanidad y educación desbordadas y una caída vertiginosa en la inversión extranjera. Además, su política interna se ha visto sobrepasada por el conflicto entre Hezbollah, apoyados por Irán, y los partidos políticos suníes, liderados por Movimiento del Futuro y apoyados por Arabia Saudí. Este conflicto político, que ha llegado a las calles, ha conllevado cortes recurrentes de luz y agua y enfrentamientos ocasionales entre etnias y barrios. Por tanto, podemos calificar a Líbano como un Estado-Rehén del conflicto sirio a través de la alianza entre Siria e Irán, presa de los continuos combates y usado como baza negociadora. De hecho, lo único que sostiene a Líbano de no caer en el caos islamista radical es la intervención de la Unión Europea y el interés de las potencias occidentales de mantener un aliado cristiano entre tanta potencia árabe.

Los próximos meses de Líbano se prevén bastante parecidos a los últimos años tras la primavera árabe, ya que la pacificación de Siria es un proceso que se espera que se de en el largo plazo. A partir de ese momento se deberá producir un proceso de limpieza en el país, empezando por devolver de manera ordenada a los millones de refugiados sirios en el país y posteriormente equilibrar el poder de las fuerzas políticas entre los que acaben ganando y perdiendo el conflicto. Una victoria de al-Asad fortalecería la amenaza iraní sobre Líbano mientras que una victoria de los rebeldes dejaría un vacío de poder en la región que podría ser ocupado por grupos islamistas como Hezbollah, Daesh o Al-Qaeda. También el país afronta problemas propios como la desigualdad económica, gestionar las heridas de la guerra civil y organizar el país de mejor manera para que las diferentes razas y religiones puedan convivir en paz dentro del estado libanés.

Otro caso paradigmático de como puede afectar la primavera árabe a un régimen aislacionista es el caso de Argelia. Situado al este de Marruecos, Argelia es el país más grande de todo el Magreb y uno de los más ricos en recursos naturales así como en calidad de vida de su población. Independiente desde que acabase la dura guerra de liberación nacional contra Francia, Argelia se rigió en su momento por una dictadura de partido único gobernada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) y el ejército a partes iguales (Cerroloza, 2013, p.71). Este gobierno dual impuso un régimen de corte socialista árabe, nacionalizando la gran mayoría de sectores esenciales del país como la agricultura, los hidrocarburos o la industria de metales pesados. Este sistema económico perduró durante casi 20 años, cuando en la década de los 80 la caída del precio del petróleo llevó al régimen a realizar cambios estructurales para que la sociedad civil no se alzase en armas contra ellos (Cerroloza, 2013, p.71).

Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes y Argelia vivió ya su propia “primavera” en 1988, cuando la población civil tomó las calles reclamando trabajo, vivienda y libertades. Tras semanas de enfrentamientos entre régimen y manifestantes, el líder del FLN Benyedid anunció una serie de medidas para el aperturismo político, entre las que se encontraba una nueva Constitución donde se reconocía el pluripartidismo y se liberalizaba el régimen argelino (Cerroloza, 2013, p.72). Fue en 1990 cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones municipales libres, ganadas por una coalición islamista de nombre FIS, una fuerza política que venía gestándose a espaldas del régimen desde los años setenta en las mezquitas. El FIS consiguió la victoria gracias al descontento hacia el régimen por su sistema autoritario y su gestión de la crisis económica.

El poder político del FIS crecía con los meses y eso puso en jaque la posición de poder que ostentaban el FLN y el ejército argelino. Ambas fuerzas contraatacaron con medidas represivas, primero el FLN en 1991 encarcelando a varios dirigentes del FIS antes de la primera vuelta de las elecciones generales y después el ejército cancelando la segunda vuelta ante una previsible victoria de los islamistas. El ejército forzó la dimisión del presidente Benyedid e impuso el estado de emergencia en todo el país al mismo tiempo que ordenaba la disolución del FIS y la detención de sus cabezas visibles. Empezaba entonces la que sería conocida como década negra, diez años de mandato militar con fuertes represiones contra la población civil. Durante esta década, la represión militar tuvo como consecuencia la radicalización de los grupos islamistas cercanos a FIS, lo que llevó a la entrada en el país a grupos yihadistas como AIS o GIA que sumieron al país en un clima de atentados continuos contra las fuerzas del gobierno, afectando directamente a la economía y calidad de vida de los argelinos.

Las mayores masacres de todo el conflicto se produjeron en 1997, fecha cuando el régimen se vio obligado a volver a convocar elecciones para calmar los ánimos de conflicto de los grupos islamistas (Cerroloza, 2013, p.74). Finalmente, en 1999, fue nombrado presidente de la república el islamista Abdelaziz Buteflika, que ha gobernado el país desde entonces hasta nuestros días. Buteflika, que representaba el término medio entre el islamismo del FIS y la cúpula militar (Cerroloza, 2013, p.74), realizó un proceso de apertura del país hacia el mundo occidental, logrando firmar tratados muy beneficiosos para el país con la Unión Europea y Estados Unidos. Pese a sus éxitos en política exterior, Argelia sigue siendo un país que vive bajo las consecuencias de décadas de conflicto interno y las condiciones de vida de la población llevan bajando desde hace bastante tiempo (Cerroloza, 2013, p.74).

Durante la primera década del siglo XXI bajo el mandato de Buteflika, Argelia se especializó en la producción de gas y la inversión en infraestructuras públicas con el fin de calmar las ansias de la población de mejorar su calidad de vida. La situación económica está definida por una falta de diversificación de los ingresos y un alto desempleo juvenil (Cerroloza, 2013, p.75-76). Cuando llegaron las protestas de 2011 el gobierno de Buteflika apostó por aumentar el déficit presupuestario para subir el gasto público y calmar así las protestas en busca de una mejora socio-política en Argelia.

Las protestas de 2011 no supusieron ninguna sorpresa para el régimen, ya que el país estaba acostumbrado a sufrir levantamientos civiles durante los anteriores cuarenta años, por lo que estaban más preparados que otros regímenes locales para controlar a este tipo de movimientos. La principal petición de los manifestantes fue mejorar las condiciones de empleo de la juventud así como reclamar más intervención del gobierno en el futuro de sus ciudadanos. Las protestas se extendieron por las grandes urbes del norte como Argel, Orán o Cabilia demandando acceso a la vivienda, menos cortes energéticos o la mala situación de los servicios públicos. En el sur del país, región casi deshabitada y abandonada por parte del gobierno por la dificultad de gestionar tanto

terreno tan mal comunicado, las protestas tardaron en llegar pero pronto se movilizaron buscando mejorar las condiciones laborales. Aprovechando las elecciones de 2014, las asociaciones de parados del sur lograron una mejor distribución de la renta y la financiación de varios proyectos gubernamentales para dar trabajo a los jóvenes de la zona (Cerrolaza, 2013, p.79-80).

Pese a todas estas protestas, Argelia se mantuvo aislada de la ola de cambio político que se extendió por todo el Magreb y Oriente Próximo (Bustos García de Castro, 2014, p.2). El país logró esto gracias al sistema político vigente en Argelia que goza de unas características que lo hacen muy poco proclive a los cambios pese a la corrupción sistemática que se produce en el régimen. El hecho de ser un híbrido entre democracia y dictadura les ha permitido cierto margen de acción con las protestas de la población concediendo una serie de libertades que un régimen autoritario cerrado no podría conceder. También el hecho de no ser un régimen presidencialista (caso de Egipto o Túnez) evita que la dimisión de la cabeza visible conlleve la caída de todo el aparato político, ya que existe un peso muy importante del ejército y los servicios de inteligencia en la estabilidad del gobierno (Cerrolaza, 2013, p.81-82). También hay que destacar el carácter de fragmentación social que sufre Argelia a la hora de organizar una protesta uniforme. Décadas de guerras civiles, atentados terroristas, división norte-sur y conflictos étnicos derivaron en la incapacidad de la oposición de presentarse de manera unida y fuerte ante un régimen tan sólido como es el argelino (Cerrolaza, 2013, p.82-83).

Pese a este control que ha tenido el régimen sobre las protestas, si podemos hablar de un cambio en Argelia a raíz de la primavera árabe. Decisiones del régimen como subvencionar los alimentos esenciales, subir el salario mínimo y las pensiones o reformar el sistema jurídico sirvieron para que la población se convenciese de cierto aperturismo del régimen. También ha afectado a la sociedad en sus reuniones políticas, ya que ahora son mucho más controladas a la hora de realizar protestas por miedo a acabar como sus vecinos Egipto o Túnez. La proximidad en años con la década negra también influyó en esto último, la sociedad argelina no estaba preparada para otro conflicto civil que dejase decenas de miles de muertos. Además, la población teme una intervención occidental similar a la de Libia (mismo interés por sus recursos naturales) lo que provoca que los opositores son más comedidos con sus protestas y tratan siempre de hacerlo por la vía pacífica y legal. También temen que se produzca un conflicto similar al sirio que acabe por destruir todo el estado y provoque una crisis de refugiados (Cerrolaza, 2013, p.83-84).

Por tanto, podemos concluir que Argelia es un régimen que ha evitado un gran cambio político gracias a cuatro factores principales. El primero es la política de aislamiento que realizó el régimen respecto a sus vecinos árabes, siendo especialmente conflictiva su relación con Marruecos. Esto hizo que la ola democrática fuese más leve en Argelia. El segundo factor fue el carácter híbrido del gobierno, siendo una dictadura con ciertos tintes democráticos, lo que le permitió primero no tener reclamaciones básicas como el derecho a voto o libertades básicas como reunión o asociación y segundo porque pudieron aprobar medidas aperturistas que calmaron los ánimos de los manifestantes, cosa que otros regímenes, por su carácter cerrado, no pudieron hacer. Además, la solidez del régimen argelino, cuya fuerza a diferencia de Túnez, Egipto o Libia, no recae en el presidente y si en el sistema que le sostiene. En Argelia el presidente Buteflika es solo la figura de consenso entre islamistas (forma parte del partido) y la cúpula militar (perteneció a ella), sirviendo como cabeza visible de un entramado mucho más complejo donde las fuerzas armadas, el servicio de inteligencia y los jefes tribales del sur son los que verdaderamente gobiernan el país. Por tanto, el hecho de derrocar a Buteflika no hubiese servido para nada. El tercer factor es el miedo al terrorismo. Argelia venía de una década en los noventa de absoluto horror, con atentados casi diarios y fuerzas enfrentadas en las ciudades y barrios. El resultado fue tal matanza civil que, sumado al recuerdo de la guerra de independencia, la sociedad argelina fuese más cautelosa que la

egipcia o la tunecina a la hora de tomar las calles, crear disturbios o reclamar medidas como la caída total del régimen o la dimisión del actual presidente. Y el último factor es la poca unidad política de la oposición. Al estar la mayor fuerza política (los islamistas del FIS) representada en el régimen gracias a la figura de Buteflika resulta difícil encontrar en Argelia una oposición frontal fuerte hacia el régimen. Además, la fragmentación social a raíz de la guerra civil y la mala relación entre el norte rico y el sur deshabitado hace imposible una unidad nacional en contra del sistema (Bustos García de Castro, 2014, p.9).

De cara a los próximos años, el futuro no es tan negro para Argelia como podría parecer. Si, es un país regido por un régimen casi dictatorial, pero la realidad es que ha avanzado bastante en cuanto a libertades y mejoras económicas para la sociedad civil, colocándose como uno de los países africanos más desarrollados. Además, los fuertes lazos con el mundo occidental y en especial con Francia y Estados Unidos hace que Argelia sea uno de los países punteros en cuanto a inversión extranjera y exportación de hidrocarburos, lo que ha enriquecido tanto al régimen como a sus trabajadores. Por tanto, pese a que en la creación de un sistema democrático Argelia sigue estando lejos, aunque más cerca que la mayoría de sus vecinos, en materia de calidad de vida no se puede negar que su política de aislamiento hacia el mundo árabe y aperturismo hacia el mundo occidental ha mejorado la situación de sus ciudadanos, tanto en materia económica como en materia social.

## CONCLUSIONES

### Causas de la primavera árabe

Habiendo analizado el surgimiento de la primavera árabe en cada uno de los países que componen la región nos encontramos con unos factores comunes que explican como un hecho aislado como fue el suicidio de un mercader en una ciudad de Túnez se convirtió en el mayor movimiento democrático en la historia del mundo árabe. El primer aspecto que hay que mirar es el contexto histórico, jurídico y económico que venía sucediendo en los países del Magreb y Oriente Próximo desde la década de los 90 hasta 2011 (Álvarez-Ossorio, 2013. Melián Rodríguez, 2016). En todos los estados nos encontramos con figuras autoritarias representadas en dictadores disfrazados de presidentes o monarcas absolutos que habían reprimido de mayor o menor manera toda oposición política mostrada por partidos laicos, islamistas o sindicatos de trabajadores. También nos encontramos con una crisis económica derivada del uso de dos sistemas económicos deficientes y que reparten de manera muy mal la riqueza como son el socialismo árabe primero y las medidas ultraliberales impuestas por el Banco Mundial y el FMI después. Esta desigualdad se acentuó con una corrupción sistemática en las élites gobernantes, algo que pasaba en todo el mundo árabe, ya que la mayor parte del dinero generado por las exportaciones iba directo al patrimonio personal del régimen y no repercutía en la población civil. El punto álgido de la crisis llegó años antes de las revueltas, con la crisis de 2008, que sumada a una sequía provocó una escasez de alimentos básicos, un alto paro y una falta de expectativas para la comunidad universitaria que obligaba a la inmigración o a que todo lo invertido en educación cayese en saco rato.

La situación de la población civil era dramática, pero ya lo era los años anteriores y no ocurrió algo parecido a la primavera árabe hasta de 2011. Resulta difícil movilizar a una población en contra de la tiranía de un régimen y más cuando ya han sufrido conflictos previos (guerras civiles, guerras de liberación), si este goza de una fuerza armada abrumadora o si directamente no existe una cultura de lucha obrera o política (Algora Weber, 2013). Hacía falta una chispa que encendiese la llama. Es entonces, en diciembre de 2010, cuando nos encontramos con la inmolación de Mohamed Bouazizi, un humilde mercader al que la policía de Ben Ali le había quitado su puesto ambulante al no tener el permiso para vender en la calle (Álvarez-Ossorio, 2013). Un hecho aislado, casi anecdótico, que sirvió como analogía para los problemas de la juventud tunecina (falta de oportunidades laborales, abuso policial, desesperación por el futuro, etc). Es inevitable hacer la comparación con el atentado de Sarajevo en 1914 que acabaría derivando en la Primera Guerra Mundial, un hecho aislado que canaliza los problemas de la sociedad de un país y acaba provocando un conflicto internacional sin precedentes.

Sin embargo, la lógica en países subdesarrollados como son la mayoría de los tratados es que una postura hermética del régimen hubiese sido suficiente para evitar que lo que estaba ocurriendo en Túnez se trasladase a sus países, pero no contaron con dos herramientas modernas que fueron vitales para que la primavera árabe pasase de ser un conflicto local a uno internacional, las redes sociales y el papel de Al-Jazeera (Foley, 2012, p.505-506). En este aspecto la juventud fue más lista que los regímenes, que creían tener todo controlado sobornando a la prensa local y lanzando mensajes institucionales, pero no contaron con que los grupos opositores se organizarían a través de redes sociales y no en reuniones en lugares públicos como bazares o mezquitas. Cuando los regímenes optaron por cancelar las redes sociales en sus territorios ya era tarde, los opositores ya estaban organizados y las revueltas no se podían controlar sin tomar medidas. Otra figura clave para la difusión de la información fue el medio Al-Jazeera. Al-Jazeera es el medio extraoficial del régimen de Qatar, un régimen enfrentado a los otros dos grandes gigantes del mundo árabe como son Arabia Saudí e Irán. Su cierta independencia periodística respecto a medios locales y los

intereses de Qatar de crear un medio de comunicación en el que la información no estuviese censurada (excepto la que les moleste a ellos) hizo que los hechos que estaban sucediendo en Túnez, tanto imágenes de las revueltas como de la represión del régimen llegasen tanto al resto del mundo árabe, incentivando revueltas similares en otros países, como al mundo occidental, generando simpatía de la población hacia los opositores árabes y obligando a los gobiernos a tomar partido a favor de aquellos que reclamaban la democracia, cosa que antes no hacían, ya que en su mayoría apoyaban la continuidad de los regímenes a cambio de ser garantes de sus intereses en la zona.

Por tanto, podemos concluir que la causa primigenia de la primavera árabe es una crisis social, económica y política latente desde hace décadas en el mundo árabe, pero no se pueden entender los sucesos de 2011 y el efecto de ola democrática sin el protagonismo de la juventud y la comunidad universitaria, el uso de las redes sociales y el periodismo “libre” de Al-Jazeera.

### **Medidas de los regímenes. Como silenciar una revolución**

Una vez el conflicto civil creado por la primavera árabe llegó a cada uno de los países los distintos regímenes tuvieron que buscar formas de calmar los ánimos de cambio de la población. Habiendo tratado cada caso de manera individual podemos ver que medidas comunes fueron las que funcionaron y cuales derivaron bien en la caída de los líderes autoritarios o bien en una guerra civil.

Una de las primeras medidas que tomaron los regímenes fue intentar controlar la información a través de sus medios de comunicación afines y los mensajes institucionales de sus líderes en medios públicos (Álvarez-Ossorio, 2013. Melián Rodríguez, 2016). Una vez vieron que, debido al poder que tuvieron las redes sociales en la primavera árabe, esto no servía para evitar las concentraciones de opositores optaron por dos vías: prometer reformas políticas y la represión policial o militar contra los manifestantes. A largo plazo ha resultado ser de mayor utilidad la primera vía, realizar pequeños cambios en la Constitución, crear un tipo de cámara baja de tipo consultivo o dar la posibilidad a que los gobernantes locales sean elegidos por el pueblo. También medidas en lo económico como ayudas a jóvenes o un aperturismo a la inversión extranjera sirvieron para satisfacer en el corto plazo las necesidades de los ciudadanos. La promesa de mayores cambios como una transición democrática, un régimen mixto o una persecución de la corrupción estatal, pese acabar diluyéndose con el tiempo, sirvieron para que la oposición abandonase las calles y pasase a pelear con el régimen en las cámaras legislativas. Esta estrategia fue la seguida por países como Marruecos, Argelia o Jordania, regímenes que mantuvieron su poder de manera relativamente pacífica gracias a cierto aperturismo democrático (Álvarez-Ossorio, 2013. Melián Rodríguez, 2016. Bustos García de Castro, 2014) .

La estrategia opuesta fue la represión protagonizada por policía, servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, que a través de detenciones, interrogatorios, torturas, asesinatos y violaciones de los Derechos Humanos quisieron acabar con las manifestaciones y reuniones de opositores. Esta estrategia tuvo resultados diversos, ya que mientras en la península arábiga las fuerzas conjuntas de los reinos de la región intervenían para parar estos procesos de cambio de manera exitosa, en países como Túnez, Libia, Egipto y Siria estas matanzas solo sirvieron para avivar la llama de la revolución y acabar en una caída del régimen o en una guerra civil (Álvarez-Ossorio, 2013. Gutiérrez de Terán, 2015. Álvarez-Ossorio, 2016) . La diferencia clave la encontramos en la intervención militar y el apoyo político de las potencias mundiales en cada uno de los casos. Mientras las buenas relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí hizo que los reinos arábigos pudiesen reprimir las revueltas sin generar eco a nivel mundial y sin consecuencias a nivel de ONU o Derechos Humanos (Foley, 2012), en los países del Magreb los países occidentales si se

posicionaron a favor de aquellos que luchaban por la democracia, aunque eso supusiese romper viejas alianzas con los regímenes autoritarios. El nulo apoyo a Ben Ali, Gadafi y Mubarak por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, así como la intervención militar en favor de los opositores en el momento en el que el régimen empezó a cruzar las líneas rojas que les había marcado la comunidad internacional hizo que la estrategia de represión no funcionase. Distinto es el caso de al-Asad en Siria, que pese al apoyo occidental a los rebeldes el régimen ha conseguido mantenerse gracias a la ayuda externa de dos potencias como son Rusia e Irán.

Por tanto, podemos concluir que la estrategia marcada por los regímenes para detener la ola democrática no importó tanto como el hecho de si los gobiernos tuvieron o no el apoyo de las potencias mundiales. Vemos al final como los regímenes con apoyos sólidos en la comunidad internacional (Marruecos y los reinos arábigos con Estados Unidos, Argelia y Jordania con la Unión Europea, Siria con Irán y Rusia) lograron mantenerse en el poder mientras aquellos que tuvieron a las potencias occidentales enfrente fueron los que acabaron cayendo. Al final todo se reduce a que papel toman las potencias occidentales en cada conflicto nacional.

### **El caso de Túnez. Los factores para que se asiente la democracia**

Habiendo analizado el cambio político que cada estado ha sufrido desde 2011 hasta nuestros días hemos visto como el único caso donde la democracia ha logrado asentarse con una base más o menos sólida es el de Túnez, donde la caída del régimen de Ben Ali dio paso a una república semipresidencialista donde ya se han llevado a cabo media docena de elecciones sin problemas de enjundia (Álvarez-Ossorio y Ketiti, 2013). Por tanto, debemos mirar al caso de Túnez para concluir cuales son las razones por las que la democracia ha logrado asentarse en clima tan hostil como era el de la primavera árabe en particular y el del mundo árabe en general.

En primer lugar hay que indicar que Túnez gozaba de una estructura parlamentaria, unos sindicatos de trabajadores y opositores políticos fuertes antes de los sucesos de 2011 (Álvarez-Ossorio, 2013). Esto no es un hecho menor, ya que se ha demostrado que en los países donde existe una cultura democrática previa es más fácil que se llegue a instaurar un régimen democrático antes de que una fuerza autoritaria aparezca para intentar obtener el poder. Sin embargo, este también es el caso de países como Egipto, Marruecos o Siria, por lo que la existencia de estos antecedentes políticos no es una garantía para el éxito democrático.

Si nos encontramos con tres factores únicos que hacen de Túnez un caso único en la primavera árabe. El primero y más importante es el apoyo del ejército nacional al proceso democrático. Esto es algo que no vemos en ningún otro país y que resultó clave para que Túnez derrocara a Ben Ali primero cuando los militares le retiraron su lealtad y como garantes de la democracia después, no interviniendo en la vida política del país (Melián Rodríguez, 2016). Esta actuación modélica de las fuerzas armadas contrasta con las matanzas en Bahréin (Fabani, 2011), la dictadura militar egipcia (Álvarez-Ossorio, 2013) o las guerras civiles en Siria (Álvarez-Ossorio, 2016) y Libia. Una vez el ejército estuvo de parte del proceso democrático este pudo mantenerse firme ante las amenazas de los herederos de Ben Ali, el yihadismo o las mafias del sur. También encontramos las figuras de políticos que podrían considerarse como los padres de la democracia tunecina. Estos políticos se erigieron como caras visibles y fueron líderes que buscaron consensuar las decisiones troncales como la Constitución con todos los grupos políticos relevantes (islamistas, laicos, liberales y socialistas árabes). El último factor fue el apoyo total de la comunidad internacional hacia los manifestantes que estaban en las calles de Túnez. En el momento en el que las potencias occidentales, otrora socios de Ben Ali, decidieron apoyar de manera total a los grupos que buscasen instaurar la democracia en Túnez. Esto por ejemplo no pasó en países como Bahréin (por la

influencia de Arabia Saudí), Libia (división de apoyos entre Turquía y la UE) o Siria (guerra fría Arabia Saudí – Irán).

Por tanto, podemos concluir que los factores para que la democracia triunfe en el mundo árabe son la existencia de una cultura democrática previa, el apoyo del ejército nacional a las fuerzas democráticas, figuras democráticas fuertes y consensuadoras y el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, ¿Son viables estas condiciones en el mundo árabe? ¿Es Túnez el camino a seguir o la excepción a la norma?

### **Viabilidad de la democracia en el mundo árabe**

Este trabajo ha servido para ver como la democracia ha fracasado en todos los países del mundo árabe tras los sucesos de 2011 excepto en uno, el país que lo empezó todo, Túnez. Es por tanto necesario que nos planteemos si realmente un sistema democrático basado en los valores occidental así como la cultura grecorromana es viable dentro del mundo árabe, sus costumbres y su contexto geopolítico. El mundo árabe nunca ha tenido un pasado democrático en el que fijarse y más bien su cultura emana de la organización tribal, la organización en torno a un gobernante que junta poder político y religioso, así como en muchos casos ha vivido oprimido por imperios como el Bizantino, el Otomano o más recientemente por las potencias europeas durante la colonización de África y Asia. Es decir, los habitantes de esta zona del mundo no conocen en su larga historia otro sistema político que no sea una coalición tribal o un régimen autoritario. En contraposición, Europa recuperó los ideales democráticos de Grecia y Roma durante el Renacimiento y la Ilustración, pero esos ideales ya existieron en el viejo continente y eran más fáciles de adoptar, aunque en muchos casos no fuese hasta bien entrado el siglo XX cuando la mayor parte de países europeos adoptasen un sistema democrático.

Por tanto, debemos preguntarnos si este ideal occidental de llevar la democracia/libertad al resto de países del mundo (eslogan usado en todas las guerras americanas en el extranjero) es realmente viable y si la población civil de estos países es compatible a este sistema político. Ya desde los tiempos de la democracia griega, los grandes filósofos advertían de como la democracia podía acabar en el desastre de un estado si los ciudadanos no tenían los conocimientos necesarios para entenderla y trabajarla. Este ha sido el caso de muchos países árabes que iniciaron el proceso democrático en 2011. Países como Siria, Libia, Egipto o Yemen son ahora peores en condiciones de vida, expectativas de futuro o peso político internacional que antes de 2011. Para ellos, la llegada de la idea de democracia ha sido un paso atrás en su desarrollo.

¿Es realmente la democracia el mejor sistema político en el mundo árabe? La historia nos demuestra que no. Salvando el ejemplo de Túnez, que ya empieza a generar grietas dentro del sistema con populista queriendo asaltar el poder, ninguna democracia ha sido duradera y beneficiosa dentro del mundo árabe. ¿La población de estos países vive oprimida bajo un régimen autoritario? Sin duda. ¿Viviría mejor en una democracia? Es una pregunta que ha tenido muchas respuestas en los últimos años, la mayoría de las mismas negativas.

Por tanto, podemos concluir que los ideales de democracia y libertad que tan comunes son dentro del mundo occidental quizás no son trasladables sin cambios en el mundo árabe. En esta región del mundo la religión tiene un peso mucho mayor al que tiene en occidente en el siglo XX, no existe una cultura jurídica ajena al gobierno, muchas familias a la hora de votar eligen solo al cabeza de la misma para que vote por el resto, las etnias o razas son mucho más relevantes, la figura del jefe local o tribal es de relevancia casi al nivel del gobernante impuesto por el gobierno, etc. Resulta impensable que un sistema político basado en el individualismo y la libertad personal tenga cabida

en un mundo tan dependiente de figuras de autoridad, tanto familiares (jefe de familia toma decisiones por todos los miembros de la misma), jefes tribales o locales y figuras de autoridad religiosa como imanes o cargos similares.

Como conclusión, queda claro que la democracia de valores occidentales es incompatible con el mundo árabe y trae más desgracias que alegrías a la población civil de la región. Es necesario que políticos y pensadores relevantes del mundo árabe piensen en un sistema que tenga en cuenta las inquietudes de la juventud árabe, más abierta a cambios, pero que tenga en cuenta las particularidades de la región que se han expuesto anteriormente. También sería importante que las potencias occidentales redujesen su influencia sobre esta zona del mundo, ya que su lucha de intereses solo ha traído ruina a la región. Países como Irak o Afganistán en su día y Libia o Siria en la actualidad son demostraciones de que la intervención extranjera, sino llega de forma casi altruista y con la intención exclusiva de defender los Derechos Humanos es imposible que produzca algo bueno a largo plazo para los habitantes de cada país afectado (Álvarez-Ossorio, 2016). Debe de ser la ONU (aunque con su sistema de vetos es casi imposible) la que mantenga alejadas a las potencias y deje que las poblaciones árabes sigan su rumbo histórico natural, los lleve a una democracia a lo occidental, a un homólogo árabe o siga con regímenes autoritarios. No se puede cambiar a la fuerza lo que no desea ser cambiado.

Por último, a la pregunta de si es viable la democracia en el mundo árabe la respuesta sería no siempre que se presente en el modelo occidental. Sería más interesante buscar un híbrido democrático que se adapte a la realidad del mundo árabe y que sea creado por ellos, no impuesto desde los sillones de Bruselas, Londres y Washington.

### **Guerra fría clásica y saudí-iraní: El bucle temporal del mundo árabe**

Tras la Segunda Guerra Mundial y la descolonización, el Magreb y Oriente Próximo se convirtieron en un campo de batalla para las dos grandes potencias de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la URSS. Estas dos superpotencias buscaron crear y cambiar los gobiernos de esta zona para que les beneficiasen tanto estratégicamente como en materia de importación de recursos naturales (Freeman, 2017). Mientras el bloque occidental conseguía el apoyo de los reinos arábigos, Marruecos, Túnez y creaba los estados “artificiales” de Israel y Líbano, el comunismo se extendía por el mundo árabe en su variante de socialismo árabe ocupando el poder en Egipto, Libia, Siria, Argelia o Irak. Muchos de los problemas que existían previamente a las revueltas de 2011 están derivados de este conflicto, tales como la relación árabe-israelí, el aumento de poder de Arabia Saudí, la división social de Yemen, la llegada del islamismo a Irán o el surgimiento de grupos terroristas a raíz de intervenciones militares en Afganistán, Kuwait o Irak.

Sin embargo, esta Guerra Fría se ha trasladado a nuestros tiempos con nuevos actores. Hoy en día podemos hablar de una Guerra Fría Árabe entre el reino absolutista de Arabia Saudí y la teocracia de Irán. Estos dos países, enfrentados no solo en materia de estrategia e influencia, sino con un conflicto religioso y étnico que data de hace miles de años (guerra suníes-chiís y conflicto entre persas y árabes). Estos dos países se han convertido en las potencias dentro de la región gracias a la exportación de recursos energéticos y han creado una red de influencia con el objetivo de dominar la zona desde las sombras. Mientras Arabia Saudí, con el beneplácito de Estados Unidos a cambio de ser su garante de seguridad en la región, tiene intervenidos los gobiernos de Yemen, la mayoría de los emiratos arábigos y Egipto, Irán trata de ganar peso interviniendo en Siria, Líbano y en los rebeldes yemeníes con el beneplácito de Turquía y Rusia. Estas potencias, como ocurrió en el siglo XX, han descartado enfrentarse frontalmente y lo hacen a través de terceros, destruyendo a su paso los países que han decidido que serán sus campos de batalla. Este es el caso de Yemen, Siria y Libia, tres estados incapaces de llevar a cabo un proyecto democrático debido a las interferencias

continuas de Arabia Saudí e Irán.

Tampoco ha ayudado en la estabilidad de la región que los estados fueran creados por las potencias europeas “con escuadra y cartabón”. Salvo naciones históricas como Marruecos, Egipto, Irán (Persia) y Jordania el resto son estados creados tras la colonización sin tener en cuenta la afinidad étnica ni cultural. Además, la creación de “estados colchón” para mantener el equilibrio de fuerzas en la zona como son Israel (entre Egipto y Arabia Saudí) y Líbano (evitando la expansión de los chiís de Siria) ha creado un rechazo social dentro de la región y un odio hacia estos países muchas veces injustificado.

Todo esto se ha dado con el beneplácito de las anteriores superpotencias, Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia y sus aliados por otro, ya que quieren mantener sus privilegios en la zona aunque sin intervenir directamente en la misma, dejando a nuevos actores que actúen de testaferros de sus intereses a cambio de mirar hacia otro lado cuando se producen crímenes contra la humanidad, matanzas injustificadas, desigualdad social o discriminación.

¿Es posible que esta Guerra Fría Árabe termine y los distintos países puedan tomar su propio rumbo sin interferencias? La respuesta es un no rotundo, al menos en el medio plazo. La carrera armamentística entre Arabia Saudí e Irán sigue escalando y su presencia en los conflictos latentes sigue siendo muy activa, así como su financiación de grupos terroristas cuya causa esté alineada con sus intereses (Fuentes Cobo, 2015). El único punto al que se puede agarrar la libertad en el mundo árabe es Qatar y su medio de comunicación Al Jazeera (Foley, 2012). Qatar, otra monarquía autoritaria con poco respeto por los Derechos Humanos y con crímenes a sus espaldas, se ha erigido como la defensora de la libertad de prensa en el mundo árabe, o como mínimo garantiza el acceso a información veraz contraria a los intereses de las potencias. Su papel durante la primavera árabe, dando cobertura a las revueltas cuando los medios nacionales eran silenciados, así como su papel activo contra la monarquía saudí y la teocracia iraní han servido para destapar grandes escándalos que hubiesen sido tapados por otros medios locales y omitidos por los medios occidentales. Este es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jamal Khashoggi por parte de sicarios de Mohammad bin Salman en una embajada, que fue filtrado por Al Jazeera. Sin embargo, no se puede considerar a Al Jazeera como un medio 100% independiente, ya que está sujeto a los intereses de la familia real qatari.

Por tanto, es inviable pensar en que en el corto plazo la región podrá vivir sin presiones externas, tanto a nivel local como internacional, lo que hace difícil que los conflictos nacionales y cambios de forma de gobierno puedan producirse de forma natural y acorde a los intereses de la población. Mientras la comunidad internacional permita a Irán y Arabia Saudí inmiscuirse en los asuntos de otros estados a través de intervenciones militares, financiación de grupos terroristas, bloqueos financieros o apoyos políticos, estos países no podrán ser totalmente libres y por tanto su población seguirá anclada a los intereses de dos estados autoritarios y sus lacayos.

## **Conclusión final:**

### **Los beneficios y perjuicios de la primavera árabe y el futuro del mundo árabe**

Sin duda la primavera árabe y todos los sucesos que siguieron a las revueltas de 2011 en Túnez han sido el acontecimiento más relevante dentro del mundo árabe en el siglo XXI. La capacidad de contagio de esta ola democrática llegó desde Tánger hasta Teherán, con una población civil otrora reprimida buscando ganar derecho y peso en la toma de decisiones sobre el futuro de su país. Sin embargo, y teniendo como excepción el caso de Túnez, la primavera árabe no puede sino calificarse como un fracaso en términos de cambio democrático dentro del mundo árabe. Solo un país ha logrado instaurar un sistema político democrático, la mayoría de regímenes han mantenido su poder y algunos han pasado a ser campos de batalla y minas de refugiados, mafias de inmigración y grupos terroristas.

En líneas generales, la primavera árabe ha sido un perjuicio para la región. Salvo Túnez, ninguna población ha logrado avances reales en términos de materia democrática y la mayor parte de líderes siguen o siendo los mismos o herederos directos de los caídos en 2011. A cambio de un camino en círculo para acabar en el mismo punto, la primavera árabe ha dejado decenas de miles de muertos, presos políticos, refugiados y exiliados, así como ha destruido la economía y dividió a la sociedad en aquellos países en los que estalló un conflicto armado. Si vamos caso por caso, en Marruecos, Argelia, los reinos arábigos y Jordania sigue gobernando el mismo jefe de estado con los mismos poderes absolutistas, en Egipto se ha pasado de un dictador como Mubarak a una dictadura militar incluso más dura, Libia está en guerra civil desde 2013 con el país partido en dos, Yemen sufre una crisis humanitaria sin precedentes y en Siria actualmente existen hasta cuatro fuerzas armadas que reclaman gobernar parte o todo el país. Además, la primavera árabe ha terminado produciendo una proliferación de grupos terroristas solo comparable antes del 11-S. Las filiales de Al-Qaeda se han fortalecido, Hezbollah ha ganado poder en Siria y Líbano apoyada por Irán, los Hermanos Musulmanes han desarrollado brazos armados y, lo más relevante, ha surgido el Daesh o Estado Islámico en Siria e Irak así como sus filiales en Yemen o Libia.

Buscando los beneficios de la primavera árabe lo primero que podemos concluir es que son pocos, aislados y más esperanzas al futuro que realidades en el presente. El primero y más obvio es que al menos un estado árabe ha logrado transicionar desde una dictadura hasta un sistema democrático, lo que crea un precedente y una línea a seguir para los demócratas de otros países. En Túnez, pese a seguir siendo un estado con problemas económicos y fractura social, la calidad de vida de la población ha mejorado respecto a 2011, por lo que al menos la primavera árabe ha sido beneficiosa para una población en concreto. La primavera árabe también ha servido para avivar las ansias de democracia y libertad por parte de la ciudadanía árabe. Ya no son un actor pasivo, demandan cambios. Por último, la primavera árabe ha demostrado que un movimiento democrático conjunto dentro del mundo árabe es posible y como los problemas que la causaron siguen existiendo también existe la posibilidad de que se produzca una segunda ola democrática que esta vez si consiga cambios reales en la región.

Respecto al futuro a corto plazo, es de esperar que la situación siga siendo muy inestable, especialmente en Oriente Próximo. La guerra de Siria sigue sin vistas a finalizar, el conflicto árabe-israelí se ha acentuado en los últimos meses, la guerra de poder entre Arabia Saudí, Qatar e Irán continua y nuevos líderes autoritarios como Erdogan en Turquía están ganando poder ante la incapacidad de las potencias occidentales de hacer frente a las amenazas traducidas en el no control de la inmigración ilegal o dejar paso libre a millones de refugiados sirios o libios. En el Magreb la situación parece más estabilizada, aunque no exenta de retos. Marruecos mantiene su monarquía absoluta y sus conflictos locales con Argelia, Mauritania y España por el asunto del Sáhara

Occidental, Argelia mantiene a su presidente pese a sus problemas de salud y el surgimiento de opositores, Túnez afronta la llegada del populismo a su república, Egipto sigue en una dictadura militar indefinida y el conflicto libio parece cercano a una tregua, aunque en cualquier momento podría volver a estallar.

A medio y largo plazo es difícil adivinar el futuro del mundo árabe. Sabemos que va a estar muy ligado a la lucha de poder entre Arabia Saudí e Irán y que estará muy ligado a las consecuencias económicas que deje la crisis del coronavirus pero no sabemos que conflictos nuevos surgirán. La posibilidad de una nueva ola democrática existe, ya que los problemas que provocaron la de 2011 persisten, pero también existe la posibilidad de un giro autoritario que acabe con la democracia tunecina. La única verdad es que el destino de estos países es incierto.

La conclusión final sobre el efecto de la primavera árabe en el mundo árabe es que este ha sido en líneas generales negativo para la población de estos países. Este hecho histórico ha reforzado a los regímenes autoritarios, provocado conflictos civiles, crisis humanitarias y ha otorgado un gran poder a nuevas potencias de corte autoritario como son Arabia Saudí e Irán, dos potencias enfrentadas que podrían colisionar en cualquier momento y crear un conflicto armado sin precedentes en la región. La factura de la primavera árabe es de un giro democrático a cambio de miles de muertos, detenidos y refugiados. La única esperanza a nivel democrático en la región es que se ha creado precedente y se ha logrado movilizar a una población tradicionalmente pasiva. La primera primavera árabe acabó en pesadilla, pero el sueño de que una segunda traiga la libertad al mundo árabe existe y solo hace falta una nueva chispa, como fue el suicidio de Bouazizi, para que vuelva a prender la llama de la democracia.

*No debe olvidarse que el pan, la libertad y la justicia social  
que demandaban los manifestantes  
hace cuatro años siguen siendo asignaturas pendientes  
que podrían traducirse en una segunda ola revolucionaria.  
(Ignacio Álvarez-Ossorio)*

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Alcolea Aullón, A. (2015). “Miradas esquivas al centro de nuestro mundo. Las revueltas árabes en los think-tanks españoles”, en *revistadecooperacion.com*, núm 6, pp. 51-57.
- Algora Weber, M. D. (2014). “Las transiciones de la Primavera Árabe en Marruecos, Argelia y Jordania”, en *Cuadernos de estrategia*, núm 168, pp. 215-248.
- Álvarez-Ossorio, I. (2011, 13 de abril). “Siria ante la revuelta: el blindaje del régimen”, en *Análisis del Real Instituto Elcano*, ARI 66/2011, consultado en [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano\\_es/contenido](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido).
- Álvarez-Ossorio, I. (2013). “La transición egipcia: Crónica de una revolución fracasada”, en *Ferrol Análisis: Revista de pensamiento y cultura*, núm. 28, pp. 61-70.
- Álvarez-Ossorio, I. , et al. (2013). *Sociedad civil y transiciones en el Norte de África*. Encuentro Civil EUROMED, Barcelona, Icaria.
- Álvarez-Ossorio, I. (2016). “Anatomía del conflicto sirio. De la revolución antiautoritaria a la guerra por delegación”, en *Hesperia Culturas del Mediterráneo*, núm 9, pp. 111-126.
- Andreatta, A. (2017). “Libia tras la primavera árabe. Una senda hacia Europa entre narcoterrorismo y refugiados”, en *XII Congreso Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, recuperado de: <https://aecpa.es/es-es/libia-tras-la-primavera-arabe-una-senda-hacia-europa-entre-narcoterro/congress-papers/2343/>
- Berger, L. (2020). “Donald Trump and the Arab World: The Disrupter in Chief faces the Status Quo”, en *Sicherheit & Frieden*, 38(2), pp. 77-82. <https://doi.org/10.5771/0175-274x-2020-2-77>
- Bustos García de Castro, R. (2014). “Argelia: de la no-primavera a la sucesión (2011-2014)” en González del Miño, P. *Tres años de revoluciones árabes*. Madrid, Catarata, pp. 85-97.
- Cerrolaza, Erika (2013), “La sociedad civil argelina y la Primavera árabe”, en Álvarez-Ossorio, I., et al. *Sociedad civil y transiciones en el Norte de África*. Encuentro Civil EUROMED, Barcelona, Icaria, pp. 71-126.
- Chaya, S. (2016, noviembre). “Estado-Rehén. Líbano a cinco años de la primavera árabe en Siria”, en *VIII Congreso de Relaciones Internacionales – Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata*, La Plata (Argentina), recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57920>
- Dorado Noguerras, S. M. (2016). “Marruecos en transición: democracia, sociedad civil y desarrollo humano”. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, núm. 12, pp. 101-112. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i12.141>
- Fabani, O. (2011). “La primavera árabe y sus derivaciones en Bahrein”, en *Revista Integración y Cooperación Internacional*, núm. 8, pp. 2-7

- Foley, S. (2012). “Los estados del golfo y la primavera árabe”, en *Foro Internacional*, vol. LII, núm. 2, enero-marzo, pp. 488-509
- Fuentes Cobo, I. (2015). “Yemen, o como convertirse en estado fallido”, en *Panorama geopolítico de los conflictos*, Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa), pp. 235-260. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6147353>
- García-Luengos, Jesús, “La Primavera Árabe en Marruecos. La sociedad civil marroquí”, en Álvarez-Ossorio, I. et al. (2013). *Sociedad civil y transiciones en el norte de África*, Barcelona, Icaria, pp. 71-126.
- Kaya, K. (2012). “Turquía y la primavera árabe”, en *Military Review. Revista profesional del ejército de EUA*, noviembre-diciembre, pp. 2-10. Consultado en [http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview\\_20121231\\_art004SPA.pdf](http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20121231_art004SPA.pdf)
- Márquez Mesa, V. y Cortes Hernández, M. C. (2019), “Proyección geopolítica iraní después de la primavera árabe”, Medellín (Colombia), Institución Universitaria Esumer (Facultad de Estudios Internacionales). Recuperado de: <http://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1851?locale=en>
- Mejahdi, K. (2008). “La democratización de Marruecos, un largo proceso híbrido. Las instituciones como intermediarias entre la base estructural y las estrategias de la élite política”. *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, núm. 8, pp. 1–36.
- Melián Rodríguez, L. (2016). “Proceso de cambio político tras la primavera árabe. Un estudio comparado de los casos de Túnez, Egipto y Jordania”. Salamanca, Universidad de Salamanca. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53698>
- Milanovic, M. (2019). “The Murder of Jamal Khashoggi: Immunities, Inviolability and the Human Right to Life”. *Human Rights Law Review SSRN Electronic Journal*. Published. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3360647>
- González del Miño, P. (de) (2014). *Tres años de revoluciones árabes*. Madrid, Editorial Catarata.
- Moreira, O. J. (2014). “Los intereses de Sarkozy y las tribulaciones de la política francesa hacia Libia”, en *European Scientific Journal*, 10(25), pp. 460-473. Recuperado de: <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4288>
- Rayes el-Kantar, A. R. (2012) “La paradoja del factor geopolítico en Líbano ante la crisis política y social del medio oriente a raíz de la primavera árabe”, en *Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Salle*, julio. Recuperado de: <https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/547>

- Reyes, R. (2015). “La política española hacia el Magreb y Oriente Medio. Primavera Árabe”, en *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 39(3), pp. 5-16. [https://doi.org/10.5209/rev\\_NOMA.2013.v39.n3.48318](https://doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v39.n3.48318)
- Szmolka, I. (2015). “Introducción: actores y dinámicas de cambio en el Norte de África y Oriente Próximo”, en *CIDOB d'Afers Internacionals*, 109, pp. 7-21.
- Szmolka, I. (2016). “Reseña de Álvarez-Ossorio, I. (de) (2015): La Primavera Árabe revisitada. Reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo”, Pamplona: Thomas Reuters Aranzadi, en *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 20, pp. 201-204.
- Youd, K. (2014). “The Winter’s Tale of Corruption: The 2022 FIFA World Cup in Qatar, the Impending Shift to Winter, and Potential Legal Actions against FIFA” en *Northwestern Journal of International Law & Business*, 167. Recuperado de: <https://heinonline.org/HOL/LandingPagehandle=hein.journals/nwjilb35&div=8&id=&page=>